



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



**TESIS**

LA INCORPORACIÓN DE LA EXECUTIO EN EL PROCESO DE ARBITRAJE  
PARA GENERAR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

**PRESENTADO POR**

Bach. Raúl Eduardo López Damián

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**ASESOR**

**Dr. WALTER RAMOS MANAY**

**LAMBAYEQUE, 2018**

**Tesis denominada:** "LA INCORPORACIÓN DE LA EXECUTIO EN EL PROCESO DE ARBITRAJE PARA GENERAR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL", **presentada para optar el TÍTULO DE ABOGADO, por:**

---

Raúl Eduardo López Damián  
BACHILLER

---

DR. WALTER RAMOS MANAY  
ASESOR

**APROBADO POR:**

---

MAG. JUAN MANUEL RIVERA PAREDES  
**PRESIDENTE**

---

MAG. LEOPOLDO IZQUIERDO HERNANDEZ  
**SECRETARIO**

---

DR. VICTOR ANACLETO GUERRERO  
VOCAL

## DEDICATORIA

A mis padres, Clotilde y Cosme, que son el ejemplo vivo de amor, enseñanza y superación, y mi hijo Bruno Joaquín, por impulsarme a ser mejor persona cada día.

## **AGRADECIMIENTO**

A Geraldine, por acompañarme en todos los retos de mi vida, y por contagiarme de su incansable deseo de superación.

## INDICE

DEDICATORIA .....	1
<b>AGRADECIMIENTO .....</b>	<b>2</b>
<b>INDICE .....</b>	<b>3</b>
<b>RESUMEN .....</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>9</b>
<b>CAPITULO I .....</b>	<b>12</b>
<b>ASPECTOS METODOLOGICOS .....</b>	<b>12</b>
1.1. Realidad Problemática .....	12
1.1.1. Planteamiento del Problema .....	12
1.1.2. Formulación del Problema .....	15
1.2. Justificación e Importancia del Estudio .....	15
1.2.1. Justificación del Estudio .....	15
1.2.2. Importancia del Estudio .....	16
1.3. Objetivos .....	16
1.3.1. Objetivo General .....	16
1.3.2. Objetivos Específicos .....	17
1.4. Hipótesis .....	17
1.5. Variables .....	17
1.5.1. Variable Independiente .....	17
1.5.2. Variable Dependiente .....	17
1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección .....	18
1.6.1 Métodos .....	18
1.6.2. Técnicas .....	19
<b>CAPITULO II .....</b>	<b>21</b>
<b>EXECUTIO COMO POTESTAD DE IMPERIO PROCESAL .....</b>	<b>21</b>
2.1. Marco General .....	21

2.2. Poderes de la Jurisdicción .....	21
2.2.1. El Poder de la Notio .....	23
2.2.2. Vocatio.....	23
2.2.3. Coercitio o el Poder de Coerción.....	23
2.2.4. El poder de decisión o iudicium .....	24
2.2.5. El Poder de Executio o Imperium .....	24
2.3. Conceptualización del Executio o Imperium .....	25
2.4. La Jurisdicción Arbitral frente a la Jurisdicción Judicial .....	26
<b>CAPITULO III .....</b>	<b>34</b>
<b>EL ARBITRAJE EN EL PERÚ .....</b>	<b>34</b>
3.1. Marco Histórico del Arbitraje.....	34
3.1.1. El Código de Enjuiciamiento en Materia Civil (1852) .....	34
3.1.2. El Código de Procedimientos Civiles (1912).....	35
3.1.3. El Código Civil (1936) .....	37
3.1.4. Constitución Política de 1979 .....	37
3.1.5. Código Civil de 1984 .....	39
3.1.6. Constitución Política de 1993 .....	42
3.1.7. El Código Civil de 1993 y La Ley 25925 - Primera Ley de Arbitraje .....	43
3.1.8. Ley Nº 26572 – Segunda Ley de Arbitraje .....	46
3.1.9. Decreto Legislativo Nº 1071 – Actual Ley de Arbitraje .....	53
3.1.10. Decreto Legislativo Nº 1231 .....	54
3.2. Conceptualización del Arbitraje .....	55
3.3. Naturaleza Jurídica del Arbitraje.....	58
3.3.1. Teoría Contractual.....	60
3.3.2. Teoría Jurisdiccional.....	63
3.3.3. Teoría Mixta .....	66
3.4. Importancia del Arbitraje .....	68
3.5. Objeto del Arbitraje.....	69
3.6. Características del Arbitraje.....	70

<b>3.7. Tipos de Arbitraje .....</b>	<b>71</b>
<b>3.7.1. Según la Decisión de las Partes .....</b>	<b>71</b>
<b>3.7.1.1. Arbitraje Institucional / Administrado .....</b>	<b>71</b>
<b>3.7.1.2. Arbitraje Libre o Ad Hoc .....</b>	<b>73</b>
<b>3.7.2. Según la Calidad del Pronunciamiento, Actuación de los Árbitros y Naturaleza de la Decisión .....</b>	<b>74</b>
<b>3.7.2.1. Arbitraje de Derecho .....</b>	<b>74</b>
<b>3.7.2.2. Arbitraje de Conciencia .....</b>	<b>74</b>
<b>3.7.3. Según la Fuente de la cual Proviene: El Acuerdo de Voluntades o Disposición de la Ley .....</b>	<b>75</b>
<b>3.7.3.1. Arbitraje Voluntario .....</b>	<b>75</b>
<b>3.7.3.2. Arbitraje Forzoso .....</b>	<b>76</b>
<b>3.7.4. Según se trate de un Diferendo Nacional o Internacional.....</b>	<b>77</b>
<b>3.7.4.1. Arbitraje Nacional.....</b>	<b>77</b>
<b>3.7.4.2. Arbitraje Internacional.....</b>	<b>78</b>
<b>3.8. Principios del Arbitraje .....</b>	<b>78</b>
<b>3.9. Aspectos Procesales del Arbitraje.....</b>	<b>80</b>
<b>3.9.1. Convenio Arbitral .....</b>	<b>80</b>
<b>3.9.1.1. Efectos del Convenio Arbitral .....</b>	<b>82</b>
<b>3.9.2. Laudo Arbitral .....</b>	<b>83</b>
<b>3.9.2.1. Clases de Laudo .....</b>	<b>84</b>
<b>3.9.2.1.1. Laudo Final.....</b>	<b>84</b>
<b>3.9.2.1.2. Laudo Parcial.....</b>	<b>84</b>
<b>3.9.2.2. Efectos del Laudo Arbitral .....</b>	<b>85</b>
<b>CAPITULO IV .....</b>	<b>87</b>
<b>LEGISLACION COMPARADA .....</b>	<b>87</b>
<b>4.1. El Caso En Colombia .....</b>	<b>87</b>
<b>4.2. El Caso En Ecuador.....</b>	<b>88</b>
<b>4.3. El Caso En Chile .....</b>	<b>89</b>
<b>4.4. El Caso Europeo - España .....</b>	<b>89</b>

4.5. Ley Modelo De La Comisión De Las Naciones Unidas Para El Derecho Mercantil Internacional - CNUDMI, Sobre Arbitraje Comercial Internacional - 1985 .....	91
<b>CAPÍTULO V</b> .....	94
<b>ANÁLISIS Y RESULTADOS</b> .....	94
<b>4.1.    Análisis de los resultados:</b> .....	94
<b>4.1.1.    Resultados del análisis jurisdiccional.</b> .....	94
<b>4.1.2.    Resultados de la opinión de operadores jurídicos.</b> .....	98
<b>CAPÍTULO VI</b> .....	111
<b>CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS</b> .....	111
<b>5.1.    DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS</b> .....	111
<b>5.1.1.    Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la executio como potestad de imperio procesal”</b> .....	111
<b>5.1.2.    Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la estructura del proceso de arbitraje en el Perú”.</b> .....	112
<b>5.1.3.    Discusión sobre el objetivo: “Analizar la necesidad de modificar la regla de ejecución del laudo arbitral a fin de proporcionarle eficacia al proceso”.</b> .....	114
<b>5.2.</b> .....	116
<b>5.3.    RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES</b> .....	117
<b>5.4.    CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS</b> .....	120
<b>CONCLUSIONES</b> .....	122
<b>RECOMENDACIONES</b> .....	125
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	128
<b>ANEXO 1: Cuestionario de Encuesta</b> .....	131



## **RESUMEN**

De entre los medios alternativos de solución de conflictos surge el Arbitraje como un mecanismo especial para conseguir tal fin; teniendo en cuenta que ello requiere la satisfacción que otorga la cristalización del acuerdo o el resultado plasmado en el Laudo como decisión final, se verifica pues que ante la imposibilidad o el incumplimiento se requiere del imperio jurisdiccional para conseguir su ejecución; precisamente esta situación es la que da impulso a la investigación proyectada, encontrando en las potestades jurisdiccionales la posible solución al problema advertido, específicamente en el uso del imperio de la executio.

Tal postura se asume en razón de la advertencia de la ausencia de eficacia del Arbitraje, siendo necesario sugerir medidas de solución que permitan alcanzar la finalidad de no recurrir al ámbito jurisdiccional, sobre lo cual se enmarcará el desarrollo y la discusión de la tesis proyectada, en base a los lineamientos de la teoría general del proceso, los fundamentos del arbitraje y la justificación de la solución de conflictos alternativamente a la jurisdiccionalidad del Poder Judicial.

### **Palabras Claves:**

**La executio, proceso de arbitraje, laudo arbitral.**

## **ABSTRACT**

Arbitration arises from among the alternative means of conflict resolution as a special mechanism to achieve this goal; Bearing in mind that this requires the satisfaction granted by the crystallization of the agreement or the result set out in the Award as a final decision, it is verified that before impossibility or non-compliance requires the jurisdictional empire to achieve its execution; precisely this situation is what gives impetus to the projected investigation, finding in the jurisdictional powers the possible solution to the problem warned, specifically in the use of the empire of the executio.

Such position is assumed because of the warning of the lack of effectiveness of the Arbitration, being necessary to suggest measures of solution that allow reaching the purpose of not resorting to the jurisdictional scope, on which the development and the discussion of the projected thesis will be framed, based on the guidelines of the general theory of the process, the fundamentals of arbitration and the justification of the solution of conflicts, alternatively to the jurisdictionality of the Judicial Power.

Keywords:

The executio, arbitration process, arbitration award.

## INTRODUCCIÓN

La naturaleza jurídica del proceso arbitral es que los interesados en conflicto eviten llevar esta circunstancial controversia ante un juzgador, no usar las herramientas del Poder Judicial dado que las mismas se encuentran recogidas en el ámbito arbitral, por lo que someterse a ella se reviste de la seguridad jurídica necesaria; más allá de eso se aprecia la situación generada cuando ante el incumplimiento de la obligación estipulada en laudo, ha de requerirse la ejecución mediante proceso de ejecución en la vía civil, lo cual no sólo genera un perjuicio no sólo económico sino procesal por la cuestión de la demora en la ejecución de la obligación, además del riesgo que representa todo ello.

Ante esta peculiar circunstancia se percibe como posible solución a estos últimos defectos, el otorgamiento de facultades ejecutivas al árbitro, ello con el fin de lograr que tenga la capacidad de hacer cumplir sus propias decisiones, tal cual las tiene el Juez en el proceso civil. Bajo ese lineamiento, para esta investigación se propuso la siguiente interrogante como formulación del problema: ¿De qué manera la incorporación de la executio en el proceso de arbitraje generará eficacia en la ejecución del laudo arbitral?

Partiendo del cuestionamiento indicado y en base a una apreciación superficial de la realidad se planteó una posible solución al problema, lo cual se refleja en la hipótesis que a la letra dice: Si, se incorpora la executio como potestad en el proceso de arbitraje; entonces, se logrará la eficacia en la ejecución del laudo arbitral de

manera que el árbitro podrá hacer cumplir sus decisiones; afirmación que para poder contrastarse se requerirá de la división en dos variables, las mismas que dan origen a los objetivos específicos, siendo éstos los que marcan las metas de la investigación para la generación de los contenidos.

Así, en el Capítulo I, se describieron todas las pautas metodológicas que sirvieron de guía para el desarrollo de la investigación, incluyendo la formulación del problema, hipótesis, así como los métodos de estudio, pasando por la población, muestra y la forma en que se hubieron de tratar los datos obtenidos.

En el Capítulo II, se procuró la descripción de la executio como potestad de imperio procesal, contenido que busca dejar en claro la función de que cumple la executio, los fines o utilidades de la herramienta jurídica descrita desde el punto de vista doctrinario, para con dicha concepción poder afianzar la propuesta de la investigación.

Seguidamente en el Capítulo III, se toma en cuenta el ámbito del arbitraje en el Perú, recuento de la cuestión histórica y actual respecto a la figura jurídica que procura el reconocimiento preciso del esquema arbitral y su reconocimiento en la regla.

Luego se tiene en cuenta la Legislación Comparada desarrollada en el Capítulo IV, donde se ha procurado mostrar la forma en que se trata la ejecución del laudo arbitral en otros países, a fin de poder escoger de entre ellas la valoración del modelo más adecuado, procurando una propuesta que procure celeridad y a través de ello la garantía de seguridad jurídica.

Ya en el Capítulo V, la investigación se torna más analítica, pues se desarrollan aspectos de observación de la realidad, lo cual genera datos o cifras que al ser cruzados idealmente con la doctrina permiten establecer ciertas circunstancias, como el hecho de que la forma en que se ha configurado la ejecución de los laudos arbitrales, no es lo suficientemente eficaz dada la demora de su gestión.

Con todos los resultados reunidos se logra conformar la contrastación de la hipótesis, que se aprecia en el Capítulo VI, partiendo por la discusión de cada uno de los objetivos, resultado que permitió la validación de las variables y estos a su vez la construcción de afirmaciones que al unirse como nuevas variables formaron la hipótesis conclusiva.

Finalmente ya contrastada la hipótesis final con la inicial, se ha logrado arribar a las conclusiones que reflejan los resultados de la investigación, sobre los cuales se crean las recomendaciones, conformando la propuesta que constituye el aporte de la investigación, la cual se pone a disposición del criterio analítico de los miembros del jurado.

El Autor.

# **CAPITULO I**

## **ASPECTOS METODOLOGICOS**

### **1.1. Realidad Problemática**

#### **1.1.1. Planteamiento del Problema**

La presente proyección toma su iniciativa en base a la verificación de la realidad respecto de la constancia de los requerimientos de ejecución de laudos arbitrales ante el órgano jurisdiccional, dicha experiencia ha permitido reflexionar sobre los fines del proceso de arbitraje, el mismo que se asume como un medio alternativo de solución de conflictos, tan es así que una de las justificaciones de su existencia es evitar que las partes acudan al órgano jurisdiccional.

Efectivamente lo que se debe tener en cuenta es el fin es decir se requiere la satisfacción que otorga la cristalización del acuerdo o el resultado plasmado en el Laudo como decisión final, se verifica pues que ante la imposibilidad o el incumplimiento se requiere del imperio jurisdiccional para conseguir su ejecución; precisamente esta situación es la que da impulso a la investigación proyectada, encontrando en las potestades jurisdiccionales la posible solución al problema advertido, específicamente en el uso del imperio de la executio.

Entender esta idea requiere de ampliar el panorama, trasladando la narración al aspecto histórico que indica al arbitraje nacido como un uso o una costumbre

comercial a través de la cual los comerciantes decidían resolver sus controversias fuera de los aparatos judiciales estatales comprometiéndose a cumplir y respetar la decisión a la que arribe el tercero al cual se sometían. Este uso comercial fue desarrollándose positivamente a través de convenciones o tratados internacionales y directrices, en lo que actualmente conocemos como Convención de Nueva York tal cual lo indica el profesor Grigera Naón (2006), quien en su artículo jurídico titulado: *Arbitraje Comercial Internacional, ¿Quo Vadis?*, publicado en el libro: titulado: *Estudios de Arbitraje, Libro Homenaje al Profesor Patricio Aylwin Azócar*, en el cual indica:

La más clara expresión de dicho apoyo es la ratificación en todas partes del mundo de la Convención de las Naciones Unidas de Nueva York de 1958 en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (Convención de Nueva York), que constituye pieza clave en el desarrollo contemporáneo del arbitraje comercial internacional (...) La amplia, decisiva y vital influencia de la Convención de Nueva York ha encontrado confirmación en el texto mismo de la Ley Modelo, de aceptación general, como ya se ha dicho, en muchas jurisdicciones del mundo desarrollado y en desarrollo (pág. 589).

Tal diseminación se traslada a diferentes porciones del mundo tal como una alternativa de solución de conflictos que toma mayor fuerza en el siglo XX, tal cual lo indica el profesor Mantilla Serrano (2007) en su artículo jurídico titulado: *La Autonomía del Derecho del Arbitraje Internacional: ¿Hacia un arbitraje realmente autónomo?*, donde señala lo siguiente:

En derecho comparado, la mayoría de los sistemas jurídicos en sus orígenes confiaban la regulación del arbitraje en los códigos procesales nacionales. Con el auge del comercio internacional y el marcado uso del arbitraje como método preferido para resolver controversias comerciales, la segunda mitad del siglo XX dio origen a la tendencia, hoy consolidada, de

promulgar leyes de arbitraje autónomas y desligadas de los cuerpos normativos procesales o sustantivos. Esta tendencia es particularmente evidente al analizar las leyes de arbitraje que han sido expedidas en Latinoamérica en los últimos años (pág. 209).

Esto es totalmente factible de ser comparado en nuestro país, en efecto desde el año 1992 hasta la fecha y de forma ininterrumpida, contamos con cuerpos normativos que específicamente regulan lo concerniente al derecho de arbitraje, desde el Decreto Ley Nº 25935, pasando por la Ley Nº 26572 hasta el actual Decreto Legislativo Nº 1071.

Es por ello que resulta importante preocuparse por la situación del arbitraje en nuestra región, así se toman las palabras de la doctora Ledesma Narváez (2014) quien en su artículo científico titulado: *¿El Laudo pone fin a Procedimiento Arbitral?*, donde señala sobre la situación actual de la utilización del arbitraje diciendo:

Una vieja práctica que se ha generalizado en el arbitraje nacional es proclamar que el procedimiento arbitral culmina con la emisión del laudo. Se dice que luego de emitido el laudo, frente a la resistencia del condenado a cumplir con este, debe buscarse su satisfacción en sede judicial a través del proceso de ejecución, pues el poder de la executio en dichos procesos es atributo exclusivo de la jurisdicción; confundiendo con dicho razonamiento el “proceso de ejecución en sede judicial” con el “poder de ejecución” propio de la jurisdicción (pág. 395).

Así es que toma forma el planteamiento de esta investigación, precisamente resalta la necesidad de incorporar la potestad de la executio en la estructura del proceso de arbitraje, siendo así, se procederá a formular la interrogante que dará origen a la investigación.



### **1.1.2. Formulación del Problema**

¿De qué manera la incorporación de la executio en el proceso de arbitraje generará eficacia en la ejecución del laudo arbitral?

## **1.2. Justificación e Importancia del Estudio**

### **1.2.1. Justificación del Estudio**

La presente proyección se justifica en el resultado de observar la realidad que afronta la ejecución de los laudos ante la imposibilidad o renuencia de una de las partes, dejando sin eficacia a la decisión tomada en dicho acto; lo cual merece un amplio análisis, sin dejar de lado la necesidad de conseguir cristalizar el fin que justifica la existencia del proceso de arbitraje, esto es evitar el paso por la jurisdiccionalidad del Poder Judicial.

Otra de las justificaciones que se ubican como móvil del presente proyecto es el efecto comercia que produce la ineficacia de la ejecución de los laudos arbitrales, esto es, tal circunstancia genera trabas en el movimiento comercial en su gran mayoría de casos, lo cual ha de ser investigado a fin de establecer numéricamente tal afectación para luego identificar los parámetros jurídicos que permitirían la salvaguarda de estos intereses.

### **1.2.2. Importancia del Estudio**

Realizar esta proyección se reviste de importancia dada la presunción del resultado a obtener, es decir, demostrar primero la afectación jurídica y comercial producida por la inejecución del laudo arbitral y en segundo lugar la verificación de la ineficacia de los fines del arbitraje por aquella causa, permitirá identificar las razones que la motivan, presumiendo ha de ser la ausencia del imperio que otorga la potestad del executio en la estructura procesal del arbitraje a fin de que se pueda exigir la ejecución de la decisión contenida en el laudo observado.

Otra de las razones que incorpora importancia a este trabajo de investigación es el efecto social que ha de producir la propuesta que se genere, así las partes recurrentes al laudo arbitral tendrán la certeza que otorga la seguridad jurídica de acceder a un proceso alternativo de solución de conflictos, efectivamente proporcionará los fines para los que fue creado, garantía de la eficacia respecto a la ejecución del laudo arbitral.

## **1.3. Objetivos**

### **1.3.1. Objetivo General**

Determinar si la incorporación de la executio en el proceso de arbitraje generaría eficacia en la ejecución del laudo arbitral.

### **1.3.2. Objetivos Específicos**

- ✓ Desarrollar doctrinariamente la executio como potestad de imperio procesal.
- ✓ Estudiar la estructura del proceso de arbitraje en el Perú.
- ✓ Analizar la necesidad de modificar la regla de ejecución del laudo arbitral a fin de proporcionarle eficacia al proceso.

### **1.4. Hipótesis**

Si, se incorpora la executio como potestad en el proceso de arbitraje; entonces, se logrará la eficacia en la ejecución del laudo arbitral de manera que el árbitro podrá hacer cumplir sus decisiones.

### **1.5. Variables**

#### **1.5.1. Variable Independiente**

La incorporación de la executio en el proceso de arbitraje.

#### **1.5.2. Variable Dependiente**

La eficacia en la ejecución del laudo arbitral.

## **1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección**

### **1.6.1 Métodos**

En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, los cuales nos permitirán desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así tenemos:

#### **1.6.1.1. Método Exegético Jurídico**

Este método será aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas respecto al mecanismo de arbitraje; detalle que se confrontará con la realidad nacional y regional, permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis planteada.

#### **1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico**

Este método podrá ser empleado para realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico Procesal Civil, lo cual nos permitirá arribar a la mejor conclusión del informe de investigación.

#### **1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo**

Al emplear el método hipotético deductivo podremos verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos.

#### **1.6.1.4. Método Inductivo**

La aplicación de este método nos permitirá analizar el material de estudio, el mismo que ha de servir de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.

#### **1.6.2. Técnicas**

En el desarrollo de nuestro tema, haremos uso de las técnicas de recolección de la información que nos permita establecer los parámetros con los que se definirá nuestra propuesta, permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los resultados.

##### **1.6.2.1. Análisis Documental**

Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de investigación documental, fichas bibliográficas, etc., con lo cual se van a obtener datos de los archivos de fuentes documentales, de textos que se hayan publicado en materia de Derecho Procesal Civil y Arbitral, específicamente respecto a las potestades jurisdiccionales y la eficacia del mecanismo de solución de conflictos como es el caso del arbitraje.

#### **1.6.2.2. Observación**

Se utilizará la guía de observación, con la cual se va a observar la realidad socio jurídica que engloba la ejecución de las decisiones arbitrales contenidas en los laudos.

#### **1.6.2.3. Encuesta**

Se empleará la guía de encuesta; la cual será aplicada a personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son Jueces y especialistas, quienes verterán sus opiniones respecto de la problemática sobre la ausencia de la potestad para ejecutar directamente los laudos en sede arbitral.

## **CAPITULO II**

### **EXECUTIO COMO POTESTAD DE IMPERIO PROCESAL**

#### **2.1. Marco General**

El arbitraje como institución que imparte justicia privada, no puede considerarse como una jurisdicción paralela a la justicia impartida por los órganos jurisdiccionales nacionales. No existe, por tanto, una verdadera jurisdicción arbitral, sino que nos encontramos ante un método alternativo a la resolución judicial de controversias.

Si bien el laudo arbitral tiene el mismo valor que una sentencia dictada en sede judicial, pero los tribunales de arbitraje no tienen ningún poder para ejecutarlos de ahí surge la irremediable relación de dependencia entre el arbitraje y la jurisdicción. Por ello, nunca podríamos estar ante un conflicto de jurisdicción entre los órganos jurisdiccionales y el arbitraje, toda vez que el arbitraje no es una jurisdicción por la voluntad de las partes en litigio.

#### **2.2. Poderes de la Jurisdicción**

Antes de empezar hablar del tema en sí que compete a nuestra investigación es importante aclarar aquellos poderes específicos que contribuyen a la emisión de una decisión clara de fondo y, además, ésta puede hacerse cumplir cuando la ejecución

espontánea de la misma no sea posible. Ya habían sido identificados desde el derecho romano-canónico con los siguientes nombres: gnotio, vocatio, coercitio, iudicium y executio (imperium).

Con los poderes de la jurisdicción se confirma la posibilidad real que tiene un juez jurisdiccional de cumplir con su cometido en conceder una determinada tutela concreta en las tres direcciones ya consideradas. Para emitir un juicio de declaración, o para ejecutar lo declarado ha de apoyarse de la espada y de la balanza, como bien lo explica el maestro italiano Francisco Carnelutti (1994), en su obra:

*Cómo se hace un Proceso:*

El juez tiene en su mano la balanza y la espada; si la balanza no basta para persuadir, la espada sirve para constreñir. Por eso, cuando el ladrón ha sido condenado, debe ir a prisión, de grado o por fuerza; cuando al deudor le exige el juez que pague la letra de cambio, si no paga se le quitan tantos bienes cuantos son necesarios para traducirlos en el dinero necesario para el pago; cuando el juez ha ordenado la transcripción de una venta, el conservador de las hipotecas (registrador de la propiedad) la transcribe sin más, aunque una de las partes se oponga a ello. Los juristas dicen a este propósito que el juicio del juez tiene fuerza ejecutiva, y quieren decir con ello que, aunque las partes no se presten a ejecutarlo, alguien interviene para hacerlo ejecutar por la fuerza (pág. 53).

Ahora bien, las autoridades encargadas de ejercer la jurisdicción en el desempeño de sus funciones, están investidas de ciertos poderes, que en la palabras de Martín Agudelo Ramírez (2007) en su artículo titulado: *La Jurisdicción*, pueden comprenderse en cinco poderes, brindándonos una definición respecto a cada uno de los poderes de la jurisdicción, que a continuación describiremos (págs. 1 - 25):



### **2.2.1. El Poder de la Notio**

Este elemento garantiza el derecho de formar la convicción, por parte del director del proceso, con el material de conocimiento suministrado en el proceso. Los elementos de confirmación o probatorios incorporados por el juez jurisdiccional, mediante su decreto y práctica, asegurarán una decisión de fondo objetiva (Agudelo Ramírez, 2007, pág. 19). Es decir, el notio como poder de jurisdicción, permite al juez conocer la causa.

### **2.2.2. Vocatio**

Este poder permite compeler al justiciable para que comparezca al proceso, como sucede con el trámite correspondiente a las notificaciones para efectos de integración del contradictorio (Agudelo Ramírez, 2007, pág. 19). Como se puede observar de lo definido por el autor, la vocatio como poder de jurisdicción permite al juez ordenar la comparecencia de las partes.

### **2.2.3. Coercitio o el Poder de Coerción**

Posibilita que el juez director del proceso pueda ejercer sus poderes disciplinarios y castigue con sanciones, en aras que los instrumentos procesales que dirige se desarrollen sin mayores inconvenientes. Como ejemplo de este poder se consideran las sanciones emitidas por los jueces, sin perjuicio de la contradicción o defensa,

cuando exista fraude procesal o se atente en contra de la moralidad del proceso (Agudelo Ramírez, 2007, pág. 19). De la definición brindada por el autor, podemos concluir que el coertio como poder de jurisdicción permite al juez imponer medidas dentro del proceso.

#### **2.2.4. El poder de decisión o iudicium**

Corresponde al poder de sentenciar declarando el derecho que corresponde. Este poder posibilita que tras la culminación de un proceso se emita un pronunciamiento definitivo en lo referente a la tutela declarativa (Agudelo Ramírez, 2007, pág. 20). De lo dicho por el autor, podemos inferir que el iudicium, viene a ser la facultad del juez de decidir sobre la causa bajo su conocimiento.

#### **2.2.5. El Poder de Executio o Imperium**

Este poder permite que el juez, mediante actos coactivos, haga cumplir el mandato cierto contenido en un título ejecutivo cuando no se dé el cumplimiento voluntario por parte del obligado por la prestación insatisfecha (Agudelo Ramírez, 2007, pág. 20). De la definición realizada por el autor, podemos afirmar que el poder de la executio permite al juez hacer valer sus decisiones con o sin el uso de la fuerza pública.

### **2.3. Conceptualización del Executio o Imperium**

En opinión Devis Echandía (2002):

El executio también denominado poder de ejecución, se relaciona con el de coerción, pero tiene su propio sentido, pues si bien implica el ejercicio de coacción y aun de la fuerza contra la persona, no persigue facilitar el proceso, sino imponer el cumplimiento de un mandato claro y expreso, sea que éste se derive de una sentencia o de un título proveniente del deudor y al cual la ley le asigne este mérito (pág. 100).

Cuando se trata de lo primero, se refiere al poder de ejecutar lo juzgado y de hacer cumplir sus decisiones, que es el imperium de la concepción clásica. Es indispensable porque de nada serviría el proceso si obedecer lo resuelto dependiera de la buena voluntad del obligado.

Las resoluciones judiciales se deben cumplir una vez ejecutoriadas o en firme, salvo que en ellas se determine un plazo especial para hacerlo. Si se hace así, se tiene el caso de la ejecución voluntaria; pero si el deudor se niega a obedecerlas, el interesado recurre a los jueces para que por medio de la fuerza, si es necesario, impongan su cumplimiento, lo que puede obtenerse ante el mismo juez que conoció del proceso de condena en la primera instancia o mediante en un proceso distinto y por un juez diferente del que las dictó, cuando corresponda conocer del caso al funcionario a quien señalen las reglas comunes sobre competencias. Hay veces e que se necesita solamente entregar algún bien y entonces la ejecución de la sentencia toca al juez o tribunal que conoció del asunto en primera o única instancia.

## **2.4. La Jurisdicción Arbitral frente a la Jurisdicción Judicial**

Habiendo ya definido con anterioridad la conceptualización del executio como poder de la jurisdicción, es momento de desarrollar en este apartado la función que cumple el poder de executio dentro en una jurisdicción arbitral y judicial, con la finalidad de poder observar y verificar si el arbitraje tiene el carácter de jurisdicción y si goza de los poderes que forman parte de una jurisdicción.

Entre las teorías que niegan el carácter del arbitraje destaca la expuesta por Chiovenda (1997). Para este autor, el compromiso implica la renuncia “al conocimiento de una controversia por la autoridad judicial” (pág. 142). Sostiene además que:

Lo que las partes sustituyen al proceso es afín al proceso en su figura lógica, es una definición de controversias, mediante un juicio ajeno; pero el árbitro no es funcionario del Estado, no tiene jurisdicción ni propia ni delegada, no actúa la ley, no obra; sus facultades derivan de la voluntad de las partes expresadas de conformidad con la ley; su decisión (sentencia arbitral o laudo) es irrevocable por voluntad de las partes, pero no es ejecutiva. Estado hace ejecutivo el laudo mediante un acto del órgano jurisdiccional; este acto de jurisdicción respeta la naturaleza privada del laudo en sus orígenes y su ejecutoriedad, pero asume su contenido como fundamento; con esto, el laudo ya ejecutivo es equiparado al acto jurisdiccional (pág. 146).

Es evidente que el autor citado reseña la estructura del proceso arbitral y dentro del mismo se ubica las funciones y competencias que le corresponden, principalmente se puede denotar que se niega el carácter ejecutivo de los resultados que se obtienen como solución del conflicto, precisamente este aspecto es el que interesa a la investigación, puesto que se describe la facultad de corrección otorgada al laudo en

función de la ejecución que se ha de realizar con el apoyo de la entidad jurisdiccional.

Sobre este aspecto se puede recoger también la idea del investigador Wach (1997), quien en su libro titulado: *Manual de Derecho Procesal Civil*, afirma que:

El juicio arbitral es similar al proceso jurisdiccional, pues ambos tienen como finalidad solucionar litigios, con eficacia casi igual. (...), el juicio arbitral no es proceso: No es un ordenamiento coactivo, ni de tutela jurídica. Su fundamento está en el arbitrio de las partes. El árbitro no tiene jurisdicción, ni imperium. Su misión no es decir el derecho ni ejercer la coercitio procesal; ni tiene su sentencia efecto coactivo en el sentido de ejecutabilidad. Es un juez arbitrado y como tal deriva su función de la voluntad de las partes (págs. 105 - 106).

Describe pues con más exactitud el hecho de que la figura que resuelve el conflicto únicamente tiene facultades de un Juez arbitrado como le llama, puntualizando la ausencia de coertio procesal ni de imperium, esto último entendido como la executio, tal postura está basada en el argumento de que el contenido de sus decisiones está inspirado en la voluntad de las partes.

El cuestionamiento surge entonces, si se trata de la voluntad de las partes, cuan necesario sería la participación de un magistrado para que haciendo uso del laudo arbitral como un instrumento que denota el acto decidido, pueda ordenar su ejecución; toda vez que siendo la manifestación de las voluntades lo que incluso inspira al mismo derecho que mana del pueblo; por ello el análisis que se desarrolle en la sección de resultados ha de estar enfocado a verificar la incidencia de casos en los que se hace necesaria la participación del juzgador para el cumplimiento de del contenido de un laudo arbitral.

También Jaime Guasp (1956) al respecto:

(...) A diferencia del proceso jurisdiccional –en la cual la fuerza de obligar que el juez imprime a sus decisiones no la extrae de la voluntad de los sujetos que a él acuden, sino de la voluntad coactiva de todo el ordenamiento jurídico y especialmente de aquellos órganos públicos que se pronuncian autárquicamente frente a otros sujetos–, en el arbitraje puede imponer su decisión a las partes sólo porque éstas aceptaron previamente someterse a su decisión: el laudo arbitral es el resultado de la libertad de los contendientes, no de su sujeción, porque, si bien el resultado no es para ellos libre “in effectum”, ha sido libre “in causa” y tiene, por lo tanto, fuerza de obligar, porque ellos quisieron que se les obligara (pág. 22).

En efecto se puede evidenciar de lo indicado por Guasp, que el carácter que origina el contenido del laudo es netamente subjetivo, puesto que mana de la manifestación de las partes dirigida al sometimiento a la decisión que el árbitro ha de tomar, lo cual deja plantada la idea de que la acción jurisdiccional se justifica puesto que sólo se puede pedir el cumplimiento del mismo en razón del quiebre del compromiso de sujeción, la situación habrá salido del ámbito del arbitraje.

En posición contrario a las anteriores ideas, Ugo Rocco (1969) sostiene que:

Mediante el arbitraje el Estado permite a los particulares sin que pierdan esta calidad, ejercer una función pública como lo es la jurisdiccional. La atribución de jurisdicción al árbitro no se produce exclusivamente por el acuerdo de las partes expresado en el compromiso o en la cláusula, sino también por la disposición legal que permite el arbitraje. El laudo pronunciado por el árbitro constituye, una verdadera sentencia judicial, es decir, un acto de declaración de voluntad, emitido por órganos privados que asumen la función jurisdiccional (págs. 135 - 140).

Para el autor, el arbitraje es un medio alternativo de resolución de conflictos, en donde el particular asume y ejerce una función pública o servicio público, y que el

laudo o decisión arbitral se constituye en una verdadera sentencia provista de fuerza obligatoria, a la que solo le faltaría la fuerza ejecutiva.

En sentido similar, Alcalá – Zamora (1970) afirma que:

La sustanciación de un litigio ante jueces privados origina, no ya un equivalente, sino un auténtico proceso jurisdiccional, con la peculiaridad orgánica de que él interviene jueces nombrados por las partes al amparo de la autorización estatal oportuna, sin la cual sólo podrían hacer el papel de mediadores (págs. 74 - 75).

Para este autor el arbitraje es propiamente un proceso jurisdiccional, con particularidad que la función arbitral es atribuida a particulares designados por las partes en conflicto.

Pallares (1983), siguiendo las ideas de Rocco, señala que:

El arbitraje implica ejercicio de la función jurisdiccional por particulares y aclara que el hecho de que éstos no sean autoridades no es razón suficiente para negarles el atributo de la jurisdicción, ya que el Estado está facultado para autorizar a los particulares para realizar determinadas funciones públicas cuando así convenga al interés general. Tal es el caso, del jurado integrado por individuos que no son funcionarios públicos, pero realizan una función pública (págs. 443 - 444).

En definitiva, Pallares sostiene el arbitraje implica el ejercicio de la función jurisdiccional, en consecuencia, los árbitros tienen jurisdicción, el arbitraje es un verdadero proceso y el laudo es una autentica sentencia.

En conclusión, de las teorías antes descritas, nos parece que siguen siendo válidas las ideas expuestas por Wach y Chiovenda, las cuales han sido adoptadas por la mayor parte de la doctrina. Pue es evidente que el árbitro es sólo un particular facultado para resolver el litigio, por el acuerdo celebrado por las partes conforme

a la ley. Pero este acuerdo de las partes no puede proveer al árbitro de una de las funciones exclusivas del Estado, como es la jurisdicción. Es árbitro no es autoridad, pues carece de Coertio para imponer las determinaciones que dicte durante el arbitraje, y de executio para imponer coactivamente el laudo. Es decir, el laudo no posee la fuerza ejecutiva propia de la sentencia. Si bien el laudo es uno de los supuestos de la vía de apremio, el juez todavía debe otorgarle cierto reconocimiento antes de ordenar su ejecución. Sólo hasta entonces se equipará a una sentencia.

De momentos podemos decir que, la jurisdicción judicial es la que ejerce el Estado a través del órgano del poder público especializado en la administración de justicia, es decir el organismo judicial, cuando una persona interpone una demanda que debe ser ventilada y resuelta ante los tribunales de justicia en los términos y plazos que fija la ley.

Sin embargo, hay ciertas situaciones en que las partes pueden someter a jurisdicción arbitral, siendo estos casos en que la controversia verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho a llevarlas por la vía arbitral, por consiguiente, la jurisdicción legal es la que está a cargo de un juez, y la jurisdicción arbitral es la que está a cargo de un árbitro quien es la persona que decide sobre determinado hecho sometido a su jurisdicción.

Cabe hacer mención que cuando se hace un acuerdo arbitral las partes se están sometiendo tácitamente a una jurisdicción arbitral, obligándose a si a respetar y cumplir lo estipulado, ya que el acuerdo arbitral impide a los jueces y tribunales conocer de las acciones originadas por controversia sometidas al proceso arbitral,



siempre que la parte interesada lo invoque mediante la excepción de incompetencia, de no ser así se entenderá que las partes renuncian al arbitraje y se tendrá por prorrogada la competencia de los tribunales es decir se le dará cavidad nuevamente a la jurisdicción judicial siempre y cuando el demandado omita interponer la excepción de incompetencia.

En efecto, si bien por un lado la sumisión al arbitraje implica contar con un procedimiento esencialmente dispositivo, en el que la flexibilidad y voluntad de las partes prime; por otro, una vez emitida la decisión (o laudo), será necesario que se cuente con mecanismos que permitan su ejecución, cuando las dos partes no estén de acuerdo con lo resuelto y, en consecuencia, no estén dispuestas a cumplirlo espontáneamente. Es aquí cuando se vuelve necesario interceptar la actividad arbitral con la judicial.

Si bien nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 139°, apartándose del carácter exclusivo que en un primer momento reconoce a la función jurisdiccional reservada al Estado, ha optado por recoger la tesis del carácter jurisdiccional del arbitraje, contradictoriamente le ha privado de uno de sus atributos esenciales como es el de hacer cumplir sus decisiones, aun haciendo uso de la fuerza, en los supuestos que ello sea imprescindible, determinando que para éste propósito, se deberá recurrir al Poder Judicial.

El profesor brasileño Amaral Santos (1999) indica que:

La jurisdicción comprende tres poderes: el de decisión, el de coerción y el de documentación (...) El poder de coerción se manifiesta flagrantemente en el proceso de ejecución, cuando se trata

de compilar al vencido al cumplimiento de la decisión. Asimismo, la ejerce el juez en los procesos de conocimiento y cautelares, como cuando ordena a las partes prestar testimonio, determina la exhibición de documentos, conmina o aplica sanciones (pág. 71).

Advertida la necesidad de interconexión entre la función arbitral y la judicial, podemos sostener, siguiendo a la profesora Chocrón Giráldez (1998), que, en la gama de formas de intervención jurisdiccional, que oscilan entre las intervenciones de carácter subsidiario<sup>1</sup>, hasta aquellas de carácter complementario o bien uno revisor<sup>2</sup>, para el tema materia de nuestro análisis, resulta trascendente la intervención complementaria del Poder Judicial, que es aquella que se presenta en los casos en que la obtención de un resultado requiere, necesariamente, tanto de la intervención arbitral como de la intervención judicial.

En efecto, es necesario primero que el Tribunal Arbitral haya dictado la decisión, para luego solicitar su ejecución forzada con el auxilio del Poder Judicial; evidentemente, ante la negativa de alguna de las partes de darle cumplimiento.

En mi modesta opinión, este aspecto de la relación del arbitraje con el proceso judicial, es probablemente uno de los más sensibles y determinantes del desencanto que viven todos aquellos que alguna vez han experimentado un arbitraje, sea como

---

<sup>1</sup> La intervención subsidiaria, se presenta en los casos en que existe imposibilidad material o jurídica para que los árbitros resuelvan o ejecuten determinados actos vinculados al proceso bajo su conducción, siendo imprescindible llenar este vacío - en cuanto a sus potestades-, a través del auxilio judicial. Este sería el caso, por ejemplo, de la negativa a formalizar el arbitraje, a través de la instalación del Tribunal respectivo, pese a existir un convenio arbitral.

<sup>2</sup> La intervención revisora, se configura por la posibilidad de solicitar un nuevo análisis del laudo, por esta vez por la autoridad judicial, sea a través del recurso de apelación –cuando así haya sido pactado por las partes- o de anulación, cuyo sustento es la configuración de vicios, en el procedimiento o en el propio laudo, que se encuentran expresamente establecidos en la norma positiva. En este caso, el Poder Judicial recupera para sí la función la garantizar la existencia de un debido proceso, esta vez, de un debido proceso arbitral.

partes o como árbitros. La falta de conocimiento de los principios que rigen el arbitraje y la ausencia de un procedimiento judicialmente adecuado para la ejecución pronta y eficiente de las decisiones arbitrales, contribuyen claramente no sólo a la inoperancia del arbitraje, sino también al desprestigio judicial.

De lo analizado hasta el momento podemos afirmar que el árbitro sólo posee algunos de los atributos que la doctrina clásica considera como integrantes de la jurisdicción. Tiene la *Gnotio* (facultad para conocer el conflicto planteado), *Vocatio* (facultad de ordenar comparecencia de las partes y de seguir el proceso en rebeldía) y *Iudicium* (de sentenciar, o laudar en este caso) pero no posee ni la *Coertio*, ni la *Executio* (atributos coercitivos y ejecutivos imprescindibles de una verdadera función jurisdiccional).

En consecuencia, el árbitro tiene que recurrir al Juez para la ejecución del laudo. Si estuviéramos ante una verdadera jurisdicción arbitral el árbitro tendría que estar en aptitud de ejecutar y coercionar sin necesidad de recurrir al Juez.

## **CAPITULO III**

### **EL ARBITRAJE EN EL PERÚ**

#### **3.1. Marco Histórico del Arbitraje**

La legislación peruana conoció el arbitraje desde antiguo, aunque su forma de regularlo demostró carencia de bondad técnica. La forma histórica en que se incorporó en nuestra legislación refleja el desconocimiento de su realidad y naturaleza jurídica, así como desdén académico por analizarlas y ubicarlas en el desarrollo del derecho procesal en general.

##### **3.1.1. El Código de Enjuiciamiento en Materia Civil (1852)**

Del trabajo presentado por Alejandro Guzmán Brito (2001) en la Jornada Chileno – Peruana de Historia de Derecho que organizó la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, podemos colegir lo siguiente (págs. 547 - 565):

El primer antecedente del arbitraje en la legislación peruana se halla en el Código de Enjuiciamientos en Materia Civil del Perú de 1852.

Mientras el nuevo Código Civil de 1852 fue casi una copia del Code Napoleónico francés, el Código de Enjuiciamientos en materia Civil del Perú de 1852 tuvo una gran influencia del proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil española que se terminaría en 1854, y que recién entraría en vigencia en 1855.

En el código peruano se reconoció al arbitraje en la Sección Primera De la Jurisdicción, Título Primero, De la jurisdicción y sus especies, estableciendo en su artículo 2 que: “Ejercen también jurisdicción las personas que los interesados nombran, conforme a este código, para que como árbitros conozcan en algún negocio particular”. Por su parte en el Título Cuarto, De los Jueces Árbitros, en el punto 57, se señaló que: “Pueden decidirse por medio de jueces árbitros todas las controversias de los litigantes que la ley no excluye expresamente”.

### **3.1.2. El Código de Procedimientos Civiles (1912)**

Del trabajo realizado por el autor Fernando Guzmán Ferrer (1961) en su libro titulado: *Código de Procedimiento Civiles: Exposición de Motivos – Antecedentes – Concordancias – Proyecto de Reforma – Legislación Comparada - Jurisprudencia*, de lo analizado de su trabajo por el autor podemos inferir para los fines nuestra investigación lo siguiente:

El Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852 fue derogado y reemplazado por el Código de Procedimientos Civiles, a inicios del siglo XX. Este comenzó a ser redactado en 1905, por una comisión gubernamental, y se concluyó en 1911, junto a un proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley del Notariado. Aprobado en 1911, tuvo una *vacatio legis* y entró en vigencia el 28 de julio de 1912. Es por eso que se le conoce como el Código de Procedimientos Civiles de 1912.

Se suponía que este código era más moderno que su predecesor, que rigió por casi 58 años, y que se abandonarían las formas y el lenguaje formulario de aquel por una nueva normatividad procesal. Sin embargo, esto no ocurrió.

Por ello el Código de Procedimientos Civiles de 1912 contiene una pobre regulación del arbitraje bajo el epígrafe Juicio Arbitral, contenido en el Título V de su Sección Segunda. Allí se consignaba en su original artículo 548 que: “Toda controversia sea o no materia de juicio, puede someterse a la decisión de uno o más árbitros. El número de éstos será siempre impar”.

Luego, los artículos 549 a 582 desarrollaron el proceso de formalización judicial forzosa del proceso arbitral cuando éste hubiere sido pactado de antemano y las partes no cumplieran o rehusaran con formalizarlo. Además, se regularon los requisitos de la materia arbitrable, la capacidad para conferir válidamente éste, la imposibilidad del arbitraje de las pretensiones del Estado y demás instituciones de carácter oficial, la formalidad del compromiso arbitral o del compromiso para arbitral, la sede, el carácter de equidad o de derecho, las condiciones para recurrir, las causales de anulación del laudo y la manera de conformación del mismo en defecto de la aceptación de las partes.

Asimismo, esas reglas resultaban aplicables por supletoriedad a todo proceso arbitral instaurado en defecto de norma arbitral expresa y, por vía de conexión, a todo el Corpus Iuris mismo del Código de Procedimientos Civiles de 1912. En especial las normas del entonces denominado Juicio Ordinario, que era el esquema

procesal más extenso que dicho ordenamiento legal preveía para el proceso de cognición (proceso de conocimiento).

### **3.1.3. El Código Civil (1936)**

Del análisis del trabajo de Aníbal Quiroga León (2000) de su artículo titulado: *Conciliación y Arbitraje en el Perú: Presente y Futuro*, podemos concluir para nuestra investigación lo siguiente:

Veinticuatro años más tarde entró en vigencia el Código Civil de 1936, que guardó silencio absoluto sobre el arbitraje. En efecto, ninguna de sus estipulaciones de Obligaciones o del Derecho de los Contratos hizo referencia a este instituto, ni en lo procesal ni en lo sustantivo.

### **3.1.4. Constitución Política de 1979**

Del libro titulado: *Notas al Margen de la Constitución*, publicado por Andrés Aramburú Menchaca (1990), hemos podido obtener la siguiente información para nuestro trabajo:

Fue recién la Constitución Política del Perú de 1979, vigente desde el 28 de julio de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1993, donde por vez primera se hizo referencia expresa al Arbitraje a nivel constitucional. En efecto, esta Carta Política, definió la

Jurisdicción Arbitral en su capítulo IX, reservado al Poder Judicial y las denominadas Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia.

Ciertamente la nomenclatura era controvertida, y equívoca, al suponer que el arbitraje también conforma o supone una jurisdicción de excepción, equiparable al fuero autónomo de la Justicia Militar, y como si estuviese fuera del control judicial de los Tribunales Ordinarios. Esto no reflejaba ninguna bondad técnica ni tenía respaldo en doctrina procesal alguna. Por el contrario, tuvo como paradójico propósito encerrar y definir en el texto constitucional al arbitraje, a fin de forzar su regulación legal por el legislador y su respeto por parte de la Administración de Justicia estatal.

Parafraseando a Quiroga León (1989), podemos afirmar que:

Hay sólo, señala taxativamente la Constitución, dos excepciones a esta regla general: la jurisdicción militar que se rige por la Ley Orgánica de la Justicia Militar y el Código de Justicia Militar como rezago moderno de un típico «fuero de casta» (...). La segunda está referida a la denominada “jurisdicción arbitral” que en puridad no es una jurisdicción diferente a la del Poder Judicial. Sin embargo, las excepciones a la regla general no están a su vez exceptuadas del cumplimiento de las Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia ni de los principios básicos del Debido Proceso Legal, de tal modo que no podrá existir juzgamiento militar válido, ni soportable por nuestra estructura constitucional (recordemos que las dos excepciones están igualmente sometidas a la autoridad de la Constitución) si es que en su realidad se han cumplido las reglas esenciales del juzgamiento justo que precisamente la Constitución y los Pactos Internacionales prescriben de modo imperativo. E igual principio debe regir también en las reglas procesales que terminen siendo pactadas dentro de un compromiso arbitral (pág. 308).



### 3.1.5. Código Civil de 1984

Del análisis del artículo titulado: *El Proceso de Reforma del Código Civil Peruano de 1984. La Necesidad de su Actualización para el Siglo XXI*, realizado por Carlos Soto Coaguila (2009), podemos deducir lo siguiente:

El Código Civil de 1984, que entró en vigencia el 14 de noviembre de ese año, derogando el Código Civil de 1936, trajo como novedad la referencia a la cláusula compromisoria y compromiso arbitral, entre sus artículos 1906 y 1922, dispuestos en su Título XI de la Sección Segunda, Contratos Nominados, de su Libro VII, Fuentes de las Obligaciones, y que fueron posteriormente derogados<sup>3</sup>.

Es importante observar que la Comisión Revisora del Código Civil, que trabajó por varios años para reformar el principal cuerpo jurídico civil, y no contó con ningún procesalista, se avocó a legislar sobre esta institución. En tales condiciones, ni se le reconoció ni se le aceptó carácter procesal alguno, desconociéndose la esencia de su naturaleza jurídica.

Así, en los artículos 1906 a 1908 (Capítulo Primero, Cláusula Compromisoria), se regulaban las características (como contrato preliminar) y la formalidad (pacto principal o estipulación accesorio, pacto a futuro y materia arbitrable), así como su efecto vinculante ante el Poder Judicial.

---

<sup>3</sup> Fueron derogados por la Primera Disposición Final del Decreto Ley Nº 25935 denominada “Ley General de Arbitraje”. Posteriormente esta norma lo fue, a su vez, sustituida ad-íntegram por una nueva “Ley General de Arbitraje” (Ley Nº 26572). Finalmente, esta también fue derogada por el Decreto Legislativo Nº 1071, denominado “Ley de Arbitraje”, el cual ha sufrido importantes modificaciones recientemente a través del Decreto Legislativo Nº 1231.

Por otro lado, entre los artículos 1909 a 1922 (Capítulo Segundo, Compromiso Arbitral), se regulaba el compromiso arbitral, su naturaleza, definición, solemnidad (por escrito), tanto para casos fuera de proceso, como cuando se hacía dentro del proceso (petición escrita suscrita por ambas partes con firmas legalizadas por el secretario de la causa). Asimismo, su contenido, sanciones en caso de incumplimiento, libertad de los árbitros para fijar las costas, materias no arbitrables (en el caso del Estado y sus bienes, con excepción de las empresas de derecho público o estatales o de economía mixta, en cuyo caso el compromiso arbitral debía ser previamente aprobado por Resolución Suprema), la regulación del arbitraje de derecho o el de conciencia (presumiéndose a falta de acuerdo expreso en contrario, que el arbitraje debía de ser de derecho), la obligatoriedad de designar árbitros letrados reconocidos como tales por el ordenamiento jurídico peruano, necesariamente abogados.

Además, se regularon los impedimentos para ser árbitro, el funcionamiento del tribunal arbitral colegiado, las obligaciones y deberes básicos de los árbitros y las causales de extinción del compromiso arbitral.

Comentario aparte merece el artículo 1914, actualmente derogado, pues constituye una disposición eminentemente procesal (inserta indebidamente en un código sustantivo) que amerita una disgregación individual: Artículo 1914. La existencia de la cláusula compromisoria y del compromiso arbitral puede ser invocada como excepción por cualquiera de las partes.

Resultan evidentes las limitaciones técnicas de esta previsión procesal, que da el mismo pie de igualdad a la cláusula compromisoria y al compromiso arbitral, no obstante que la propia normatividad del Código Civil las trata como diferentes. Por otro lado, el código creó una excepción adicional a las que el catálogo de excepciones traía ya en el Código de Procedimientos Civiles de 1912 e, incluso, a las que luego reformuló el novísimo Código Procesal Civil de 1993, en vigencia hasta la actualidad a través de un Texto Único Ordenado.

Esto significó un grave error conceptual y escasa técnica procesal para semejante regulación. Para empezar, ninguno de los miembros de la comisión que revisó el código en este apartado era experto en derecho procesal y en el ánimo de hacer respetar el arbitraje y blindarlo frente al Poder Judicial o a su jurisdiccionalización no se les ocurrió mejor idea que expresar que la existencia de un pacto arbitral podía ser invocada como “excepción procesal” si es que alguna de sus partes, desconociéndolo, recurría al Poder Judicial y no al inicio del proceso arbitral como había sido pactado por esta misma parte. Entonces, ante la manifiesta incompetencia material del juez de esta demanda, la parte demandada podía invocar el pacto arbitral, en vía de excepción procesal, para detener el proceso judicial y obligar al demandante a retomar el cauce arbitral.

La denominada excepción de arbitraje no es más que una variante de la excepción de incompetencia absoluta por razón de la materia, de modo que bastaría que la norma pertinente regulase que la existencia de una cláusula compromisoria o de un compromiso arbitral (hoy convenio arbitral) da lugar a la excepción de

incompetencia por razón de la materia, y se hubiese defendido al arbitraje con la misma fortaleza, pero con mejor entendimiento y técnica jurídica apropiada.

### **3.1.6. Constitución Política de 1993**

Del estudio sobre el arbitraje realizado por Mario Castillo Freyre (2012) en su trabajo titulado: *Arbitraje y Constitución*, podemos concluir para fines de nuestro trabajo lo siguiente:

La Constitución de 1993, que derogó la Constitución de 1979 luego de un proceso político complicado y conflictivo, repite literalmente en este punto de nuestro estudio arbitral la formulación constitucional de su predecesora.

Entró en vigencia, luego de un polémico proceso de referéndum, el 31 de diciembre de 1993, manteniéndose hasta la fecha con algunas pocas reformas constitucionales. Esta Constitución se refiere al arbitraje en su artículo 139, inciso 1 (Capítulo VII, Poder Judicial). Al igual que su antecesora, se denomina Jurisdicción arbitral, como jurisdicción independiente, de excepción, al igual que la Justicia Militar. Como aquella fuera del control judicial de los Tribunales Ordinarios. Como ya se ha dicho con relación a la Constitución de 1979, sin reflejar bondad técnica, ni tener el respaldo en la moderna doctrina procesal, teniendo más bien como paradójico propósito “encerrar” y “definir” en el texto constitucional al instituto del arbitraje, a fin de forzar a su regulación legal por el legislador y forzar a su respeto por parte de la Administración de Justicia estatal.

No se discute la importancia del Arbitraje como tal, menos aún en la hora actual del casi total fracaso y colapso de los sistemas de administración de justicia en la sociedad contemporánea.

### **3.1.7. El Código Civil de 1993 y La Ley 25925 - Primera Ley de Arbitraje**

El Código Procesal Civil de 1993 originalmente reguló el arbitraje en el Libro II: Justicia Arbitral. Pero ocurrió algo extraño nunca bien explicado: antes de que se cumpliera el periodo de la *vacatio legis* de este código, sus postulados sufrieron importantes reformas. Entre las más llamativas se encuentra la supresión del referido libro sobre la Justicia Arbitral, que fue extraído de la versión final del Código Procesal Civil de 1993. Por ello, cuando el código entró en vigencia, sus postulados ya no contenían referencia alguna al arbitraje, como ocurre hasta la fecha. Así, lo referente al capítulo arbitral fue una legislación no nata en este código, que actualmente se regula a partir de un denominado Texto Único Ordenado, que trata de justificar sus muchas reformas acaecidas desde su no nacimiento hasta la fecha.

Casi al mismo tiempo de que entrara en vigencia el Código Procesal Civil de 1993, mediante Decreto Ley Nº 25935 se reemplazó todo el Libro II del no nato Código Procesal Civil de 1993. Este decreto ley fue denominado Ley General de Arbitraje, con una regulación bastante más completa e integral que la regulación originalmente prevista en el Libro II del Código Procesal Civil de 1993, y definió al Convenio Arbitral como un contrato previo y solemne (artículos 4 a 15).

De este modo, dicha regulación superó y suprimió para siempre de nuestra legislación la antigua y clásica dicotomía entre Cláusula Compromisoria y Compromiso Arbitral que, en verdad, poca aplicación y utilidad tuvo en el tiempo de su vigencia de poco menos de nueve años.

Sus características más resaltantes fueron las siguientes:

- i. La definición del Convenio Arbitral como un contrato previo, solemne (artículos 4 a 15);
- ii. La determinación de que la integración o formalización judicial del arbitraje, y sus reglas, sobre la base de un Convenio Arbitral no honrado por las partes, debe hacerla el Juez Civil señalado por las partes, o el del lugar en donde éste deberá realizarse, o del lugar de celebración del Convenio, o el del lugar del domicilio del demandado, o de cualquiera de ellos si fueran varios;
- iii. La presunción de que, en defecto de pacto expreso, el Arbitraje deberá ser de derecho;
- iv. En cuanto a los Árbitros (artículos 16 a 25), se establece que, en el caso de los Arbitrajes de Derecho, éstos deberán llevarse a cabo por árbitros letrados conforme a las leyes peruanas, debidamente Colegiados (Defensa Cautiva);
- v. La prohibición de deferir a una sola de las partes la designación de la totalidad de los Árbitros;

- vi. En cuanto al Proceso Arbitral en sí mismo (artículos 26 a 34), se estableció la libertad de las formas;
- vii. La posibilidad del Arbitraje Administrado, a cargo de instituciones especializadas para el efecto, frente al Arbitraje de partes;
- viii. La posibilidad de que el Proceso Arbitral concluya por Conciliación, Transacción, Suspensión del Proceso Arbitral, Renuncia al Proceso Arbitral y Desistimiento del Proceso Arbitral (artículos 35 a 37);
- ix. Competencia de los Árbitros y su sistema de votación en el caso de los Tribunales Arbitrales Colegiados;
- x. Las características del Laudo (artículos 42 a 51);
- xi. Los recursos apelación, cuando su procedencia haya sido pactada (artículos 52 a 54), sea ante una segunda instancia judicial, sea ante una segunda instancia arbitral expresamente pactada;
- xii. El recurso de anulación de Laudo (artículos 55 y 56), en las causales *numerus clausus* allí expresamente previstas;
- xiii. Las medidas Cautelares y de Ejecución del laudo (artículos 73 a 80);
- xiv. El Arbitraje Internacional (artículos 81 a 107), su definición y características; y,
- xv. El reconocimiento y ejecución de Laudos Arbitrales provenientes de Arbitrajes Internacionales.

Sin embargo, a escasos tres años de vigencia, sin mayor explicación, el Decreto Ley № 25935 fue íntegramente derogado y sustituido por la Ley № 26572.

### **3.1.8. Ley Nº 26572 – Segunda Ley de Arbitraje**

Del libro titulado: *Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje*, publicado por Alfredo Bullard y Carlos Soto (2011), podemos obtener la siguiente información para nuestro trabajo:

La Ley Nº 26572, del 5 de enero de 1996, también denominada Ley de Arbitraje, esta norma reguló nuevamente por completo todo el proceso arbitral, estableciendo la posibilidad de arbitrar las consecuencias patrimoniales de los fallos judiciales previamente expedidos, para sustraer de la ejecución de una sentencia las materias que sean de libre disponibilidad de las partes interesadas.

La Ley de Arbitraje fue sustituida íntegramente de nuevo por el Decreto Legislativo Nº 1071 y, a finales de 2015 ha sufrido algunas modificaciones por medio del Decreto Legislativo Nº 1231. Y eso se puede distinguir con mediana claridad en el tenor de sus postulados que van cambiando los aspectos sustantivos de la regulación normativa Arbitraje y su concepción misma.

La segunda Ley de Arbitraje estableció disposiciones generales en sus ocho primeros artículos, resaltando lo siguiente:

- i. La posibilidad de arbitrar las consecuencias patrimoniales de los fallos judiciales previamente expedidos, para sustraer de la ejecución de una sentencia las materias que sean de libre disponibilidad de las partes interesadas;



- ii. La regulación del Arbitraje del Estado, con un cambio cualitativo a toda regulación pasada, sin necesidad de autorización previa especial, entendiendo como Estado al Gobierno Central y los Gobiernos Regionales y Locales (Municipalidades). Se estableció que las Empresas estatales de derecho privado o de economía mixta podían acordar libremente, sin necesidad de autorización previa, someterse a Arbitraje Nacional, con relación a los contratos celebrados con nacionales y extranjeros;
- iii. Se invirtió la presunción, en el sentido de que, a falta de pacto expreso, el Arbitraje debía ser de consciencia o equidad, a menos que expresamente se hubiera pactado el Arbitraje de Derecho. Y aun en este último caso, cuando el arbitraje versase sobre asuntos de carácter comercial, los Árbitros debían tomar en cuenta los usos mercantiles aplicables a cada caso;
- iv. Se excluyó, a falta de pacto expreso, la intervención del Poder Judicial, sometiéndose de modo exclusivo y excluyente a la denominada Jurisdicción Arbitral;
- v. Se reguló el Arbitraje Administrado a cargo de una Institución Arbitral, la que necesariamente debía instituirse como Persona Jurídica, dándose a la misma la facultad de nombrar Árbitros, el procedimiento y demás reglas con las que administrará el Arbitraje, de conformidad con su Reglamento Arbitral;
- vi. Se abandonó definitivamente la diferenciación, clasificación y distinción de Cláusula Compromisoria y Compromiso Arbitral, para resumirse en un

solo concepto: Convenio Arbitral, que resultó así regulado en los artículos 9 a 17;

- vii. La solemnidad escrita del convenio arbitral se flexibilizó, ya que se señaló que por forma escrita no sólo se entendería cuando éste se celebrase por escrito, sino cuando resultase claro del intercambio de cartas, o de cualquier otro medio de comunicación o correspondencia en que inequívocamente se dejase constancia documental de las partes de someterse a arbitraje. Ello era mucho más avanzado, aun cuando la norma señalaba que, a pesar de no haberse formalizado el convenio arbitral respectivo, el mismo se entendía perfeccionado cuando una de las partes tomase la iniciativa de iniciar el arbitraje, bajo el conocimiento de uno o más Árbitros, y la otra parte aceptase la misma, sea expresamente, sea tácitamente apersonándose al proceso arbitral sin objetar tal intervención, en una suerte de convalidación tácita retroactiva;
- viii. El convenio arbitral podía tomar la forma de cláusula accesorio, o relación jurídica estándar, y era oponible y exigible, siempre que hubiera sido conocida o hubiera podido ser conocida por la otra usando la diligencia ordinaria, fuese en cláusulas generales de contratación o contratos por adhesión. También se reconoció el arbitraje estatutario configurado por el convenio arbitral regulado por los Estatutos o normas equivalentes en sociedades civiles o mercantiles cualquiera sea su denominación conforme a ley, asociaciones jurídicas y demás entidades colectivas. Se reguló, asimismo, el denominado arbitraje testamentario cuando así lo hubiese

previsto el Testador respecto de cualquier controversia surgida o por surgir entre los herederos testamentarios, o de terceros en relación con los bienes de la herencia;

- ix. Se previó la separabilidad del convenio arbitral respecto del Contrato o Convenio que lo contenía, de manera que constituían pactos independientes, donde la inexistencia, anulabilidad, nulidad, resolución, rescisión, etc., de éste, ni afectaba a la existencia, validez o exigibilidad de aquél, inclusive para determinar válidamente las condiciones jurídicas del convenio o contrato que él contenía;
- x. Se insistió nuevamente en el concepto, errado en nuestro criterio, de la denominada excepción de convenio arbitral, de manera tal que el desconocimiento en juicio ordinario de la existencia del convenio arbitral para la solución de la controversia sometida a la justicia ordinaria, daba lugar a la oponibilidad de la excepción de convenio arbitral válida de este medio de defensa. Vencido el plazo previsto para éste, se entendía renunciado el derecho a invocarla, y sin efecto alguno el convenio arbitral;
- xi. Era posible la sustracción de la materia sometida al Proceso Judicial cuando las partes celebrasen, en el curso de la misma, un Convenio Arbitral que debía ser respetado por la autoridad judicial haciendo caducar el proceso de que se trate y cediendo paso a la instalación del Tribunal Arbitral de que se trate, bajo las reglas que se pactasen para este efecto;
- xii. El Capítulo de Los Árbitros estuvo regulado entre los artículos 18 a 32, siendo lo más destacable el que los Árbitros podían ser personas naturales

o personas jurídicas dentro de una plena libertad para el proceso de su nombramiento, siendo en este último caso nombrada a su vez como entidad nominadora, y cuando se trate de Arbitraje de Derecho este debía recaer en Abogados, sea nacionales o extranjeros, sin que estos últimos debieran ser necesariamente Abogados registrados en el territorio nacional;

- xiii. Se reguló, finalmente, un procedimiento judicial expeditivo para la designación judicial de los Árbitros de la parte renuente a hacerlo, sin que quedase recurso alguno cuando el Juez hubiese nombrado al o a los Árbitros, y sí con efecto suspensivo, cuando lo hubiese negado;
- xiv. El proceso arbitral se reguló entre los artículos 33 y 40, bajo el principio de que la Libertad de la Regulación del Proceso, bajo el cumplimiento estricto del principio procesal de que a composición de las partes prevalece por sobre la composición judicial, desmitificando el concepto de la irrenunciabilidad o el carácter público de las normas procesales, siendo alternativo el sometiendo a los reglamentos de las entidades autorizadas a llevar el Arbitraje Administrado;
- xv. Se establecieron reglas básicas, de funcionamiento supletorio, de la tramitación del Proceso Arbitral. Dentro de esto, una regla esencial era la contenida en el artículo 39, en donde, además de la materia arbitrable que las partes conceden en el Proceso Arbitral, se estableció como norma de orden público la facultad inmanente de que los Árbitros siempre tendrían la potestad de establecer los límites válidos de su propia competencia,

incluyendo la posibilidad de determinar en ello la existencia o inexistencia, eficacia o validez del propio Convenio Arbitral. Esta facultad podía exigirse ex officio, pudiendo hacerlo como cuestión previa, o reservarse, por decisión del propio Tribunal Arbitral, a la expedición del Laudo, sin que fuese esta decisión susceptible de recurso alguno;

- xvi. También se estableció como regla genérica la posibilidad del Tribunal Arbitral de recurrir, aun las partes con autorización de éste, a la autoridad judicial para requerir el auxilio judicial en la actuación de los medios probatorios;
- xvii. Las demás normas se referían a la posibilidad de conciliar o transigir ante los árbitros, quienes debían ser promotores de estas posibilidades, aun del desistimiento y de la suspensión temporal del proceso arbitral, la competencia de los árbitros y las mayorías para laudar válidamente, el laudo arbitral, los costos del arbitraje, los recursos, sea en una segunda instancia arbitral, o ante el Poder Judicial, en la Sala Civil correspondiente de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial que corresponda, cuando ello hubiera sido expresamente autorizado por el Convenio Arbitral o por las reglas pactadas para el mismo, las causales taxativas de anulación del laudo (*numerus clausus*), y la posibilidad restrictiva del Recurso de Casación sólo cuando el laudo hubiera sido anulado en todo o en parte, donde este Recurso Extraordinario de Impugnación se preveía sólo en defensa del proceso y de la institución arbitral;

- xviii. Se regularon también, entre los artículos 79 a 87, con bastante precisión, las providencias cautelares susceptibles de solicitarse en el Proceso Arbitral, sea en sede judicial, sea en sede arbitral, la ejecución del Laudo y su publicación en diarios o en revistas de la prensa del Laudo a costa del que lo solicite, como sanción moral para la parte que obligó al vencedor a recurrir al Poder Judicial para la ejecución y cumplimiento de lo que hubiera sido así laudado;
- xix. También se reguló con profusión y prolijidad el Arbitraje Internacional entre los artículos 88 y 126, con toda una normatividad propia;
- xx. Se estableció entre los artículos 127 y 131 las condiciones del Exequatur<sup>4</sup> de los Laudos extranjeros, las condiciones de su reconocimiento y ejecución;
- xxi. Es interesante destacar, dentro de lo ya señalado en torno al principal objeto de este comentario, que la Primera Disposición Complementaria y Transitoria señalaba que toda referencia legal o convencional a una “cláusula compromisoria” o a un “compromiso arbitral” debía ser reconducida al entendimiento legal de un Convenio Arbitral, en los términos de los supuestos de hecho de esta Ley;
- xxii. Se estableció también un plazo para la adecuación de los reglamentos arbitrales de las instituciones del Arbitraje Administrado (60 días), y la

---

<sup>4</sup> Procedimiento para el reconocimiento, homologación y ejecución de fallos y laudos del extranjero dentro del territorio nacional, conforme a tratados internacionales y/o la legislación nacional, sobre todo la procesal.

necesidad de que estas instituciones fuesen siempre, y tuviesen forma de, persona jurídica; y,

- xxiii. Finalmente, se ordenó la creación de Juzgados y Cortes de Justicia de especialidad arbitral para el conocimiento de la designación de los Árbitros en defecto del cumplimiento de la parte renuente, y para el conocimiento de los recursos de apelación, cuando esto haya sido pactado, y para conocer el Recurso de Anulación que esta Ley prevé taxativa y restrictivamente.

### **3.1.9. Decreto Legislativo Nº 1071 – Actual Ley de Arbitraje**

La actual Ley de Arbitraje, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1071 y vigente desde el 1 de septiembre de 2008, derogó por completo la Ley Nº 26572.

De acuerdo con la opinión de Castillo Freyre (2014), esta norma reforzó el carácter autónomo del arbitraje, tanto de la jurisdicción ordinaria, como de las reglas procesales comunes, protegiéndolo de intervenciones judiciales innecesarias y reconociéndolo como una institución que tiene sus propios principios y reglas (pág. 35).

Los artículos de esta ley refuerzan la competencia de los árbitros, consagran el recurso de anulación y buscan restringir la intervención judicial en determinados supuestos para facilitar el desarrollo del arbitraje.

De manera concluyente, se ha señalado que la mayoría de los cambios contenidos en el Decreto Legislativo Nº 1071 obedecen al tránsito de una ley dualista a una ley

monista, que regirá tanto para el arbitraje internacional como para el arbitraje nacional.

### **3.1.10. Decreto Legislativo Nº 1231**

La actual Ley de Arbitraje ha sufrido recientemente algunas modificaciones menores a través del Decreto Legislativo Nº 1231, publicado el 26 de setiembre de 2015. De este modo, se modificó el artículo 20, referente a la capacidad del árbitro, y el artículo 28, sobre los motivos de abstención y de recusación de éstos. Básicamente, ante la evidencia del ingreso de la corrupción al interior de algunos procesos arbitrales se ha tratado ahora de reforzar las seguridades para que esto no suceda, básicamente a partir de la mayor responsabilidad personal, legal y hasta penal de los que ejercen la función de árbitros.

No necesariamente esto va a mejorar. Como siempre ocurre con las normas coyunturales, se cae en el riesgo de ir de un extremo al otro, sin lograr una solución eficaz.

De este modo, se incorpora también la posibilidad de inscribir en los Registros Públicos el proceso arbitral y su resultado. Esto permite romper parcialmente la regla de su confidencialidad para evitar que la misma sea mal utilizada, entre otras disposiciones complementarias y finales. Entre estas destaca la regulación de la necesaria publicidad de los laudos arbitrales donde el Estado haya sido parte de un proceso arbitral, flexibilizando la regla general de la confidencialidad inter partes



por razones de notorio interés público evitando que esa confidencialidad sea caldo de cultivo de su mal utilización con fines ilícitos en perjuicio del Estado o de terceros.

### **3.2. Conceptualización del Arbitraje**

Encontramos diferentes definiciones que han esgrimido los estudiosos, acerca del arbitraje; así tenemos que:

El arbitraje, según Díez – Picazo (2000), es: “Aquella institución consistente en que dos o más personas pacten entre sí que en un tercero resuelva un litigio ya surgido o que pueda surgir entre ellas, excluyendo que los tribunales conozcan del mismo” (pág. 574).

Para Gómez Colomer (1995), el arbitraje es:

(...) es una institución jurídica hetero compositiva, en virtud del cual una tercera persona, objetiva e imparcial, nombrada por las partes mediando convenio, resuelve en base a una potestad específica el conflicto intersubjetivo de intereses jurídicos, en caso de ser la materia susceptible de disposición por las personas afectadas por la discrepancia (pág. 843).

Por acuerdo las partes pactan el arbitraje y deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual, sean o no materia de un proceso judicial.

César Fernández (2004), citando a la American Arbitration Association define al arbitraje como: “La remisión de una disputa a una o más personas imparciales para una determinación final y obligatoria” (pág. 303).

Para Jean Robert (1969), el arbitraje significa: “Instituir una jurisdicción pública, a efectos de ser resueltos por personas investidas, para un caso determinado, con los poderes para juzgar tal litigio” (pág. 9).

Mongalvy citado por Patricio Aylwin (1958), lo considera como: “Una jurisdicción que la voluntad de las partes o la ley da a simples particulares para pronunciarse sobre una o más controversias siempre que no sean de aquellos que por su naturaleza no puedan someterse a compromiso” (pág. 21).

Adolfo Shonke (1950) señala que:

En el procedimiento arbitral se resuelve por jueces privados (árbitros) acerca de cuestiones civiles, que en otro caso habrían de ser decididas por tribunales públicos. El tribunal arbitral puede constar de uno o varios jueces árbitros y la exclusión de la jurisdicción ordinaria otorgando la competencia al tribunal arbitral se efectúa mediante un convenio entre las partes llamado contrato arbitral o compromiso (pág. 373).

Los árbitros son los encargados de juzgar y en consecuencia resolver un litigio acerca de cuestiones civiles, siempre y cuando las partes decidan someterse a esta institución una controversia en tanto exista un contrato que faculte la actuación de los árbitros. Esto significa que, ausente el contrato, no será posible que se proceda a resolver controversia alguna por medio del arbitraje.

Gaspar Lera (1988), concibe el arbitraje como:

Una institución, y es que con el término institución se hace referencia, en sentido abstracto, al conjunto de normas o disposiciones del derecho que regulan cordialmente las relaciones jurídicas de una clase determinada. (pág. 52).

Sobre esta base es evidente que procede hablar de una institución arbitral. Ello por cuanto ésta comprende: en primer lugar, las concretas relaciones entre las partes que acuerdan someterse a uno o varios árbitros. En segundo lugar, las relaciones entre aquéllas con los árbitros. Y, por último, las de unas y otros con la jurisdicción estatal.

Trazegnies Granda (1989), nos explica que:

El arbitraje actual es una institución post – moderna (si por moderno entendemos el derecho liberal clásico). Es post moderna porque se presenta como una reacción contra ese monopolio de la función jurisdiccional del Estado que constituye una característica de la ideología jurídica moderna o liberal. La congestión de las causas en los tribunales y la ineficacia que resulta de ello, las complejidades de la vida comercial moderna que exigen muchas veces conocimientos económicos o tecnológicos avanzados para entender el meollo de una controversia, han llevado a una decepción de la teoría de la hegemonía del Poder Judicial como medio de proporcionar seguridad para la vida comercial (pág. 543).

Para el derecho liberal clásico, el arbitraje actual no quiere ser un mero auxiliar del poder judicial, sino que pretende sustituir al poder judicial en una serie de campos donde considera que el sistema formal y oficial no es eficiente.

Cantuarias Salaverri (1997), nos dice que: “El arbitraje es un medio privado de solución de controversias, mediante la intervención y decisión de terceros también privados a quienes las partes de manera voluntaria han decidido someter su conflicto, aceptando de antemano acatar su decisión” (pág. 39).

Lohmann Luca de Tena (1988), señala que:

Es arbitraje la institución que regula el acuerdo de voluntades por el cual dos o más partes deciden cometer a uno o más terceros, que aceptan el encargo, la resolución de un cierto conflicto de derecho privado respecto del cual dichas partes tienen capacidad de disposición, obligándose previamente a no llevar la controversia a los tribunales ordinarios sin el previo fallo arbitral, el cual deberá expedirse con arreglo a ciertas formalidades (pág. 41).

Al respecto, se puede decir que el Arbitraje se considera como uno de los más importantes mecanismos hetero compositivos de solución de conflictos en el cual las partes deciden someter su controversia a los árbitros quienes, sometidos a la norma arbitral, decidirán mediante laudo la solución a dicho conflicto.

### **3.3. Naturaleza Jurídica del Arbitraje**

La naturaleza jurídica del arbitraje ha sido objeto de un largo debate desde hace mucho. Esto se debe, a que se ha abordado al arbitraje desde el arbitraje mismo, o desde su cara contractual, explicando cómo funciona, o cómo debiera de funcionar, sin haberse tomado en cuenta sus orígenes ni sus antecedentes históricos.

Este es un debate que aún no ha concluido ni es pacífico en la doctrina. No obstante, es posible identificar tres teorías relevantes actualmente vigentes: a) la contractualista; b) la jurisdiccionalista; y otra no tan generalizada: c) la mixta o híbrida.

Al respecto, Mallandrich Miret (2010), explica que:

La doctrina se ha dividido tradicionalmente entre los partidarios de las llamadas teorías contractualistas y jurisdiccionalistas de la naturaleza jurídica del arbitraje. La teoría contractual del arbitraje es aquella que presta su atención en el elemento iniciador del arbitraje, en el convenio arbitral, que origina y funda el arbitraje. Para este sector doctrinal, en el que se debe destacar a Guasp Fernández, el laudo es la manifestación final del contrato inicial y, por lo tanto, éste comparte la naturaleza contractual. Por su lado, los partidarios de la teoría jurisdiccional, aunque admiten que el convenio arbitral es el acto que da origen al arbitraje, indican que el elemento identificativo del arbitraje es la actividad que en él se desarrolla, que es de tipo jurisdiccional y los efectos que éste produce, que son los propios de una sentencia judicial (pág. 65).

Por su parte, Merchán Álvarez (1981), sostiene que:

Se aprecian simultáneamente caracteres diversos: unos propios del Derecho Privado, derivados de su origen contractual (afirmando que el arbitraje surge como consecuencia de un acuerdo de voluntades), otros propios del Derecho procesal, derivados de la existencia de una controversia, de la resolución de la misma por un tercero imparcial, del procedimiento y efectos de la resolución, que recuerdan a los efectos jurisdiccionales. Por ello se formula las siguientes preguntas: ¿Cuáles de esas características son las predominantes?, ¿las jurídico-privadas y entonces lógico será pensar que nos encontramos ante una institución del derecho de obligaciones?, ¿las procesales y entonces nos hallamos ¿fundamentalmente ante una figura jurisdiccional? O ¿existe un equilibrio entre ambas características? (pág. 38).

Conforme afirma el profesor González de Cossío (2011), el debate académico en torno a la naturaleza jurídica del arbitraje, es de suma importancia:

Ya que sí tiene un impacto en la regulación y práctica del arbitraje. La actitud que el derecho local y los tribunales nacionales tomen en relación con los procedimientos y el laudo arbitral, depende en gran medida de la concepción en la que se tenga la naturaleza jurídica del arbitraje (pág. 17).

### **3.3.1. Teoría Contractual**

Esta teoría establece al arbitraje como un mecanismo de solución de controversias basado en un acuerdo de voluntades, es decir la naturaleza contractual es el contrato.

La teoría contractualista sólo ubica al arbitraje como nacido de una relación contractual. Es decir, nace del pacto arbitral, de la cláusula compromisoria, del compromiso arbitral o, como genéricamente se le denomina ahora, de la Cláusula Arbitral o Convenio Arbitral. Esto supone desechar por completo que el arbitraje esté siempre supervisado por el Estado, y desdeña sus antecedentes o el que su método se asemeje al proceso judicial. De este modo, es una visión tradicionalista del arbitraje que le escinde por completo del proceso judicial como si fuesen realidades diferentes, y hasta opuestas. Esta teoría solo pondera la autonomía de la voluntad de las partes en el arbitraje, a despecho de que su realidad, su naturaleza y sus consecuencias (cosa juzgada o res iudicata) son reconocidas por el Estado como una institución de derecho público.

Conforme esta teoría el arbitraje tiene su existencia en la voluntad de las partes, la cual se plasma en el convenio arbitral, por medio del cual las partes deciden libremente someter a arbitraje sus disputas y sustraerse de la competencia del poder judicial. Es únicamente este acuerdo de voluntades la que origina el arbitraje y la que es fuente de la facultad exclusiva y excluyente de los árbitros para resolver la controversia. En este sentido, el laudo arbitral que emitan los árbitros es de obligatorio cumplimiento no por ser un acto que el Estado reviste de jurisdicción,

sino porque las partes así decidieron que fuera al celebrar un convenio arbitral, es decir porque así lo acordaron y le dieron voluntariamente esa obligatoriedad.

En el Perú, Bullard (2013), es un claro defensor de esta teoría, quien nos menciona que:

El arbitraje es, finalmente un contrato. Lo que llamamos proceso arbitral no es otra cosa que la ejecución de ese contrato. Su origen es el acuerdo y no la delegación del Estado para administrar justicia, pues es falsa la percepción según la cual el origen de la justicia es estatal. (pág. 61).

Por esta razón, más que una delegación de la justicia estatal, el arbitraje es el retorno al origen privado del sistema mediante un contrato en el cual se someten a la solución de determinadas controversias.

En palabras de González de Cossio (2011):

Hay quienes consideran que el arbitraje tiene naturaleza contractual. Sus orígenes, existencia y regulación dependen de la continuada existencia de la voluntad de las partes (...) niegan la supremacía o control del Estado sobre el arbitraje y alegan que la esencia del arbitraje radica en la voluntad y consentimiento de las partes (...) tanto el acuerdo como el laudo arbitral reflejan el carácter contractual del arbitraje. Como detalló la Corte de Casación francesa: Los laudos arbitrales que se fundamentan en un acuerdo arbitral constituyen una unidad con el mismo y comparten su naturaleza contractual (...) la naturaleza contractual del arbitraje resulta también de sus consecuencias ultimas. Las partes se comprometen a resolver sus controversias mediante un acuerdo arbitral, lo cual es una decisión en la que no influye el Estado. En caso que una de las partes no honre su palabra, el resultado del pacto, el laudo, se ejecutará como un contrato (pág. 19).

El arbitraje es una institución de naturaleza contractual al provenir de la libre disposición; es decir, es regido por la voluntad de las partes y no por la voluntad del estado.

De similar opinión es César Ianda (2007), quien señala: “Los seguidores de esta corriente sostienen que el arbitraje se encuentra dentro del ámbito del derecho contractual y el efecto vinculante del laudo arbitral tiene como fundamento el principio de pacta sunt servanda” (pág. 31).

Finalmente, Marianella Ledesma (2007), define esta teoría con las siguientes palabras:

Considera que el arbitraje es un contrato. El convenio arbitral nace de la voluntad de las partes, ello permite que surja esta institución y se desarrolle (...) así como las partes han acordado celebrar determinados negocios, han convenido también el modo de resolver los posibles diferendos. Es justicia privada por nacer de un contrato que tiene por presupuesto el ejercicio de la autonomía de la voluntad y por detrás encontramos básicamente un principio constitucional que autoriza el libre ejercicio de esa voluntad contractual (pág. 31).

Así pues, según la teoría contractualista, los orígenes, existencia y regulación dependen de la continuada existencia de la voluntad de las partes. El corazón de esta corriente de opinión consiste en que todo el procedimiento arbitral está basado en acuerdos contractuales. Ello se observa tanto en el acuerdo como en el laudo arbitral, ya que reflejan el carácter contractual del arbitraje, siendo los mismos un conjunto de actos contractuales privados.

De este modo, quienes siguen esta teoría equiparan el arbitraje a un contrato privado, mera manifestación de voluntad de las partes de la relación jurídica. Consagran la génesis del arbitraje al contrato compromisorio, con la premisa de que, del mismo modo que las partes pueden transigir sus controversias, pueden también comprometerlas en un arbitraje, en los supuestos de disposición de sus derechos, obligándose a aceptar la resolución que estos terceros adopten.



Por lo tanto, esta teoría plantea que el arbitraje se encuentra dentro del derecho contractual y el efecto vinculante del laudo se relaciona con el principio de lo pactado. También da relevancia al principio de autonomía de la voluntad de los sujetos que les permite regular libremente sus relaciones jurídicas privadas.

La controversia aparentemente se soluciona a partir del contrato de voluntades y aquellas diferencias que surgen de las relaciones jurídicas se vean resueltas sin la intervención de mecanismos estatales y la decisión final sea de total cumplimiento de las partes a raíz de los compromisos adquiridos, esto motiva a definir que la esencia del arbitraje según esta teoría no es precisamente la designación por parte del Estado del responsable del arbitraje, sino que el contrato es la esencia del proceso.

### **3.3.2. Teoría Jurisdiccional**

La teoría jurisdiccional sostiene que el arbitraje está enmarcada en la capacidad que tienen los árbitros para resolver las controversias de carácter no proveniente de las partes sino del modo imperante del Estado que les confiere la potestad para establecer un fallo vinculante con el poder judicial.

La teoría jurisdiccional asume al arbitraje como uno de los tipos de proceso judicial, cuyo esquema, configuración y fórmula vienen dadas por el Estado y están dispuestas por la ley. Desde este punto de vista, el arbitraje sería tan sólo una de las formas que puede adquirir el proceso, solo que más liberal y con mayor incidencia

de la intervención de las partes. Pero es asumido como un proceso dado y supervisado por el Estado. De este modo, sus consecuencias son dadas por el Estado (cosa juzgada o res iudicata) y susceptible de control (por la apelación, la impugnación o la nulidad de laudo) por las cortes de justicia ordinaria del Estado. Así, quienes siguen esta perspectiva desdeñan, a su vez, la enorme participación de la autonomía de la voluntad de las partes que se desarrolla a su interior.

Bajo esta corriente la naturaleza del arbitraje es jurisdiccional debido a que el origen de la institución, su posibilidad de existencia, apoyo estatal y regulación de los actores principales (el árbitro y el juez) es similar, y en ocasiones idéntica.

En esta línea, Jerónimo Caivano (2000), ha enfatizado que:

No existe razón lógica alguna para considerar que la misma función pueda variar según su naturaleza por el solo hecho de que varíe la calidad de la persona que la lleva a cabo. Ni las diferencias de metodología y de espíritu con que se lleva a cabo el arbitraje, ni la calidad de particular de los árbitros son causales suficientes para considerar diferente la función de fondo respecto de los jueces. Los árbitros revisten la calidad de verdaderos jueces, en tanto su misión es esencialmente igual, emitiendo un laudo que no tiene diferencias sustanciales con la sentencia de un magistrado, al punto de ser consideradas en absoluto pie de igualdad con aquéllas al momento de su ejecución (pág. 98).

Podemos inferir que los árbitros son jueces al ser investidos como tales por el Estado para resolver controversias, contradiciendo de este modo a los seguidores de la teoría contractualista del arbitraje, ya que afirman que la facultad de juzgar no proviene del acuerdo de arbitraje, sino del Estado, quien permite que los jueces particulares resuelven conflictos y sus resoluciones tengan la fuerza de los fallos judiciales.

Por su parte, el procesalista italiano Carnacini (1961) sugiere que:

El Arbitraje, (...), se presenta como el instituto en que se concede al particular, en mayor medida posible, que contribuya con su obra al ejercicio de aquella función que, en atención al fin que persigue y al resultado que lleva, no puede menos que llamarse jurisdiccional (pág. 22).

Por tanto, podemos afirmar que el arbitraje no sea solamente un contrato, puesto que la decisión final no proviene del acuerdo de las partes, sino de la decisión del tribunal arbitral, el cual resuelve el conflicto con absoluta imparcialidad e independencia.

Al respecto, Vidal Ramírez (2003), agrega lo siguiente:

Que el arbitraje es anterior a la organización formal de la administración de justicia y que en su origen no constituyó una alternativa, sino que fue un medio de solución de controversias anterior a la autoridad estatal. Así pues, exponiendo el régimen procesal de la época clásica hace referencia al arbitraje como una función juzgadora, un iudicium, ajena a un imperium magistratual y basa únicamente en el officium de particulares llamados a desempeñarse como árbitros según un contrato, en virtud del cual acordaban someter la cuestión controvertida a la decisión de un particular o árbitro (pág. 10).

Así pues, conforme esta teoría el arbitraje no existe por el solo hecho que las partes celebren un convenio arbitral, este acuerdo de voluntades no es suficiente para que en la práctica el convenio arbitral produzca efectos sustrayendo a las partes de la competencia natural del Poder Judicial y haciendo que el laudo que emitan los árbitros les sea obligatorio. La razón final de la competencia de los árbitros para resolver una controversia y de la obligatoriedad que el laudo emita la hayamos en que el Estado delega su jurisdicción en los árbitros cada vez que se celebra un convenio arbitral. El Estado reconoce al arbitraje como ejercicio privado de su labor

jurisdiccional y es el hecho que el arbitraje sea ejercicio jurisdiccional el que le da efectos prácticos. Para quienes sostienen esta teoría si no se da este reconocimiento jurisdiccional del arbitraje, este no tiene efecto alguno.

De acuerdo con esta teoría, es función del Estado controlar y regular los arbitrajes que se produjeran en su jurisdicción, para lo cual el árbitro tiene la potestad de juzgar en el caso de controversia entre las partes, los cuales dan inicio al proceso. Las partes pueden determinar las reglas del arbitraje y sus alcances, pero se someten a laudo establecido por el árbitro, aunque éste no puede sancionar medidas cautelares como lo realiza un acto judicial, por lo tanto, los árbitros tienen autoridad para llevar a cabo la resolución de los conflictos y por ello ejercen función jurisdiccional, pero no tienen potestad para ejecutarla, razón por la cual deben acudir al Poder Judicial.

Los aspectos negativos de esta teoría salen a la luz al momento de aplicarlas, como, por ejemplo, la potestad otorgada al árbitro con la misma potestad de un juez, aunque no tenga la potestad de ejecutarla; otra dificultad muy importante sería el hecho de que no reconoce la autonomía de la voluntad de las partes, reconocido en los contratos actuales como principio fundamental.

### **3.3.3. Teoría Mixta**

La teoría mixta surge de la complementación de las dos teorías anteriores, sus postulados se encuentran basados tanto la teoría contractual destacando el origen

del arbitraje y la jurisdiccional en virtud de los efectos y objetivo del sometimiento al arbitraje que es el de que sea un tercero ajeno a la justicia ordinaria quien ponga fin a una controversia, a través de una resolución.

La teoría mixta no trata de desechar las dos teorías, al contrario, busca amalgamar y afianzar las dos teorías antagónicas. Por un lado, reconoce la autonomía de la voluntad de las partes como esencial. Mientras que, por el otro, se debe tomar en cuenta que, sin reconocimiento del Estado, el arbitraje sería de poca utilidad. El arbitraje es pues para esta teoría un acuerdo de voluntades (un contrato) que tiene efectos jurisdiccionales.

Los aspectos medulares de la teoría contractual (el carácter contractual del laudo arbitral y el papel de los árbitros competentes designados para resolver la controversia) fueron objeto de una enérgica crítica. De la misma manera, la postura meramente jurisdiccional parecía incompleta en varios aspectos. Ante ello se realizaron intentos para conciliar las dos escuelas de pensamiento. Pese a ser totalmente opuestas, las teorías jurisdiccional y contractual pueden ser reconciliadas y así surgió la teoría mixta.

Así el doctor Francisco Gorjón (2001), menciona en su artículo: *Arbitraje Comercial, Paradigma del Derecho*, sobre el arbitraje mixto, lo siguiente:

(...) teoría mixta, el arbitraje es en su origen un negocio de derecho privado, como creación de la voluntad de los particulares, pero procesal por las sujeciones y las limitaciones a que esta voluntad es sometida, ante el auxilio del poder judicial por la carencia de coercibilidad, cuando de ejecución forzosa se trata (pág. 90).

De conformidad con esta postura, los árbitros realizan un acto jurisdiccional, pero carecen de poder judicial alguno. No existe acto alguno de delegación de poder estatal. Se limitan a resolver, en base a derecho, un conflicto. La función del árbitro es equivalente a la de un juez, pero no de un Estado particular. Mientras que un juez está investido en principio de poder público estatal, la decisión del árbitro no tiene dicho poder público. La posibilidad de que el laudo sea ejecutable mediante poder público deviene al momento de su ejecución, pero ello no modifica la naturaleza de la institución, sino que la enriquece al convertirla en una institución híbrida.

Por lo tanto, el árbitro en esta teoría realiza un acto jurisdiccional, pero carecen de poder judicial, ya que por medios coercitivos (cuando de ejecución forzosa se trate) no puede aplicar.

### **3.4. Importancia del Arbitraje**

Parafraseando a Sara Feldestein de Cárdenas (1998), podemos decir que:

No sólo en el Perú sino en muchos países de Latinoamérica, existe una justicia en crisis, saturada de expedientes, con una sobrecarga procesal, con normas procesales que originan desgaste a los abogados, funcionarios y partes; siendo además una justicia cara y lenta (pág. 1).

Todo ello lleva a que, en ocasiones, los que tienen problemas litigiosos no acudan a la justicia u opten por no hacerlo. En ambos casos, el resultado es la insatisfacción de los usuarios ante la insuficiencia del Sistema Judicial de cada Estado.

Esta es una situación real y difícil de solucionar a pesar de que se está buscando, como es el caso de nuestro país, una reestructuración y reorganización del Poder Judicial.

Las ventajas que ofrece un procedimiento arbitral son: justicia accesible y rápida, a menor costo o a un costo previsible, intermediación, idoneidad, confiabilidad.

Por tanto, el arbitraje es una institución sólida en el plano nacional o internacional donde se revaloriza la “autonomía de la voluntad”; la misma que constituye una alternativa que busca profundizar la armonía y la paz social, que es el fin del Derecho.

### **3.5. Objeto del Arbitraje**

Todo acto jurídico tiene un objetivo. En el procedimiento arbitral, en el cual dos partes suscriben un contrato y acuerdan la sumisión de sus conflictos actuales o futuros al conocimiento de los árbitros, según Fernando Cantuarias (1997), los interesados esperan tres cosas básicamente (pág. 59):

- i. Que surgida la controversia el acuerdo de arbitraje pueda ser ejecutado y por tanto el conflicto no termine en manos del Poder Judicial.
- ii. Que el procedimiento arbitral se rija en el acuerdo de las partes o que, en todo caso, la ley que lo regule sea lo suficientemente flexible como para que se acomode a sus necesidades; y

- iii. Que el laudo arbitral pueda ser ejecutado contra el perdedor en caso de incumplimiento.

Pues, de nada servirá si las partes pactaron someterse a un arbitraje, si las disposiciones que rigen el procedimiento arbitral no hacen sencillo su desarrollo de acuerdo a lo anhelado por las partes contratantes o que, una vez dictado el laudo arbitral, éste no pueda ejecutar contra el perdedor en caso de incumplimiento.

### **3.6. Características del Arbitraje**

Las características más relevantes del arbitraje son:

- i. Las partes voluntaria y libremente acuerdan renunciar a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia y se someten a la decisión de un tercero denominado árbitro a fin de resolver extrajudicialmente sus controversias.
- ii. Sólo puede ser materia de arbitraje aquellas cuestiones que tengan en esencia una finalidad patrimonial y de las cuales las partes pueden libremente disponer.
- iii. Es necesario e indispensable que exista previamente un convenio arbitral mediante el cual las partes renuncian a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia y se someten en forma expresa y legítima a la intervención de un tercero denominado árbitro quien finalmente resolverá la controversia mediante la expedición de un Laudo Arbitral.



### **3.7. Tipos de Arbitraje**

De acuerdo, con el artículo 7° de la Ley de Arbitraje – Decreto Legislativo Nº 1071, señala que este puede ser Ad hoc o institucional según sea conducido por el tribunal arbitral directamente u organizado y administrado por una institución arbitral. Asimismo, menciona que, en caso de la falta de designación de una institución arbitral, se entenderá que el arbitraje es Ad Hoc.

Sin embargo, es importante mencionar que atendiendo al ámbito de que se trate, se puede establecer diferentes clases o tipos de arbitraje, teniendo así la siguiente clasificación:

#### **3.7.1. Según la Decisión de las Partes**

##### **3.7.1.1. Arbitraje Institucional / Administrado<sup>5</sup>**

El arbitraje administrativo ha sido utilizado desde décadas anteriores principalmente en conflictos comerciales internacionales, se fundamente este tipo de arbitraje en el nombramiento de un arbitraje institucional, la cual tiene establecido con anticipación reglas y procedimientos propios para el proceso.

---

<sup>5</sup> Artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1071

En este tipo arbitraje, es una entidad especializada la que administra, organiza el trámite y presta servicios útiles para resolver la controversia.

En el arbitraje institucional son las propias partes quienes libre y voluntariamente consignan en el mismo convenio arbitral la institución a la cual se someten en competencia para que ésta resuelva en arbitraje sus competencias.

Cabe precisar, que las entidades dedicadas al arbitraje, habitualmente tienen un reglamento al cual los litigantes se someten, y que prevé la mayor parte de las contingencias que puedan ocasionarse en el curso del procedimiento arbitral. Por otra parte, suele tratarse de instituciones de reconocida versación y prestigio, que a lo largo del tiempo han ido perfeccionando y adaptando las reglas a las necesidades que se plantean en materia de solución de disputa, surgiendo los reglamentos de "arbitraje común" u otras variantes como "arbitraje acelerado", para optimizar la duración del proceso de gran importancia para el tiempo como factor fundamental.

De ordinario proveen formas standards para pactar el arbitraje a través de modelos de cláusula compromisoria y de compromiso arbitral que son el fruto de la experiencia.

Existen casos especiales de arbitraje institucional con un esquema diferente del que hemos visto, en los que la entidad tiene un grado de compromiso mayor y una participación más directa.

### **3.7.1.2. Arbitraje Libre o Ad Hoc<sup>6</sup>**

En este tipo de arbitraje, las partes no han acordado someter el mismo a la organización ni a la administración de una institución arbitral, por lo tanto, en este supuesto, serán las propias partes quienes regularán todos los aspectos y etapas del proceso arbitral, siendo regulado en defecto de éstas, por los árbitros.

En el arbitraje independiente o ad hoc, no existe ninguna institución que administre el sistema, son las propias partes las que suministran las normas sobre las que den actuar y todo lo necesario para que el arbitraje proceda.

Mediante el arbitraje ad hoc o arbitraje no administrado, las partes encargan la solución de sus controversias a un tribunal arbitral conformado por personas de reconocido prestigio, sin la intervención de una institución arbitral.

Las partes en el arbitraje ad hoc cuentan con todas las facultades para regular el procedimiento arbitral. Pueden crear reglas específicamente aplicables a la solución de su controversia. Debido a la libertad y flexibilidad en el desarrollo del arbitraje, la doctrina lo califica como un “arbitraje libre” o “arbitraje flexible”.

En opinión de Paolo del Águila (2005):

(...) en el arbitraje ad–hoc solamente se presentan las partes con los árbitros, prescindiendo del apoyo de terceros para la organización y administración del arbitraje. No se involucra, por tanto, a ninguna institución arbitral como facilitadora de las partes y árbitros para la resolución de la controversia; siendo, en ese sentido, la administración y organización aludidos de cargo de tales actores (pág. 237).

---

<sup>6</sup> Artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1071

### **3.7.2. Según la Calidad del Pronunciamiento, Actuación de los Árbitros y Naturaleza de la Decisión**

#### **3.7.2.1. Arbitraje de Derecho<sup>7</sup>**

En esta forma de arbitraje, el laudo arbitral deberá fundamentarse necesariamente en las normas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico material sustantivo, es decir, deberán aplicar las fuentes del derecho tales como la ley, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre conforme así se emite los fallos en los Tribunales de Justicia, por tanto, los árbitros deberán ser obligatoriamente abogados colegiados.

Cabe precisar que en el arbitraje de derecho las partes si no están conforme con el laudo arbitral, pueden si así lo estiman conveniente, interponer recurso de apelación a efectos de que el fondo de la controversia sea finalmente resuelto por una segunda instancia, la que podrá ser la misma entidad arbitral o en su defecto, si no la tuviere, la Sala Civil de La Corte Superior de Justicia.

#### **3.7.2.2. Arbitraje de Conciencia<sup>8</sup>**

En esta forma de arbitraje, el árbitro de conciencia puede dejar de lado la norma jurídica en el proceso mismo como en la sustentación del laudo; es decir que

---

<sup>7</sup> Artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1071

<sup>8</sup> Artículo 57 del Decreto Legislativo Nº 1071

resuelven de acuerdo a su criterio; sin embargo, esa discrecionalidad no es ilimitada puesto que debe respetar el principio elemental de garantizar la defensa en juicio, en él debe tener en cuenta la equidad.

No siendo necesario, por tanto, que los árbitros de conciencia sean abogados; así mismo para esta forma de arbitraje, contra el fallo arbitral no procede recurso de apelación alguno, el cual sólo es procedente cuando se trata de laudos arbitrales de derecho.

### **3.7.3. Según la Fuente de la cual Proviene: El Acuerdo de Voluntades o Disposición de la Ley**

#### **3.7.3.1. Arbitraje Voluntario**

El arbitraje voluntario como su nombre lo indica es aquel que se determina por libre voluntad con que se fija al árbitro, a las reglas de procedimiento en solución de las controversias.

En el arbitraje voluntario, predomina la voluntad de las partes en la disposición del ámbito y las reglas que rigen el mismo procedimiento. Sin embargo, la ley ritual le da un marco a esta opción sin restringir en demasía las facultades de las partes.

Es importante mencionar que, el arbitraje voluntario es uno de los arbitrajes más utilizados en muchas de las legislaciones puesto que establece el sometimiento discrecional de las controversias al arbitraje voluntario.

El fundamento jurídico del procedimiento del arbitraje voluntario requiere por lo general un acuerdo de las partes para someter el conflicto a este procedimiento, no puede verse el proceso como una implantación de reglas, se debe permitir a las partes emitir los criterios y las observaciones para definir el procedimiento que será aceptado por las partes.

Entonces el arbitraje voluntario parte de una cierta obligatoriedad, y con la aplicación de un proceso previamente establecido y acordado por las partes, se dictamina el laudo el cual puede ser rechazado con cierto tiempo límite por una de las partes del conflicto, este derecho debe ser respetado en la solución de la controversia.

### **3.7.3.2. Arbitraje Forzoso**

El arbitraje es forzoso cuando ha sido impuesto por el legislador, quien dispone quitar determinados litigios del ámbito de competencia de los jueces estatales, atribuyéndosela a los árbitros con carácter excluyente. La legislación de fondo y ritual se ha encargado de legislar esta modalidad compulsiva de arbitraje.

Este tipo de arbitraje exige el nombramiento de un árbitro legalmente constituido por la ley, esta persona es un tercero discernido que no represente a ninguna de las partes a fin de que su veredicto sea imparcial con respecto al objeto debatido.

Se justifica esta alternativa forzosa principalmente en la necesidad de sustraer del ámbito judicial y evitar a los jueces la resolución de determinados temas,

normalmente cuestiones de hecho, que exigirían procesos judiciales extensos en función de su tecnicismo, complejidad o incidencias.

Pero, por otro lado, la existencia del arbitraje forzoso se ve truncado por la dificultad para el logro de acuerdos. Las conversaciones pierden el carácter de una negociación y se convierten en un ejercicio especulativo de adivinación de los designios del árbitro, por lo tanto, las partes buscan la forma de no perder posiciones frente a la persona que va a resolver el conflicto, se pierde también el sentido de la voluntad de solucionar el conflicto y se transforma en una disputa en pro de una solución tratando de no perder posiciones, es decir no se actúa sólo en función de la meta que se procura.

#### **3.7.4. Según se trate de un Diferendo Nacional o Internacional**

##### **3.7.4.1. Arbitraje Nacional**

Es conocido también como doméstico o interno, se regula por la ley del Estado respectivo. El arbitraje nacional es aquel en el que las partes vinculadas pertenecen a un mismo Estado y los temas puestos en consideración vinculan al mismo Estado.

#### **3.7.4.2. Arbitraje Internacional<sup>9</sup>**

No existe uniformidad en la determinación de los factores que determinan en que caso nos encontramos ante un arbitraje internacional. Son arbitrajes en el que las partes vinculadas son dos o más Estados.

### **3.8. Principios del Arbitraje**

El Manual de Arbitraje del Ministerio de Justicia (2014), menciona que los principios que rigen el arbitraje son:

- i. Principio de Autonomía de la jurisdicción arbitral respecto a la jurisdicción judicial: Se reconoce la plena libertad que tiene el Tribunal Arbitral para resolver las controversias sometidas a su fuero y sin la intervención de ninguna autoridad, administrativa o judicial ordinaria.
- ii. Principio de Inmediación: Ambas partes en el ejercicio del derecho de defensa tienen el derecho de hacer partícipe o exponer sus medios de defensa y alegatos en presencia física de árbitro o tribunal arbitral.
- iii. Principio de autonomía de la voluntad: Se refleja en la voluntad expresada por las partes de someter voluntaria y libremente sus controversias presentes o futuras al arbitraje, prescindiendo de la jurisdicción judicial. Es decir, si los sujetos mediante la suscripción del convenio arbitral deciden someter una controversia a la decisión de los árbitros, excluyendo

---

<sup>9</sup> Artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1071



de este modo la vía jurisdiccional para su resolución, resultaría ilógico hacer intervenir de una forma notable a los órganos jurisdiccionales cuando precisamente los sujetos interesados han optado voluntariamente por su apartamiento.

- iv. Principio de Kompetenz - Kompetenz: Consiste en que el tribunal arbitral es competente para conocer sobre su propia competencia. Es decir, no es necesario recurrir a otra instancia para resolver la competencia, sino que permite que se resuelva el problema dentro del propio arbitraje por los árbitros y la decisión es inapelable.

Por otro lado, este principio faculta a los árbitros a decidir acerca de las materias de su competencia, a efectos de evitar que una de las partes, que no desea someterse al pacto de arbitraje, mediante un cuestionamiento de las decisiones arbitrales, pretenda convocar la participación de jueces mediante la interposición de cualquier acción de naturaleza civil, constitucional o penal.

- v. Principio de imparcialidad y neutralidad: Estos principios están dirigidos a los árbitros, ya que son los que deben seguir el proceso con imparcialidad, conservando su integridad y juicio, independientemente de la voluntad y parecer de las partes.

De esta manera, la imparcialidad estará sujeta a la conducta de los árbitros, de mantener una postura libre de prejuicios o favoritismo a través de sus acciones. En cambio, la neutralidad, se refiere a la existencia de un vínculo

ente el árbitro y las partes, un vínculo que podría dar como resultado un favoritismo.

### **3.9. Aspectos Procesales del Arbitraje**

#### **3.9.1. Convenio Arbitral**

El convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o que puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual, sean o no materia de un proceso judicial.

El convenio arbitral es indispensable para dar nacimiento al arbitraje. Mediante su estipulación las partes someten sus conflictos a la competencia de un tribunal arbitral.

Al respecto, el reconocido árbitro internacional Bernardo Cremades (2005), afirma que: “El convenio arbitral es la piedra angular del arbitraje, el cual nace como consecuencia de la autonomía de la voluntad de las partes, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico” (pág. 185).

Por regla general, el convenio arbitral nace del acuerdo de voluntades, vale decir, del consentimiento de las partes que intervienen en la relación contractual; sin embargo, la ley también permite que el arbitraje nazca de un acto unilateral.

Otra forma de convenio arbitral es el que nace del acuerdo plurilateral, como el contenido en los estatutos o normas equivalentes de sociedades civiles o mercantiles, asociaciones civiles y demás personas jurídicas, donde se pacta el arbitraje respecto de las controversias que pudieran tener con sus miembros, socios o asociados, las que surjan entre éstos respecto de sus derechos, las relativas al cumplimiento de los estatutos o validez de los acuerdos, y en general, para las demás que versen sobre materias relacionada con el objeto social.

En el convenio arbitral, las partes pueden estipular sanciones y garantías. Sanciones (penalidades) para la parte que incumpla algún acto necesario a fin de darle al convenio arbitral la eficacia necesaria y garantías con el fin de asegurar el cumplimiento del laudo arbitral.

Asimismo, en el convenio arbitral se pueden otorgar facultades especiales a los árbitros para que exijan la ejecución del laudo arbitral a la parte del procedimiento arbitral que se encuentre en rebeldía.

Ahora bien, el convenio arbitral, por regla general, debe celebrarse por escrito bajo sanción de nulidad. Por lo tanto, la ley exige una formalidad ad solemnitatem para la celebración del convenio arbitral. Dicho convenio arbitral puede constar en instrumento público o privado.

Es importante aclarar que, el convenio arbitral puede pactarse como parte integrante del contrato (por ejemplo, como una cláusula del contrato) o como un acuerdo independiente. Las partes tienen la libertad de pactar el convenio arbitral al tiempo

de celebrar el contrato e insertarlo como una cláusula o pactarlo con posterioridad, exista o no conflicto entre las partes.

#### **3.9.1.1. Efectos del Convenio Arbitral**

- i. El convenio arbitral obliga a las partes a lo estipulado de acuerdo con las reglas generales de la contratación y, en su momento, a someterse al laudo que dictan los árbitros.
- ii. Las partes van a ser quienes designen a las personas que van a componer el Tribunal Arbitral –sea este institucional o ad hoc– es por ello que quedan sometidas a las decisiones que éste emita como consecuencia del uso de su razón y criterio y en algunos casos del derecho; en tal sentido, la voluntad de un tercero, facultado para ello, va a dar solución a las controversias existentes.
- iii. Impide a los jueces y tribunales de justicia conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje.

Acertadamente sostienen algunos juristas que en cuanto a los efectos del convenio arbitral se distingue una doble eficacia:

- i. Una eficacia positiva, consisten en la obligación de las partes de someter la solución de las controversias que surjan entre ellas a la decisión de uno o más árbitros; y

- ii. Una eficacia negativa, que viene a ser la consecuencia de la primera de las nombradas, es decir, consistente en la sustracción de la controversia en cuestión al conocimiento de los tribunales de justicia.

### **3.9.2. Laudo Arbitral**

El laudo arbitral pone fin al proceso y a la competencia de los árbitros, ya que en éste los árbitros se pronuncian sobre la controversia sometida a su competencia.

El laudo arbitral tiene carácter definitivo e inapelable, salvo acuerdo de las partes. A la vez, tiene carácter de cosa juzgada y podrá ser ejecutado como una sentencia judicial.

Por lo tanto, el laudo arbitral es una decisión definitiva que otorga los árbitros respecto de todo el conflicto sometido a su conocimiento y demás asuntos que hayan surgido en la tramitación del procedimiento arbitral. Es así, que podemos afirmar que el laudo es la decisión final que dan los árbitros y contra esto solo procederá el recurso de anulación y al ser desestimado este recurso se podrá ir a un proceso constitucional que es el proceso de amparo, en el caso que se esté vulnerando el derecho a la tutela procesal efectiva.

### **3.9.2.1. Clases de Laudo**

El árbitro dentro del procedimiento arbitral tiene la facultad de dictar, salvo pacto en contrario de las partes, uno o más laudos arbitrales que resuelvan de manera definitiva todo o parte de la controversia sometida a su conocimiento.

#### **3.9.2.1.1. Laudo Final**

El laudo final es aquel mediante el cual el tribunal arbitral resuelve en un solo fallo todas las controversias sometidas a su conocimiento. Pero también, puede ser considerado laudo final aquel que culmina la tarea de los árbitros, luego de que se hayan dictado uno o más laudos parciales.

#### **3.9.2.1.2. Laudo Parcial**

Esta referido a aquellos laudos que resuelven de manera definitiva parte de la controversia sometida a conocimiento del tribunal arbitral, dejando pendiente de resolver el resto del conflicto.

Emitido el laudo parcial empezara a correr el plazo para solicitar la rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo. Luego del pronunciarse sobre estos se iniciará el plazo para interponer el recurso de anulación de laudo.

### **3.9.2.2. Efectos del Laudo Arbitral**

El laudo es la decisión emanada de los árbitros que pone fin al litigio, resolviendo definitivamente el diferendo que las partes les habían sometido. Tiene el carácter de una verdadera sentencia, e impone a las partes una solución para las diferencias que los separaban, considerándose una auténtica resolución que los árbitros expiden como consecuencia de la autoridad o poder de juzgar que las partes les dieron. El laudo arbitral tiene idéntica eficacia jurídica que las sentencias judiciales, ejecutándose por los mismos medios y procedimientos. El Estado pone a disposición de quien haya resultado beneficiado, su imperium y su estructura a los fines de ejercer coerción para lograr la satisfacción de los derechos que el laudo le atribuye.

La ausencia de imperium de los árbitros no perjudica la obligatoriedad del laudo, ya que el beneficiario de la condena dispuesta por los árbitros puede poner en marcha el aparato jurisdiccional público para hacer efectivos los derechos que el laudo le atribuye.

El laudo hace cosa juzgada respecto del fondo de las cuestiones que fueron sometidas a arbitraje y resueltas en él, de la misma forma que las sentencias de los tribunales ordinarios. Firme o consentido el laudo, las decisiones que contiene devienen irrevisables, no pudiendo las partes volver a plantearlas ante ningún otro tribunal, ni judicial ni arbitral. Adquieren la firmeza propia de un acto jurisdiccional, con eficacia para las partes, que pueden procurar su cumplimiento

forzado, y para los jueces, que carecen de potestad para revisar el contenido de un laudo consentido.



## CAPITULO IV

### LEGISLACION COMPARADA

#### 4.1. El Caso En Colombia

La ley que regula el proceso arbitral en el estado de Colombia es la ley N° 1563 del año 2012, la misma que en el artículo 88° establece lo siguiente:

Toda medida cautelar decretada por un tribunal arbitral será vinculante sin necesidad de procedimiento alguno de reconocimiento y, salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa, su ejecución podrá ser solicitada ante la autoridad judicial, cualquiera que sea el Estado en donde haya sido decretada. Para este efecto, la autoridad judicial procederá a la ejecución en la misma forma prevista por la ley para la ejecución de providencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales colombianas y dentro de dicho proceso solo podrán invocarse como excepciones las previstas en el artículo 89 de esta sección. La parte que solicite o haya obtenido de la autoridad judicial la ejecución de una medida cautelar deberá informarle a la autoridad judicial toda revocación, suspensión o modificación que de aquella disponga el tribunal arbitral. La autoridad judicial solo podrá pronunciarse sobre cauciones cuando el tribunal arbitral no se haya pronunciado sobre el particular, o cuando la caución sea necesaria para proteger los derechos de terceros respecto de los cuales el tribunal arbitral no hubiere tomado alguna decisión.

De la presente norma y específicamente del artículo citado se reconoce que la legislación colombiana persigue la misma teoría en la que el arbitraje no posee la característica de la *executio* puesto que como se observa requiere de la fuerza pública ordenada por una autoridad judicial para la ejecución de una cautelar.

#### 4.2. El Caso En Ecuador

En el presente estado la ley que regula el arbitraje es la Ley de Arbitraje y Mediación la misma que en su artículo 9° que regula las medidas cautelares establece lo siguiente:

Los árbitros podrán dictar medidas cautelares, de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil o las que se consideren necesarias para cada caso, para asegurar los bienes materia del proceso o para garantizar el resultado de éste. Los árbitros pueden exigir una garantía a quien solicite la medida, con el propósito de cubrir el pago del costo de tal medida y de la indemnización por daños y perjuicios a la parte contraria, si la pretensión fuera declarada infundada en el laudo. La parte contra quien se dicte la medida cautelar podrá pedir la suspensión de ésta, si rinde caución suficiente ante el tribunal. Para la ejecución de las medidas cautelares, los árbitros siempre que las partes así lo estipularen en el convenio arbitral, solicitarán el auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios sin tener que recurrir a juez ordinario alguno del lugar donde se encuentren los bienes o donde sea necesario adoptar las medidas. Si nada se estableciere en el convenio arbitral acerca de la ejecución de las medidas cautelares, cualquiera de las partes podrá solicitar a los jueces ordinarios que ordenen la ejecución de estas medidas, sujetándose a lo establecido en el párrafo dos (2) y tres (3) de este artículo, sin que esto signifique renuncia al convenio arbitral.

La posición que predomina en el estado ecuatoriano sigue siendo la de desconocer la facultad de poder ejecutar decisiones cautelares sin el amparo del poder judicial puesto que como se observa la regla es que si no se establece condición alguna, las partes, en caso requieran la ejecución de medidas cautelares deberán recurrir a la autoridad judicial.

Por otro lado, es necesario reconocer la facultad que tienen las partes de pactar la ejecución de cautelares con el apoyo de la fuerza pública sin requerir de una

autoridad judicial con lo cual se observa que la facultad de *executio* es otorgada por la voluntad de las partes al proceso.

#### 4.3. El Caso En Chile

Cuando hablamos de la justicia arbitral en Sudamérica, es imprescindible mencionar a la legislación Chilena, en donde la ley que regula la materia es la Ley N°19.971, publicada en el Diario Oficial de 29 de septiembre de 2004, la cual del análisis realizado, podemos concluir que mantienen la posición de no otorgar a los árbitros la facultad de ejecutar sus propios laudos, y tampoco las medidas cautelares dictadas, las mismas que mediante pacto en el convenio arbitral, por acuerdo posterior o por la propia voluntad individual de las partes, podrán exigir a los tribunales judiciales, el cumplimiento de estas medidas.

#### 4.4. El Caso Europeo - España

En el sistema jurídico español encontramos a la Ley 60/2003, como ley que regula el arbitraje, en donde el numeral V de la Exposición de Motivos, a propósito del tema de nuestra investigación, indica lo siguiente:

El artículo 22 establece la regla, capital para el arbitraje, de que los árbitros tienen potestad para decidir sobre su competencia. Es la regla que la doctrina ha bautizado con la expresión alemana *Kompetenz-Kompetenz* y que la Ley de 1988 ya consagraba en términos menos precisos. Esta regla abarca lo que se conoce como separabilidad del convenio arbitral respecto del contrato principal, en el sentido de que la validez del convenio arbitral no depende de la del contrato principal y que los árbitros tienen competencia para juzgar incluso sobre la validez del convenio arbitral. Además, bajo el término genérico de competencia han de entenderse incluidas no sólo las cuestiones que estrictamente son tales, sino cualesquiera cuestiones que puedan obstar a un pronunciamiento de fondo sobre

la controversia (salvo las relativas a las personas de los árbitros, que tienen su tratamiento propio). La ley establece la carga de que las cuestiones relativas a la competencia de los árbitros sean planteadas a limine. Ha de resaltarse que el hecho de que una de las partes colabore activamente en la designación de los árbitros no supone ningún tipo de renuncia tácita a hacer valer la incompetencia objetiva de éstos. Es una lógica consecuencia de la regla de Kompetenz-Kompetenz: si son los árbitros los que han de decidir sobre su propia competencia, la parte está simplemente contribuyendo a designar a quien o a quienes podrán decidir sobre dicha competencia. Lo contrario abocaría a la parte a una situación absurda: debería permanecer pasiva durante la designación de los árbitros para poder luego alegar su falta de competencia sobre la controversia. La regla de la alegación previa de las cuestiones atinentes a la competencia de los árbitros tiene una razonable modulación en los casos en que la alegación tardía está, a juicio de los árbitros, justificada, en la medida en que la parte no pudo realizar esa alegación con anterioridad y que su actitud durante el procedimiento no puede ser interpretada como una aceptación de la competencia de los árbitros. Queda a la apreciación de los árbitros la conveniencia de que las cuestiones relativas a su competencia sean resueltas con carácter previo o junto con las cuestiones de fondo. La ley parte de la base de que los árbitros pueden dictar tantos laudos como consideren necesarios, ya sea para resolver cuestiones procesales o de fondo; o dictar un solo laudo resolviendo todas ellas. El artículo 23 incorpora una de las principales novedades de la ley: la potestad de los árbitros para adoptar medidas cautelares. Dicha potestad puede ser excluida por las partes, directamente o por remisión a un reglamento arbitral; pero en otro caso se considera que la aceptan. La ley ha considerado preferible no entrar a determinar el ámbito de esta potestad cautelar. Obviamente, los árbitros carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la ejecución de las medidas cautelares será necesario recurrir a la autoridad judicial, en los mismos términos que si de un laudo sobre el fondo se tratara. Sin embargo, si dentro de la actividad cautelar cabe distinguir entre una vertiente declarativa y otra ejecutiva, esta ley les reconoce a los árbitros la primera, salvo acuerdo en contrario de las partes. Esta norma no deroga ni restringe la posibilidad, prevista en los artículos 8 y 11 de esta ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de que la parte interesada inste de la autoridad judicial la adopción de medidas cautelares. Las potestades arbitral y judicial en materia cautelar son alternativas y concurrentes, sin perjuicio del juego del principio de buena fe procesal.

Asimismo el Art.23 de la norma citada, en su texto precisa:

Artículo 23. Potestad de los árbitros de adoptar medidas cautelares.

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán, a instancia de cualquiera de ellas, adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio. Los árbitros podrán exigir caución suficiente al solicitante.

2. A las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que sea la forma que revistan, les serán de aplicación las normas sobre anulación y ejecución forzosa de laudos.

La normatividad española citada, al parecer reconoce que la facultad de ejecutar sus resoluciones compete al estado, pero asimismo innova y precisa que no será necesario recurrir al poder judicial para que ejecute una medida cautelar, si se ha pactado por las partes, la ejecución de las decisiones de manera directa, por lo que el árbitro o tribunal arbitral podrá prescindir de una orden judicial para ejecutar la medida cautelar, con lo cual adquiere todas las facultades de la jurisdicción.

#### 4.5. Ley Modelo De La Comisión De Las Naciones Unidas Para El Derecho Mercantil Internacional - CNUDMI, Sobre Arbitraje Comercial Internacional - 1985

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) fue establecida por la Asamblea General en 1966 (resolución 2205 (XXI), de 17 de diciembre de 1966). La Asamblea General, al establecer la Comisión, reconoció que las disparidades entre las leyes nacionales que regían el comercio internacional creaban obstáculos para ese comercio, y consideró que, mediante la Comisión, las Naciones Unidas podría desempeñar un papel más activo en la reducción o eliminación de esos obstáculos.

La Asamblea General dio a la Comisión el mandato general de fomentar la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional. Desde entonces, la Comisión se ha convertido en el órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional.

La Ley Modelo de la CNUDMI (Ley de la UNCITRAL, en su versión en inglés), su versión original dada en 1985, y enmendada en 2006, está formulada para ayudar a los Estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbitral a fin de que tengan en cuenta los rasgos peculiares y las necesidades del arbitraje comercial internacional. Regula todas las etapas del procedimiento arbitral, desde el acuerdo de arbitraje, pasando por la composición y competencia del tribunal arbitral y el alcance de la intervención del tribunal, **hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral**. Refleja un consenso mundial sobre los aspectos más importantes de la práctica del arbitraje internacional aceptados por Estados de todas las regiones y los diferentes ordenamientos jurídicos o sistemas económicos del mundo.

El 7 de julio de 2006, la CNUDMI aprobó enmiendas del párrafo 2 del artículo 1, del artículo 7 y del párrafo 2 del artículo 35, el nuevo capítulo IV A que sustituye al artículo 17 y un nuevo artículo 2A. La versión revisada del artículo 7 tiene por objeto modernizar el requisito de la forma para los acuerdos arbitrales a fin de observar más estrictamente las prácticas contractuales internacionales. El nuevo capítulo IV A establece un régimen jurídico más amplio relativo a las medidas provisionales en apoyo del arbitraje. Desde 2006, la versión estándar de la Ley Modelo es la versión enmendada. También se reproduce el texto original de 1985

en vista del gran número de leyes nacionales que se han basado en esa versión original.

Esta norma regula en su artículo 17 H denominado *Reconocimiento y Ejecución*, lo siguiente:

- 1) Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral se reconocerá como vinculante y, salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa, será ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el tribunal competente, cualquiera que sea el Estado en donde haya sido ordenada, y a reserva de lo dispuesto en el artículo 17 I.
- 2) La parte que solicite o haya obtenido el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar informará sin demora al tribunal de toda revocación, suspensión o modificación que se ordene de dicha medida.
- 3) El tribunal ante el que sea solicitado el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar podrá, si lo considera oportuno, exigir de la parte solicitante que preste una garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral no se haya pronunciado aún sobre tal garantía o cuando esa garantía sea necesaria para proteger los derechos de terceros.

Por tanto, observamos que esta norma también refiere que serán las partes las que deberán acudir al tribunal judicial (entendiéndose como tribunal competente, según lo regulado en el numeral 1° del artículo citado) para solicitar la ejecución de la medida cautelar dictada; con esto se tiene que esta norma de rango internacional también mantiene la teoría de que la jurisdicción arbitral carece de executio.

## **CAPÍTULO V**

### **ANÁLISIS Y RESULTADOS**

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, se procedió al análisis de la realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho Arbitral.

En ese sentido se compuso el trabajo de campo conformado por el análisis de la realidad mediante la observación de cifras estadísticas y aportes mediáticos respecto a la problemática observada por la investigación.

#### **4.1. Análisis de los resultados:**

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según corresponda al rubro, de la siguiente manera:

##### **4.1.1. Resultados del análisis jurisdiccional.**

Corresponde en esta sección realizar la observación del tratamiento de las ejecuciones judiciales en el distrito Judicial de Lambayeque, para lo cual se ha tomado los siguientes datos como muestra:



## Análisis temporal de los expedientes de procesos ejecutivos de laudo arbitral 2017

<b>N° Exp.</b>	<b>Organo Jurisdiccional</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Ultimo acto Procs.</b>	<b>Materia</b>	<b>Estado y Rango de demora</b>
					En proceso
00281-2017-61-1706-JR-CI-01	8° JUZGADO CIVIL – COMERCIAL	31/01/2017	30/06/2018	EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES	7 meses
					En proceso
00310-2017-0-1706-JR-CI-06	8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL	07/02/2017	1 9/11/2018	EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES	21 meses
					En proceso
00780-2017-0-1706-JR-CI-04	8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL	19/04/2017	30/06/2018	EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES	14 meses
00928-2017-0-1706-JR-CI-07	8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL	12/05/2017	16/01/2019	EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES	SENTENCIA DO/ RESUELTO 20 meses

01394- 2017-0- 1706-JR- CI-05	8° JUZGADO CIVIL - COMERCIA L	17/07/2017	17/10/2017	EJECUCION DE LAUDOS ARBITRAL ES	INADMISIBL E  3 meses
--	---	------------	------------	---	--------------------------------

**Análisis temporal de los expedientes de procesos ejecutivos de laudo arbitral 2018**

<b>N° Exp.</b>	<b>Organo Jurisdicciona l</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Ultimo acto Procs.</b>	<b>Materia</b>	<b>Estado y rango de demora</b>
01117- 2018-0- 1707-JR- CI-01	Juzgado Civil Sede Ferreñafe	11/05/2018	23/11/2018	Ejecucion De Laudos Arbitrales	EJECUCION  6 meses
02316- 2018-0- 1706-JR- CI-05	8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL	27/09/2018	04/01/2019	Ejecucion De Laudos Arbitrales	EN TRAMITE(Pe ndiente)  4 meses

02118- 2018-0- 1706-JR- CI-03	8° JUZGADO CIVIL – COMERCIAL	10/09/2018	10/01/2019	EJECUCIO N DE LAUDOS ARBITRAL ES	INADMISIBL E  4 meses
02316- 2018-0- 1706-JR- CI-05	8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL	27/09/2018	04/01/2019	EJECUCIO N DE LAUDOS ARBITRAL ES	EN TRAMITE(Pe ndiente)  4 meses
02765- 2018-0- 1706-JR- CI-05	8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL	23/11/2018	10/01/2019	EJECUCIO N DE LAUDOS ARBITRAL ES	INADMISIBL E  2 meses

De los contenidos resultantes en los cuadros mostrados, se puede advertir que existe una excesiva e innecesaria demora del trámite en los procesos de ejecución, siendo que ésta debiera de hacerse de cumplimiento inmediato, ello dado a que se someten a la carga procesal del poder judicial, tomando sólo como referencia que la demora de resolución de sentencia excesiva es de 20 meses, mientras que para alcanzar el estado de ejecución el mínimo es de 6 meses; por otro lado se aprecia el rango establecido para los expedientes en trámite entre 2 meses el más corto y 21 el más prolongado.

Todo ello procura un resultado que permite aseverar que los procesos de ejecución de laudo arbitral trasladados a sede judicial padecen de una demora excesiva lo cual resulta perjudicial para las partes interesadas, así como también desdibujan la naturaleza jurídica del proceso arbitral.

#### **4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.**

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación.

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las conclusiones.

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente como sigue:

#### **Tabla N° 01:**

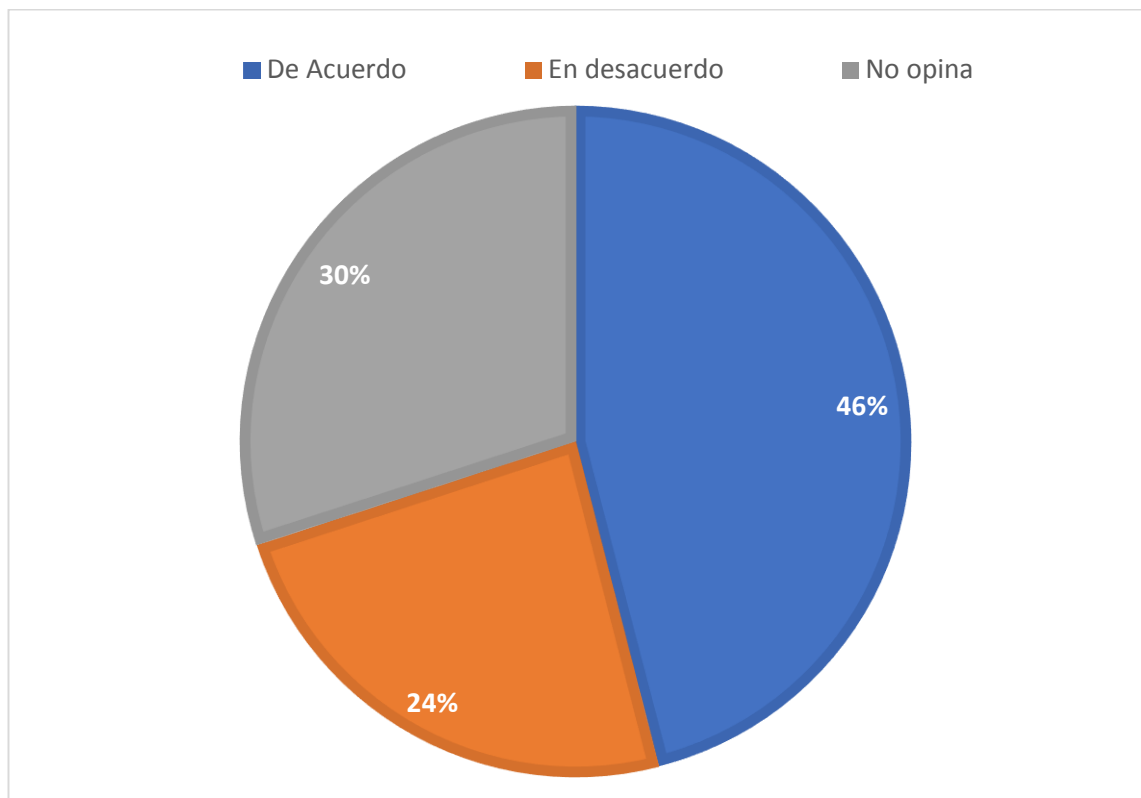
- 
1. La Executio es un poder que permite al Juez, mediante actos coactivos, hacer cumplir el mandato cierto contenido en un título ejecutivo cuando no se dé el cumplimiento voluntario por parte del obligado por la prestación insatisfecha.
-

Desacuerdo	12
No opina	15
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>

**Fuente:** Elaboración personal como resultado de la aplicación de encuesta a operadores jurídicos.

Tal cual se aprecia del cuadro que muestra los resultados obtenidos de la primera afirmación en el cuestionario que recoge la apreciación de los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, respecto al planteamiento de la executio como un poder del Juez para hacer cumplir el mandato cierto contenido en un título ejecutivo cuando no se dé el cumplimiento voluntario por parte del obligado por la prestación insatisfecha, se tiene 23 individuos están de acuerdo con esta postura, 12 están en desacuerdo y 15 han preferido no opinar sobre el particular, tales resultados se graficarán a continuación mediante porcentajes a fin de poder evaluar de una forma más adecuada.

*Ilustración 1: Gráfico porcentual de la Tabla N° 1*



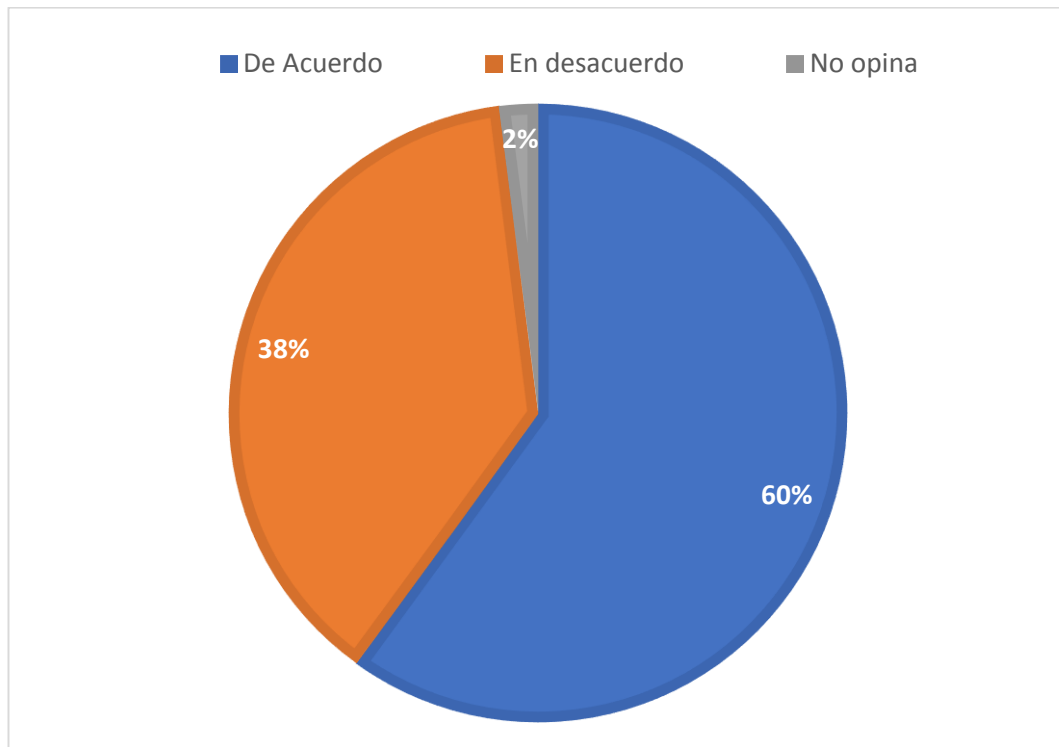
Se aprecia de los gráficos porcentuales que siendo el porcentaje más alto el de 46% relacionado con la población jurídica que se encuentra de acuerdo con la definición de excecutio como principio, constituye casi la mitad de los operadores jurídicos que tienen un conocimiento acertado sobre el concepto indicado, mientras que un importante porcentaje esta relacionado con el grupo de personas que prefieren no opinar, esto es un 30 % lo cual es un tercio de la población jurídica que podría estar adoptando esta actitud en razón del desconocimiento del principio o de su contenido, lo que resulta de imperio tener en cuenta puesto que la desinformación de parte de aquellos que tienen en sus manos la operatividad de las decisiones que se adoptan en razón de la justicia se presume han de conocer aspectos tan importantes como el desarrollado en la afirmación que compone este primer nivel del cuestionario de encuesta.

**Tabla N° 02:**

2. El árbitro no tiene jurisdicción, ni imperium. Su misión no es decir el derecho ni ejercer la coercitio procesal; ni tiene su sentencia efecto coactivo en el sentido de ejecutabilidad. Es un juez arbitrado y como tal deriva su función de la voluntad de las partes.	
a) Acuerdo	30
b) Desacuerdo	19
c) No opina	1
TOTAL	50

**Fuente:** Elaboración personal como resultado de la aplicación de encuesta a operadores jurídicos.

Tal cual se aprecia del cuadro que muestra los resultados obtenidos de la segunda afirmación en el cuestionario que recoge la apreciación de los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, respecto al planteamiento de el árbitro no tiene jurisdicción, ni imperium. Su misión no es decir el derecho ni ejercer la coercitio procesal; ni tiene su sentencia efecto coactivo en el sentido de ejecutabilidad. Es un juez arbitrado y como tal deriva su función de la voluntad de las partes, se tiene 30 individuos estan de acuerdo con esta postura, 19 estan en desacuerdo y solo 01 han preferido no opinar sobre el particular, tales resultados se graficarán a continuación mediante porcentajes a fin de poder evaluar de una forma más adecuada.



Se aprecia de los gráficos porcentuales que siendo el porcentaje más alto el de 60% relacionado con la población jurídica que se encuentra de acuerdo con la definición del árbitro como principio, constituye mas de la mitad de los operadores jurídicos que tienen un conocimiento acertado sobre el concepto indicado, mientras que un menor porcentaje está relacionado con el grupo de personas que prefieren no opinar, esto es un 2 % lo cual es un mínimo de la población jurídica que podría estar adoptando esta actitud en razón del desconocimiento del principio o de su contenido, lo que resulta de imperio tener en cuenta puesto que la desinformación de parte de aquellos que tienen en sus manos la operatividad de las decisiones que se adoptan en razón de la justicia se



presume han de conocer aspectos tan importantes como el desarrollado en la afirmación que compone este primer nivel del cuestionario de encuesta.

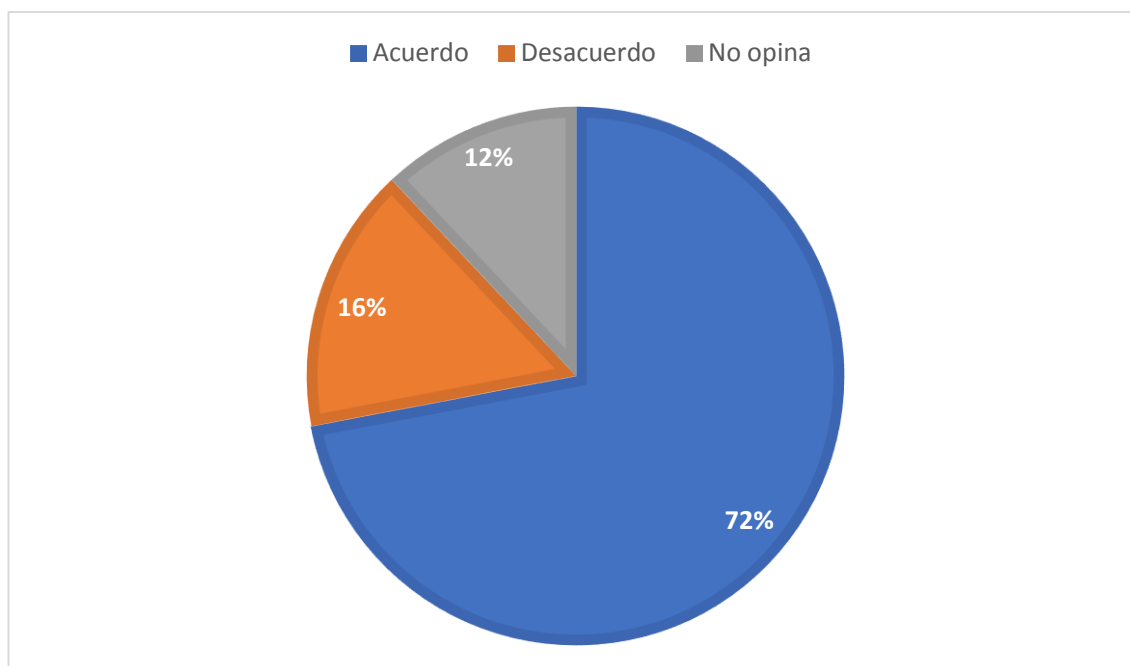
**Tabla N° 03:**

3. La posibilidad de que el laudo sea ejecutable mediante poder público deviene al momento de su ejecución, pero ello no modifica la naturaleza de la institución, sino que la enriquece al convertirla en una institución híbrida	
a) Acuerdo	36
b) Desacuerdo	8
c) No opina	6
TOTAL	50

**Fuente:** Elaboración personal como resultado de la aplicación de encuesta a operadores jurídicos.

Como se aprecia del cuadro que muestra los resultados obtenidos de la tercera afirmación en el cuestionario que recoge la apreciación de los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, respecto al planteamiento de La posibilidad de que el laudo sea ejecutable mediante poder público deviene al momento de su ejecución, pero ello no modifica la naturaleza de la institución, sino que la enriquece al convertirla en una institución híbrida, se tiene 36 individuos están de acuerdo con esta postura, 18 están en desacuerdo y solo 06 han preferido no opinar sobre el

particular, tales resultados se graficarán a continuación mediante porcentajes a fin de poder evaluar de una forma más adecuada.



Se aprecia de los gráficos porcentuales que siendo el porcentaje más alto el de 72% relacionado con la población jurídica que se encuentra de acuerdo con la pregunta formulada, constituye más de la mitad de los operadores jurídicos que tienen un conocimiento acertado sobre el concepto indicado, mientras que un importante porcentaje está relacionado con el grupo de personas que prefieren no opinar, esto es un 12 % de la población jurídica que podría estar adoptando esta actitud en razón del desconocimiento, lo que resulta de imperio tener en cuenta puesto que la desinformación de parte de aquellos que tienen en sus manos la operatividad de las decisiones que se adoptan en razón de la justicia se presume han de conocer aspectos tan importantes como el desarrollado en la afirmación que compone este primer nivel del cuestionario de encuesta.

**Tabla N° 04:**

---

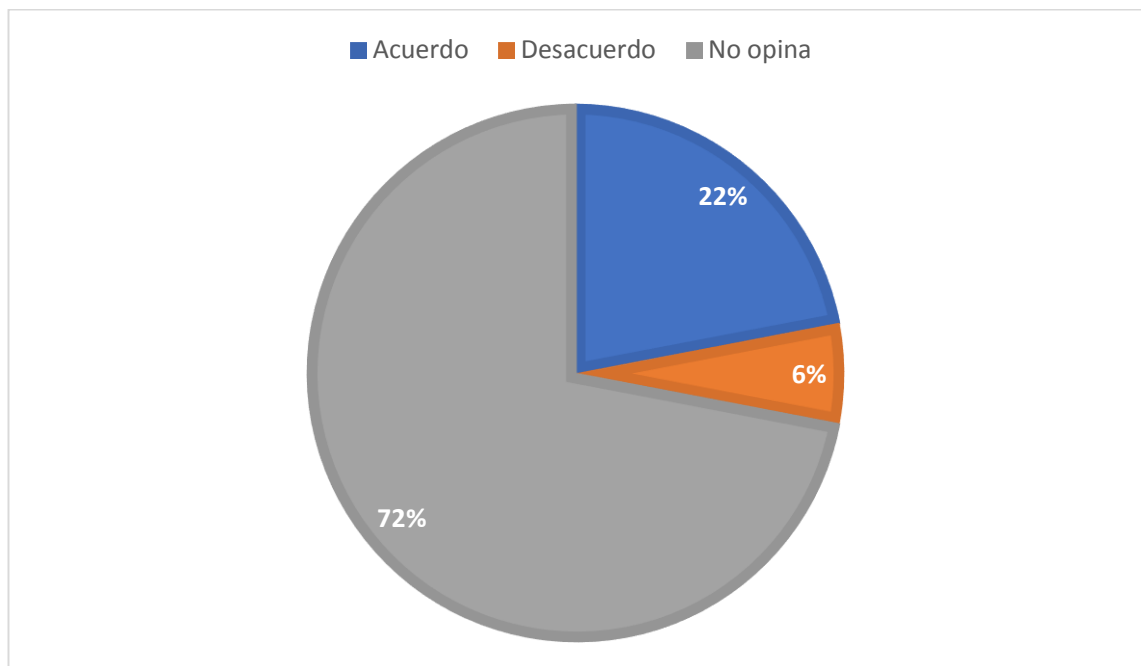
4. El laudo arbitral tiene idéntica eficacia jurídica que las sentencias judiciales,

---

ejecutándose por los mismos medios y procedimientos.	
a. De acuerdo.	11
b. En desacuerdo.	3
c. No opina.	36
TOTAL	50

**Fuente:** Elaboración personal como resultado de la aplicación de encuesta a operadores jurídicos.

Tal cual se aprecia del cuadro que muestra los resultados obtenidos de la cuarta afirmación en el cuestionario que recoge la apreciación de los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, respecto al planteamiento de El laudo arbitral tiene idéntica eficacia jurídica que las sentencias judiciales, ejecutándose por los mismos medios y procedimientos., se tiene 11 individuos están de acuerdo con esta postura, 03 están en desacuerdo y por amplia mayoría 36 han preferido no opinar sobre el particular, tales resultados se graficarán a continuación mediante porcentajes a fin de poder evaluar de una forma más adecuada



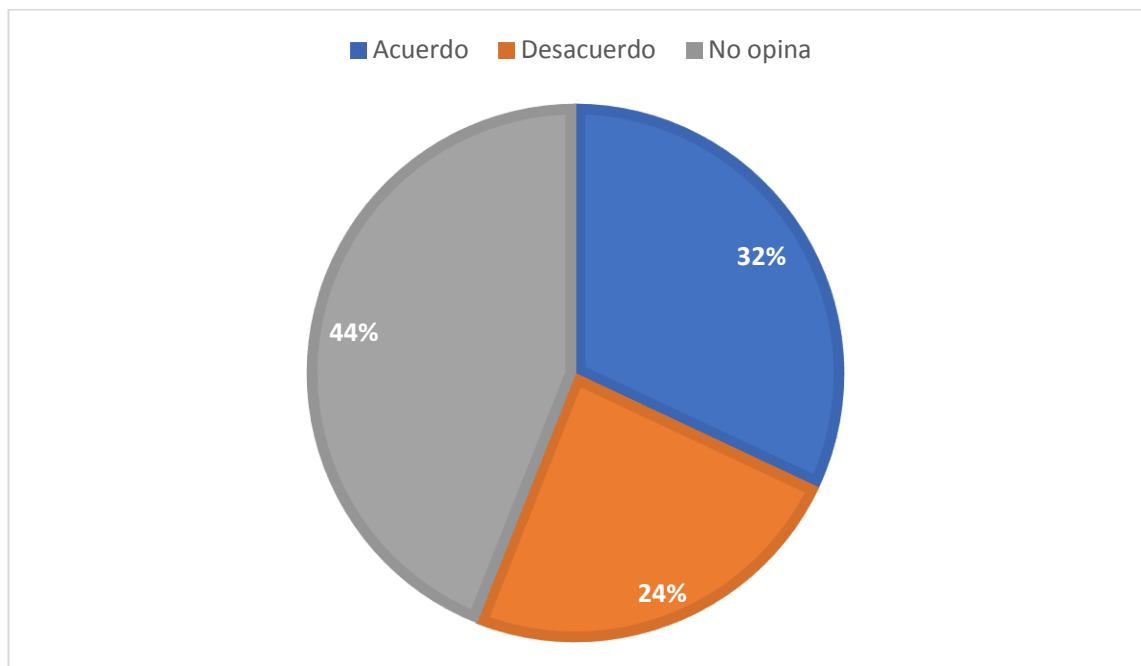
Se aprecia de los gráficos porcentuales que siendo el porcentaje más alto el de 72% relacionado con la población jurídica que no opina a la interrogante planteada, mientras que en un menor porcentaje esta relacionado al grupo de personas que se refieren estar de acuerdo, esto es un 22% y en un mínimo porcentaje de 06% está relacionado con están en desacuerdo al laudo arbitral que tiene idéntica eficacia jurídica que las sentencias judiciales, ejecutándose por los mismos medios y procedimientos.

**Tabla N° 05:**

5. El laudo arbitral tiene carácter definitivo e inapelable, salvo acuerdo de las partes; tiene carácter de cosa juzgada; es la decisión final que dan los árbitros y contra esto solo procederá el recurso de anulación y al ser desestimado este recurso se podrá ir a un proceso constitucional que es el proceso de amparo, en el caso que se esté vulnerando el derecho a la tutela procesal efectiva.	
a. De acuerdo.	16
b. En desacuerdo.	12
c. No opina.	22
TOTAL	50

**Fuente:** Elaboración personal como resultado de la aplicación de encuesta a operadores jurídicos.

Como se aprecia del cuadro que muestra los resultados obtenidos de la quinta afirmación en el cuestionario que recoge la apreciación de los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, respecto al planteamiento del laudo arbitral tiene carácter definitivo e inapelable, salvo acuerdo de las partes; tiene carácter de cosa juzgada; es la decisión final que dan los árbitros y contra esto solo procederá el recurso de anulación y al ser desestimado este recurso se podrá ir a un proceso constitucional que es el proceso de amparo, en el caso que se esté vulnerando el derecho a la tutela procesal efectiva., se tiene 16 individuos están de acuerdo con esta postura, 12 están en desacuerdo y en una amplia mayoría 22 han preferido no opinar sobre el particular, tales resultados se graficarán a continuación mediante porcentajes a fin de poder evaluar de una forma más adecuada.



Se aprecia de los gráficos porcentuales que siendo el porcentaje más alto el de 44% relacionado con la población jurídica que no opina, constituye casi la mitad de los operadores jurídicos que no tienen un conocimiento acertado sobre el concepto indicado, mientras que un importante porcentaje está relacionado con el grupo de personas que prefieren estar de acuerdo, esto es un 32 % lo cual es un tercio de la población jurídica.

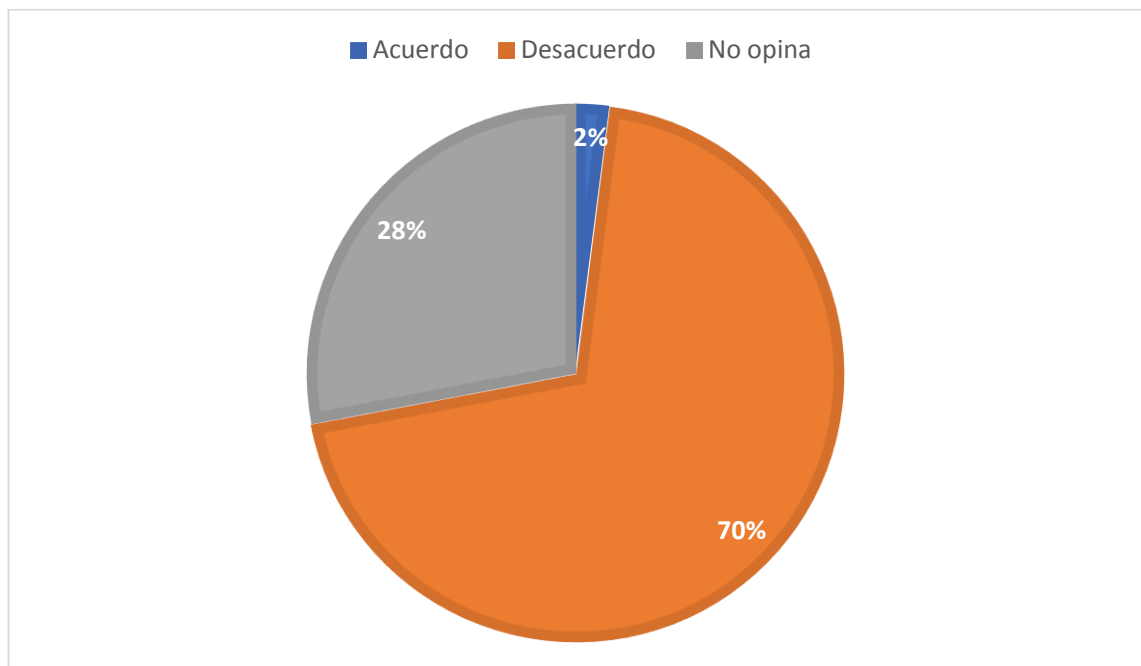
**Tabla N° 06:**

6. El laudo arbitral tiene idéntica eficacia jurídica que las sentencias judiciales, ejecutándose por los mismos medios y procedimientos. El Estado pone a disposición de quien haya resultado beneficiado, su imperium y su estructura a los fines de ejercer coerción para lograr la satisfacción de los derechos que el laudo le atribuye, las mismas que deberían ejercerse en forma directa por parte del mismo árbitro	
a. De acuerdo.	1
b. En desacuerdo.	35
c. No opina.	14
TOTAL	50

**Fuente:** Elaboración personal como resultado de la aplicación de encuesta a operadores jurídicos.

Tal cual se aprecia del cuadro que muestra los resultados obtenidos de la sexta afirmación en el cuestionario que recoge la apreciación de los operadores jurídicos en el distrito judicial de Lambayeque, respecto al planteamiento del El laudo arbitral tiene idéntica eficacia jurídica que las sentencias judiciales, ejecutándose por los mismos medios y procedimientos. El Estado pone a disposición de quien haya resultado beneficiado, su imperium y su estructura a los fines de ejercer coerción para lograr la satisfacción de los derechos que el laudo le atribuye, las mismas que deberían ejercerse en forma directa por parte del mismo árbitro, se tiene 35 individuos están en desacuerdo con esta postura, 14 no opinan y solo 01 está de acuerdo, tales resultados se graficarán a continuación mediante porcentajes a fin de poder evaluar de una forma más adecuada.

.



Se aprecia de los gráficos porcentuales que siendo el porcentaje más alto el de 70% relacionado con la población jurídica que se encuentra en desacuerdo constituye más de la mitad de los operadores jurídicos que tienen un conocimiento acertado sobre el concepto indicado, mientras que en un 28 % lo cual es un tercio de la población jurídica está de acuerdo a la pregunta formulada.



## CAPÍTULO VI

### CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

#### **5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS**

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su validez y finalmente conseguir.

##### **5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la executio como potestad de imperio procesal”**

¿De que manera se puede describir adecuadamente la executio como potestad de imperio procesal?

La investigación proyectada se ocupa del desarrollo de la doctrina que conforme la base jurídica que permita tener claro el contenido de la executio como principio procesal, así lo que interesa saber para entenderla, es la finalidad que persigue en nuestro sistema, por lo mismo que se recurre a la siguiente afirmación:

La Executio es un poder que permite al Juez, mediante actos coactivos, hacer cumplir el mandato cierto contenido en un título ejecutivo cuando no se dé el cumplimiento voluntario por parte del obligado por la prestación insatisfecha.

En tal sentido y teniendo en cuenta que el Juez puede hacer ejercicio de actos coactivos para el cumplimiento o ejecución del mandato en tanto no se haga por falta de voluntad de quien este obligado a cumplir, resulta lo mismo decir que se

trata de una línea de acción del imperio mismo del Estado para ejercicio del control del poder, puesto que el Poder Judicial detenta esta potestad a la cual todos los ciudadanos se someten con el fin de establecer justicia.

¿Cuál es el alcance del imperio procesal ejercido a través de la executio?

Corresponde seguir la línea de la discusión anterior, puesto que el imperio como parte del ejercicio del poder se controla a través de la executio, en ese sentido el alcance de dicha característica procesal estará en función a los límites de la obligación misma, por lo cual la extensión propuesta a la esfera del arbitraje, no es una idea descabellada que sugiere la excesiva potestad del ejercicio de la executio, puesto que tal cual se evidencia en el desarrollo de la potestad por parte de los jueces, también los árbitros tendrán límites de acción que estarán marcados por la obligación misma que se exige en ejecución.

#### **5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la estructura del proceso de arbitraje en el Perú”.**

¿Qué tan adecuada es la estructura del proceso de arbitraje en el Perú?

La descripción que se pueda hacer de la estructura del proceso de arbitraje siempre estará direccionada hacia la finalidad del mismo por lo cual debe hacerse teniendo en cuenta su configuración en la estructura misma del Estado.

Tal cual lo diseña la Constitución Política, el arbitraje forma parte de la composición del acceso a la justicia o su control en la estructura del Estado, tal cual lo indica el jurista Quiroga(1989), cuando señala que:

(...) la denominada “jurisdicción arbitral” que en puridad no es una jurisdicción diferente a la del Poder Judicial. Sin embargo, las

excepciones a la regla general no están a su vez exceptuadas del cumplimiento de las Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia ni de los principios básicos del Debido Proceso Legal, de tal modo que no podrá existir juzgamiento militar válido, ni soportable por nuestra estructura constitucional (recordemos que las dos excepciones están igualmente sometidas a la autoridad de la Constitución) si es que en su realidad se han cumplido las reglas esenciales del juzgamiento justo que precisamente la Constitución y los Pactos Internacionales prescriben de modo imperativo. E igual principio debe regir también en las reglas procesales que terminen siendo pactadas dentro de un compromiso arbitral (pág. 308)

Entonces la jurisdicción arbitral tiene por finalidad impartir justicia, con la peculiar característica de que el alcance de esta finalidad esta direccionado en razón de la manifestación de voluntad de someterse a este tipo de jurisdicción especial; sin duda alguna el hecho de que la estructura este controlada por la misma estructura procesal diseñada en el sistema y más aún por la Constitución Política misma, ha de entenderse con ello que la finalidad es otorgar un derecho a quien corresponda y en tanto esto se refleje en el laudo que jurídicamente es válida en razón del respeto de los principios procesales y constitucionales, la ejecución de la obligación señalada, en tanto significa un derecho demostrado y válido, bien puede ser pasible de ejecución a cargo de quien brindó la decisión; tan igual sucede con el juzgador que otorga el derecho y ante el incumplimiento procede a la ejecución del mismo. Tal sugerencia, no constituye una extralimitación de potestades, puesto que lo que se lograría es cerrar el círculo del imperio que es otorgado al árbitro por quienes deciden someterse al arbitraje, esto en base de la manifestación de voluntad de los ciudadanos que forman parte del pueblo y que precisamente el imperio que significa el poder del Estado mismo mana del pueblo.

Por otro lado es importante reconocer que la potestad ejecutiva de la obligación exigida en el laudo corresponde a la consagración de un derecho jurídicamente validado por la decisión del árbitro, por lo mismo que la ejecución no sobre pasa ningún límite de legalidad o abuso de derecho, en tanto no constituye ningún perjuicio, sino más el bien el reconocimiento de un derecho; en es sentido sólo debería atenderse en vía judicial en tanto la ejecución realizada en vía arbitral constituya vulneración de un derecho y ésta tenga que demostrarse mediante una evaluación judicial en base a la contrastación con otros derechos, esto último si justificaría el pase al ámbito del Poder Judicial puesto que ya constituiría un conflicto de intereses nuevo, lejos de la idea de un conflicto que ya ha sido resuelto y sólo hace falta ejecutar coercitivamente.

**5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la necesidad de modificar la regla de ejecución del laudo arbitral a fin de proporcionarle eficacia al proceso”.**

La propuesta diseñada dese el proyecto de investigación hace referencia a la incorporación de una modificatoria en la regla de ejecución del laudo arbitral, sin duda alguna ello puede ser catalogado como se ha dicho antes, de excesiva potestad sugerida para los árbitros a quienes no les asiste el imperium; sin embargo la postura se sostiene en razón de la equiparación de la estructura procesal, contenido y finalidad de la jurisdicción arbitral.

En ese sentido es importante reseñar la parte más importante del arbitraje, ello es aquel instrumento denominado laudo que es la decisión emanada de los árbitros que pone fin al litigio, resolviendo definitivamente el diferendo que las partes les habían

sometido, en el cual se aprecia que puede determinar la existencia de un derecho que merece un reconocimiento jurídico y social válido.

Es pues una pieza procesal que tiene el carácter de una verdadera sentencia, e impone a las partes una solución para las diferencias que los separaban, considerándose una auténtica resolución que los árbitros expiden como consecuencia de la autoridad o poder de juzgar que las partes les dieron.

Siendo así y a como resultado de la comparación, ha de entenderse que el laudo arbitral tiene idéntica eficacia jurídica que las sentencias judiciales, ejecutándose por los mismos medios y procedimientos; entonces corresponde entender que es el Estado mismo que pone a disposición de quien haya resultado beneficiado, su imperium y su estructura a los fines de ejercer coerción para lograr la satisfacción de los derechos que el laudo le atribuye.

La última indicación lleva a la idea de que la finalidad es satisfacer el ejercicio de un derecho, el mismo que ya es reconocido en el laudo arbitral, de lo que sigue en la indicación anterior se entiende que la estructura que se pone a disposición del interesado es la del Poder Judicial puesto que son los jueces quienes tienen esa potestad de la executio, lo cual significa que la satisfacción del derecho ha de tener que esperar la consagración del mismo luego de un recorrido judicial que le permita disfrutar de lo otorgado.

Se advierte pues una incongruencia respecto a la presunción de que el arbitraje es una forma especial de resolver un conflicto a través del reconocimiento del derecho a quien realmente corresponde fuera del ámbito judicial; si es cierto que esta concepción otorga seguridad jurídica respecto a la ejecución, sin embargo ha de

apreciarse el aspecto negativo que ello constituye, como la demora dado que acceder a un proceso de ejecución en el Poder judicial exige el cumplimiento de ciertos requisitos y un trámite procesal que toma una porción de tiempo importante; por otro lado el riesgo, puesto que la exigencia que aplicará el Juez para el cumplimiento de la obligación por parte del vencido tomará un tiempo determinado en razón de la carga procesal, sistema y otros factores lo que pone en riesgo la posibilidad del cumplimiento del derecho otorgado.

Finalmente se puede decir que basado en los aspectos descritos, se aprecia la existencia de la necesidad de realizar un cambio en la configuración jurídica que procura la ejecución de los laudos, a fin de que se puede realizar en sede arbitral, lo que está revestido de importancia dada la posibilidad de un ejercicio pleno y directo de la potestad arbitral que decide y la garantía del vencedor para el cumplimiento de la obligación.

## **5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES**

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo:

### **5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La incorporación de la executio en el proceso de arbitraje.**

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema. Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es verificar si jurídicamente resulta válida la sugerencia de incorporar la executio como potestad del arbitro para permitir la ejecución de las decisiones que incorporan los laudos, en la misma sede arbitral; sobre lo cual se ha descrito la equiparación de la estructura procesal del proceso judicial y del arbitral, los cuales tienen semejanza, resultado que ambos tienen sujeción al reconocimiento y el cumplimiento de los parámetros exigidos constitucionalmente.

Aspectos que otorgan la posibilidad de que la incorporación de la executio en el ámbito arbitral mantenga el ejercicio del control constitucional y sea soportado por la estructura procesal que tiene el proceso arbitral en igual condición que en el judicial.

Siendo así, la potestad sugerida no atentaría jurídica ni estructuralmente ninguno de los dos procesos, evitando la dilación temporal de la ejecución puesto que sería propiciada de manera directa por el mismo árbitro en el ejercicio de sus funciones por hacer cumplir la obligación que resulto de la decisión que asumieron las partes como obligatoria desde el inicio del arbitraje; por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

**La incorporación de la executio en el proceso de arbitraje no constituye alteración de la estructura del sistema de justicia.**

#### 5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La eficacia en la ejecución del laudo arbitral.

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que respalde la investigación realizada.

Se ha determinado en función a la observación de la realidad que la estructura de ejecución del laudo arbitral que corresponde ante el incumplimiento de la



obligación decidida por el árbitro, sugiere dos aspectos negativos como son la demora por la dilación del tiempo que supone acudir a otro proceso cuya característica esta sujeta a la excesiva carga procesal, y en otro aspecto el riesgo que constituye la característica anterior de dilación puesto que en determinadas circunstancias puede eliminar la posibilidad de ejecutar la obligación; todo ello hace ver a esta porción del proceso arbitral como ineficaz; por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

**La ejecución del laudo arbitral es ineficaz por la demora y el riesgo que se advierte del proceso judicial.**

### 5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla:

Hipótesis conclusiva:

**La incorporación de la executio en el proceso de arbitraje no constituye alteración de la estructura del sistema de justicia; con la cual se evitará que la ejecución del laudo arbitral sea ineficaz por la demora y el riesgo que se advierte del proceso judicial.**

#### CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS

##### HIPOTESIS INICIAL

Si, se incorpora la executio como potestad en el proceso de arbitraje; entonces, se logrará la eficacia en la ejecución del laudo arbitral de manera que el árbitro podrá hacer cumplir sus decisiones

##### HIPOTESIS CONCLUSIVA

La incorporación de la executio en el proceso de arbitraje no constituye alteración de la estructura del sistema de justicia; con la cual se evitará que la ejecución del laudo arbitral sea ineficaz por la demora y el riesgo que se advierte del proceso judicial.

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento

inicial, dando por sentado que ante la viabilidad de incorporar la executio como potestad del árbitro, surge la posibilidad de incorporar eficacia al cumplimiento de la obligación que ordena el laudo arbitral a través de la aplicación de coerción en la ejecución en sede arbitral.

## **CONCLUSIONES**

### **PRIMERA**

Del desarrollo doctrinario sobre la executio como potestad de imperio procesal, se determina que es un poder que permite al Juez, mediante actos coactivos, hacer cumplir el mandato cierto, contenido en un título ejecutivo cuando no se dé el cumplimiento voluntario por parte del obligado por la prestación insatisfecha; haciendo ejercicio de actos coactivos para el cumplimiento o ejecución del mandato en tanto no se haga por falta de voluntad de quien este obligado a cumplir.

### **SEGUNDA**

Se concluye además, que el imperio como parte del ejercicio del poder se controla a través de la executio, en ese sentido el alcance de dicha característica procesal estará en función a los límites de la obligación misma; por lo cual la extensión propuesta a la esfera del arbitraje resulta viable, puesto que tal cual se evidencia en el desarrollo de la potestad por parte de los jueces, también los árbitros tendrán límites de acción que estarán marcados por la obligación misma que se exige en ejecución.

### **TERCERA**

Como resultado de estudiar la estructura del proceso de arbitraje en el Perú se denota su finalidad de impartir justicia, con la peculiar característica de que el alcance de esta se direcciona en razón de la manifestación de voluntad de someterse a este tipo de jurisdicción especial; sin duda alguna el hecho de que la estructura

este controlada por la misma estructura procesal diseñada en el sistema y más aún por la Constitución Política misma, ha de entenderse con ello que la finalidad es otorgar un derecho a quien corresponda y en tanto esto se refleje en el laudo que jurídicamente es válida en razón del respeto de los principios procesales y constitucionales, la ejecución de la obligación señalada, en tanto significa un derecho demostrado y válido, bien puede ser pasible de ejecución a cargo de quien brindó la decisión; vale decir que el árbitro ejecute la obligación ante su incumplimiento.

#### **CUARTA**

La propuesta de la potestad ejecutiva arbitral para el árbitro ante la obligación exigida en el laudo, no sobre pasa ningún límite de legalidad o abuso de derecho, en tanto no constituye ningún perjuicio, sino más bien el reconocimiento de un derecho; en ese sentido sólo debería atenderse en vía judicial en tanto la ejecución realizada en vía arbitral constituya vulneración de un derecho y ésta tenga que demostrarse mediante una evaluación judicial en base a la contrastación con otros derechos, esto último si justificaría el pase al ámbito del Poder Judicial puesto que ya constituiría un conflicto de intereses nuevo, lejos de la idea de un conflicto que ya ha sido resuelto y sólo hace falta ejecutar coercitivamente.

#### **QUINTA**

Se ha llegado a la conclusión de que la estructura de ejecución del laudo arbitral que corresponde ante el incumplimiento de la obligación decidida por el árbitro, sugiere dos aspectos negativos como son la demora por la dilación del tiempo que

supone acudir a otro proceso cuya característica esta sujeta a la excesiva carga procesal, y en otro aspecto el riesgo que constituye la característica anterior de dilación puesto que en determinadas circunstancias puede eliminar la posibilidad de ejecutar la obligación; todo ello hace ver a esta porción del proceso arbitral como ineficaz

## **RECOMENDACIONES**

### **PRIMERA**

Habiéndose demostrado mediante la investigación que resulta viable la propuesta de otorgar la potestad ejecutiva arbitral para que el árbitro ante la obligación exigida en el laudo pueda hacer uso de la executio para exigir en forma directa su ejecución; se recomienda la variación de la regla que contempla el DECRETO LEGISLATIVO N° 1071 en lo que corresponde al inciso 3 del artículo 8, que indica lo siguiente:

#### **ESTRUCTURA ACTUAL:**

Artículo 8.- Competencia en la colaboración y control judicial.

3. Para la ejecución forzosa del laudo será competente el juez subespecializado en lo comercial o, en su defecto, el juez civil del lugar del arbitraje o el del lugar donde el laudo debe producir su eficacia.

#### **MODIFICACIÓN:**

Artículo 8.- Competencia en la colaboración y control judicial.

3. Para la ejecución forzosa del laudo que presente controversia respecto a la obligación exigida será competente el juez subespecializado en lo comercial o, en su defecto, el juez civil del lugar del arbitraje o el del lugar donde el laudo debe producir su eficacia.

## **SEGUNDA:**

A fin de complementar la propuesta anterior, se recomienda también la modificación de la misma regla respecto a lo siguiente:

### **ESTRUCTURA ACTUAL:**

Artículo 67.- Ejecución arbitral.

1. A solicitud de parte, el tribunal arbitral está facultado para ejecutar sus laudos y decisiones, siempre que medie acuerdo de las partes o se encuentre previsto en el reglamento arbitral aplicable.

2. Se exceptúa de lo dispuesto en el numeral anterior, el caso en el cual, a su sola discreción, el tribunal arbitral considere necesario o conveniente requerir la asistencia de la fuerza pública. En este caso, cesará en sus funciones sin incurrir en responsabilidad y entregará a la parte interesada, a costo de ésta, copia de los actuados correspondientes para que recurra a la autoridad judicial competente a efectos de la ejecución.

### **MODIFICACIÓN:**

Artículo 67.- Ejecución arbitral.

1. A solicitud de parte, el árbitro y el Tribunal Arbitral están facultados para ejecutar sus laudos y decisiones, siempre que medie acuerdo de las partes o se encuentre previsto en el reglamento arbitral aplicable.



2. Se exceptúa de lo dispuesto en el numeral anterior, el caso en el cual, a su sola discreción, el árbitro o el Tribunal Arbitral, identifique la existencia de controversia fuera del derecho contemplado en el laudo considere necesario o conveniente requerir la asistencia de la fuerza pública. En este caso, cesará en sus funciones sin incurrir en responsabilidad y entregará a la parte interesada, a costo de ésta, copia de los actuados correspondientes para que recurra a la autoridad judicial competente a efectos de la ejecución.

## BIBLIOGRAFÍA

- Agudelo Ramírez, M. (Enero - Junio de 2007). La Jurisdicción. *Revista Internauta de Práctica Jurídica*.
- Alcalá - Zamora, N. (190). *Proceso, Autocomposición y Autodefensa* (Segunda ed.). México: UNAM.
- Amaral Santos, M. (1999). *Primeiras Linhas de Directo Processual* (Segunda ed., Vol. I). Editorial Saraiva.
- Aramburú Menchaca, A. (1990). *Notas al Margen de la Constitución*. Lima, Perú: Concytec.
- Aylwin, P. (1958). *El Juicio Arbitral*. Chile: Ediciones Jurídicas de Chile.
- Bullard González, A. (Julio - Diciembre de 2013). ¿Qué fue primero: el huevo o la gallina? El carácter contractual del recurso de anulación. *Revista Internacional de Arbitraje*(19), Bogotá.
- Bullard, A., & Soto, C. (2011). *Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje* (Vol. I). Lima, Perú: IPA.
- Caivano Roque, J. (2000). *Arbitraje* (Segunda ed.). Buenos Aires, Argentina: AD HOC.
- Cantuarias Salaverry, F. (1997). *El Arbitraje en el Perú: Desarrollo Actual y Perspectivas Futuras*. Lima, Perú.
- Carnacini, T. (1961). *Arbitraje*. (S. Sentis Melendo, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas Europa - América (EJEA).
- Carnelutti, F. (1994). *Cómo se hace un Proceso*. (S. Sentis Melendo, & M. Ayerra Redín, Trads.) Bogotá, Colombia: Temis.
- Castillo Freyre, M. (2012). *Arbitraje y Constitución*. Lima, Perú: Palestra Editores.
- Castillo Freyre, M. (2014). *Arbitraje: Comentarios a la Ley de Arbitraje. Segunda Parte*. Lima: Thomson Reuters.
- Chiovenda, G. (1997). *Principios de Derecho Procesal Civil* (Vol. I). (J. Casais, & S. Reus, Trads.) Madrid, España.
- Cremades, B. (2005). Regulación Nacional del Arbitraje y la Convención de Nueva York. *Revista Peruana de Arbitraje*, 2.
- Del Águila Ruiz de Somocurco, P. (2005). Arbitraje Institucional o Arbitraje Ad-Hoc ¿He ahí el dilema? *Revista Peruana de Arbitraje*(2).
- Diez - Picazo, I. (2000). *Derecho Procesal Civil*. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces: Madrid.
- Echandía, D. (2002). *Teoría General del Proceso* (Tercera ed.). Bogotá, Colombia: Editorial Universidad.
- Feldestein de Cárdenas, S. (1998). *El Arbitraje*. Argentina: Editorial Abeledo - Perrot.
- Fernández, C. (Noviembre / Diciembre de 2004). A Business Mans. *Revista Jurídica del Perú*(59).

- Gaspar Lera, S. (1988). *El Ámbito de Aplicación del Arbitraje*. España: Editorial Aranzadi.
- Gómez Colomer, J. (1995). *Derecho Jurisdiccional* (Vol. II). Barcelona, España: Editorial Bosch.
- González de Cossío, F. (2011). *Arbitraje*. México: Porrúa.
- Gorjón Freire, F. (2001). Arbitraje Comercial, Paradigma del Derecho. *Derecho Notarial de Mexicana*(116).
- Grigera Naón, H. (2006). Arbitraje Comercial Internacional, Quo Vadis? En *Estudios de Arbitraje. Libro homenaje al Profesor Patricio Aylwin Azócar* (págs. 585-593). Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.
- Guasp, J. (1956). *El Arbitraje en el Derecho Español*. Barcelona, España: Bosch.
- Guzmán Brito, A. (2001). El Tradicionalismo del Código Civil Peruano 1852. *Revista de Estudios Histórico Jurídicos*(23).
- Guzmán Ferrer, F. (1961). *Código de Procedimientos Civiles: Exposición de Motivos - Antecedentes - Concordancias - Proyecto de Reforma - Legislación Comparada - Jurisprudencia*. Lima: S. E.
- Jean, R. (1967). *Arbitrage Civil et Commercial en Droit Interne et International Prive* (Cuarta ed.). París, Francia.
- Landa, C. (2007). El Arbitraje en la Constitución de 1993 y en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. *Revista de Derecho*(53).
- Ledesma Narváez, M. (2007). *Jurisdicción y Arbitraje*. Lima: PUCP.
- Ledesma Narváez, M. (Agosto de 2014). ¿El laudo pone fin al procedimiento arbitral? *Estudios críticos de derecho procesal civil y arbitraje, Tomo II*, 395.
- Lohmann Luca de Tena, J. (1988). *El Arbitraje. Para Leer el Código Civil* (Vol. V). Lima, Perú: PUCP.
- Mallandrich Miret, N. (2010). *Medidas Cautelares y Arbitraje*. Barcelona: Editorial Atelier.
- Mantilla Serrano, F. (2007). La autonomía del derecho del arbitraje internacional:. *Legis*.
- Merchan Álvarez, A. (1981). El Arbitraje: Estudio Histórico Jurídico. *Anales de la Universidad Hispalense*.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2014). *EL Manual de Arbitraje del Ministerio de Jusiticia*. Lima, Perú: Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos.
- Pallares, E. (1983). *Derecho Procesal Civil*. México: Editorial Porrúa.
- Quiroga León, A. (1989). Las Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia. *Constitución y Sociedad*, 289 - 335.
- Quiroga León, A. (2000). Conciliación y Arbitraje en el Perú: Presente y Futuro. *Revista de la Facultad de Derecho - PUCP*(53), 769 - 798.
- Rocco, U. (1969). *Tratado de Derecho Procesal Civil* (Vol. I). (S. Sentís Melendo, & M. Ayerra Redin, Trans.) Buenos Aires, Santa fe de Bogotá, Argentina: Temis / Depalma.
- Shonke, A. (1950). *Derecho Procesal Civil*. Barcelona, España: Editorial Bosch.

- Soto Coaguila, C. (2009). El Proceso de Reforma del Código Civil Peruano de 1984. La Necesidad de su Actualización para el Siglo XXI. *Revista de Derecho*(60).
- Trazegnies Granda, F. (1989). *El Arbitraje en el Derecho Latinoamericano y Español*. Lima: Editorial Cultural Cuzco.
- Vidal Ramírez, F. (2003). *Manual de Derecho Arbitral*. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- Wach, A. (1977). *Manual de Derecho Procesal Civil* (Vol. I). (T. Banzhaf, Trad.) Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas Europa - América.

## **ANEXO 1: Cuestionario de Encuesta**

**UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”**

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**

**ESCUELA DE DERECHO**



**TESIS:**

**“LA INCORPORACIÓN DE LA EXECUTIO EN EL PROCESO DE  
ARBITRAJE PARA GENERAR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL  
LAUDO ARBITRAL”**

### **CUESTIONARIO DE ENCUESTA**

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

#### **I. La incorporación de la executio en el proceso de arbitraje.**

1. La Executio es un poder que permite al Juez, mediante actos coactivos, hacer cumplir el mandato cierto contenido en un título ejecutivo cuando no se dé el cumplimiento voluntario por parte del obligado por la prestación insatisfecha.
  - a) Acuerdo
  - b) Desacuerdo

- c) No opina
- 2. El árbitro no tiene jurisdicción, ni imperium. Su misión no es decir el derecho ni ejercer la coercitio procesal; ni tiene su sentencia efecto coactivo en el sentido de ejecutabilidad. Es un juez arbitrado y como tal deriva su función de la voluntad de las partes.
  - a) Acuerdo
  - b) Desacuerdo
  - c) No opina
- 3. La posibilidad de que el laudo sea ejecutable mediante poder público deviene al momento de su ejecución, pero ello no modifica la naturaleza de la institución, sino que la enriquece al convertirla en una institución híbrida.
  - a) Acuerdo
  - b) Desacuerdo
  - c) No opina

## **II. La eficacia en la ejecución del laudo arbitral.**

- 4. El laudo arbitral tiene idéntica eficacia jurídica que las sentencias judiciales, ejecutándose por los mismos medios y procedimientos.
  - a) Acuerdo
  - b) Desacuerdo
  - c) No opina
- 5. El laudo arbitral tiene carácter definitivo e inapelable, salvo acuerdo de las partes; tiene carácter de cosa juzgada; es la decisión final que dan los árbitros y contra esto solo procederá el recurso de anulación y al ser desestimado este recurso se podrá ir a un proceso constitucional que es el proceso de amparo, en el caso que se esté vulnerando el derecho a la tutela procesal efectiva.
  - a) Acuerdo

- b) Desacuerdo
  - c) No opina.
6. El laudo arbitral tiene idéntica eficacia jurídica que las sentencias judiciales, ejecutándose por los mismos medios y procedimientos. El Estado pone a disposición de quien haya resultado beneficiado, su imperium y su estructura a los fines de ejercer coerción para lograr la satisfacción de los derechos que el laudo le atribuye, las mismas que deberían ejercerse en forma directa por parte del mismo árbitro.
- a) Acuerdo
  - b) Desacuerdo
  - c) No opina.

**01105-2015-8-1706-JR-CI-07**

EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES MEDIDA CAUTELAR

**[1] ADMITIR A TRÁMITE**, la solicitud de medida cautelar dentro de proceso interpuesta por CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TRUJILLO S.A.C. contra CONSORCIO CHICLAYO [integrado por Pérez & Castro S.R.L., y Montealto Infraestructuras SL]. **[2]** En consecuencia: **TRABESE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN** hasta por la suma total de **CIENTO CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES** [S/150,000.00], la misma que recaerá sobre la cuenta corriente N° 475-2071942-0-84, cuyo titular sea Consorcio Chiclayo [integrado por Pérez & Castro S.R.L., y Montealto Infraestructuras S.L.], en la entidad Banco de Crédito del Perú. **[3]** Ordenar que la entidad financiera arriba descrita, **CONSIGNE** la suma retenida, en certificado de depósito judicial a nombre del Octavo Juzgado Especializado Civil Sub Especialidad Comercial de esta ciudad. **[4]** Tener como **RETENEDOR** del monto dinerario que existiera al Gerente, Administrador o Jefe de Operaciones de la misma, a fin que cumpla con la retención ordenada. Asimismo se previene al retenedor que en caso pague directamente a los afectados desobedeciendo lo dispuesto, quedará obligado a efectuar nuevo pago a la orden de este Juzgado, sin perjuicio de incurrir en las demás responsabilidades a que haya lugar. **[5] AUTORÍCESE** al especialista legal para la ejecución de la afectación conforme lo establece el artículo 658° del Código Procesal Civil. Notifíquese.-

**01450-2015-0-1706-JR-CI-01**

EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES

**DEMANDANTE : ASESORÍA NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.C**

**DEMANDADO : COYERSA DEL PERÚ SAC**

**SE RESUELVE: DECLARAR LA INHIBICIÓN** de éste Órgano Jurisdiccional **por competencia de razón de la materia** para conocer la presente demanda; en consecuencia, **REMITASE** la presente causa al **OCTAVO JUZGADO CIVIL COMERCIAL**, para que proceda conforme a sus atribuciones; con conocimiento de las partes; **OFICIESE** con tal fin. Notifíquese.**TR Y HS.-**

**SE RESUELVE: [1]** Declarar **INADMISIBLE** la demanda interpuesta por ASESORÍA, NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.C. contra COYSERCA DEL PERÚ S.A.C. sobre ejecución de laudo arbitral. **[2]** Conceder plazo de **TRES DIAS** al demandante a fin que subsane los defectos advertidos; bajo apercibimiento de rechazarse la demanda y archivar el proceso. Interviene el magistrado que suscribe por disposición superior. Notifíquese.



**02878-2012-0-1706-JR-CI-03**

**Órgano Jurisdiccional:**

8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL

INTERPONE DEMANDA DE EJECUCION DE LAUDO ARBITRA

Demandante : CONVEXA S.A.C. – Contratistas Generales

Demandado : Essalud Red Asistencial Lambayeque

Materia : Ejecución de Laudo

**SE RESUELVE:** 1] **DECLARAR IMPROCEDENTE LA NULIDAD** deducida por la entidad ejecutada Essalud Red Asistencial Lambayeque contra la resolución número catorce de fecha veintiuno de enero del año en curso, obrante a fojas doscientos treinta; manteniéndose vigentes todos sus efectos; y, 2] **SE DECLARA DE OFICIO LA NULIDAD** de la resolución número doce de fecha diecisiete de junio del año dos mil catorce; y renovando el acto procesal afectado, estese a lo resuelto en la resolución número catorce.- NOTIFIQUESE.-

**2016**

**Expediente N°:**

**01109-2016-0-1706-JR-CI-01**

**Órgano Jurisdiccional:**

8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL

DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE ,  
PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE ,

DEMANDANTE : CONSORCIO CONSTRUCTOR OLMOS

EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES

SE RESUELVE: Hacer Efectivo el apercibimiento ordenado en la resolución número CATORCE de fecha 15 de noviembre del dos mil diecisiete, 1] IMPONGASE al demandado GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, una multa de DOS (02) UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL, la cual deberá ser cancelada en el término de DIEZ DIAS debiendo ser abonada al código 09148 del Banco de la Nación a favor del Poder Judicial, bajo apercibimiento de FORMARSE el cuaderno de Multas, y remitirlo al Juzgado executor; y estando a lo peticionado: 2] REITÉRESE EL REQUERIMIENTO al demandado GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, en la persona del Jefe de la Oficina Regional

de Administración, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS cumpla con DEVOLVER la CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 039-725-2013-CRACSL emitida por la Caja Señor de Luren, bajo apercibimiento de REMITIRSE COPIAS CERTIFICADAS de los actuados, al MINISTERIO PÚBLICO en caso de incumplimiento; 3]REITÉRESE EL REQUERIMIENTO al Gobierno Regional de Lambayeque, en la persona del Gobernador Regional Humberto Acuña Peralta, para que cumpla con PAGAR al CONSORCIO CONSTRUCTOR OLMOS la suma de S/ 174,773.05, suma ordenada pagar en el laudo arbitral de fecha 20-11-2015, y aclarado por resolución de fecha 20-1-2017, expedido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, bajo apercibimiento de REMITIRSE COPIAS CERTIFICADAS de los actuados, al MINISTERIO PÚBLICO en caso de incumplimiento;. Interviene la Especialista Legal que da cuenta por disposición superior. Notifíquesele con las formalidades de Ley.

## **2017**

**Exp. N° : 281-2017-61-1706-JR-CO-08**

**Demandante : Consorcio César Vallejo.**

**Demandado : Municipalidad Provincial de Chiclayo.**

**Materia : Medida Cautelar fuera del proceso.**

**Juez : Sandro Omar Aguilar Gaitán**

**Especialista Legal : Betty del Socorro Varías Céspedes.**

**RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCO**

Chiclayo, veinte de marzo del dos mil diecisiete.-

AUTOS Y VISTOS: DADO CUENTA con el escrito presentado por la entidad ejecutante. y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el artículo 407 del Código Procesal Civil faculta al Juzgador a corregir de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, cualquier error material evidente que contengan las resoluciones. SEGUNDO: Que, al emitirse la resolución número CUATRO por error involuntario se consignó devolución del cincuenta por ciento del arancel judicial "N° 8117210-5-B" siendo que los números correctos del arancel es 698187-1 y 13117210-5-B". Por lo que SE RESUELVE: CORREGIR LA RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO de fecha veinte de febrero del dos mil diecisiete, ENTENDIÉNDOSE que el arancel judicial por concepto de "Medida Cautelar, Anotac. Demandas, Embarg, Ejec Forzosa que se ha devuelto al demandante a efecto que la Oficina de Recaudación valide el mismo hasta por el 50% de su valor, tiene como fecha 30 de enero del 2017, con código N°08222 y N° 698187-1, y número de impresión 13117210-5-B. Interviene el Señor Juez que suscribe y la Especialista Legal que autoriza la resolución al haber reasumido funciones luego del periodo vacacional. NOTIFIQUESE.-

**8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL**

**EXPEDIENTE : 00310-2017-0-1706-JR-CI-06**

**MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES**

**JUEZ : SANDRO OMAR AGUILAR GAITAN**

**ESPECIALISTA : FABRIZIO CARBAJAL BRAVO**

**REPRESENTANTE : RODRIGUEZ MONTEZA, AMADO ELISEO PROCURADOR**

**DEMANDADO : JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO  
CHANCAY LAMBAYEQUE ,**

**DEMANDANTE : PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES ,**

### **RESOLUCIÓN NÚMERO: DOCE**

**Chiclayo veintinueve de enero**

**Del dos mil diecinueve**

Dado cuenta con el escrito de fecha diecinueve de noviembre del dos mil dieciocho; presentado por el Apoderado Judicial de la demandante de autos; y apreciándose que la para la demandada Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay Lambayeque no se encuentra válidamente notificada con el contenido de la demanda, anexos y Resolución Admisoria; **ELABORESE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN** a fin de cumplir con dicha notificación debiendo para ello la demandante de autos; Proyecto Especial Olmos Tinajones con adjuntar las copias de las piezas procesales pertinentes a fin de cumplir con dicha notificación; **AVOQUESE** al conocimiento del presente proceso el Señor Juez Titular que suscribe; Interviene el Especialista Legal que da cuenta por disposición superior; Notifíquese con las formalidades de Ley.-

**EXPEDIENTE : 0092-2017-0-1708-JM-CI-01**

**MATERIA : EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL**

**EJECUTANTE : CCH CONTRATISTAS GENERALES S.AC.**

**EJECUTADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE**

**JUEZ : RONAL ORLANDO SAAVEDRA GUZMAN**

**SECRETARIO : MAGALY HUAMAN CARO**

Resolución Nro.: CINCO

Lambayeque, diez de diciembre Del dos mil dieciocho.-

**AUTOS Y VISTOS;** dado cuenta con el estado del proceso; Y **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.-** Sobre el título de Ejecución.- La empresa demandante CCH CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., debidamente representado por el Gerente General Carlos Manuel Chankay Merino, mediante escrito de folios 134 a 141, subsanada mediante escrito de folios 164 a 167, interpone demanda de Ejecución de Laudo Arbitral, contra la Municipalidad Provincial de Lambayeque, solicitando

que se cumpla con: 1) Recepcionar la Obra Ejecutada, "Creación Campo Deportivo Caserío Carrizo, Distrito San José, Provincia de Lambayeque - Lambayeque", y se pague a la empresa la valorización 01 por la suma total de S/. 67,814.29 Soles" 2) Pagar Intereses Legales devengados de la Obra Ejecutada, desde el 01 de abril del 2016 hasta la fecha total de la Obligación" 3) Que la entidad pague el 75% de los honorarios de los Árbitros de los gastos administrativos del arbitraje, así como honorarios del abogado, ascendente a la suma de S/ 14,644.14 Soles"; mas el pago de intereses, costos y costas del proceso. Mediante resolución número dos se admite a trámite la demanda y se ordena que la demandada cumpla con lo dispuesto en el Convenio Arbitral, bajo apercibimiento de ejecución forzada. SEGUNDO.- Sobre la contradicción efectuada por el ejecutado y absolución de la misma.- La demandada Municipalidad Provincial de Lambayeque, debidamente representada por el Procurador Público mediante escrito de folios 120 a 127, formula contradicción por inexigibilidad de la obligación contenida en el mandato de pago, solicitando que se declare Infundada o Improcedente la demanda. Fundamenta la contradicción argumentando que: Respecto a la Recepción de Obra "Creación Campo Deportivo Caserío Carrizo, Distrito de San José, Provincia de Lambayeque", debe supeditarse acorde al procedimiento previsto en el Art. 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (decreto JUZGADO CIVIL PERMANENTE DE LAMBAYEQUE Supremo N° 184-2008-EF), debiendo designarse el Supervisor o Inspector de dicha obra, que debe ser un profesional que cumpla con los requisitos legales para tal cargo; en cuanto al Pago a la Empresa CCH Contratistas Generales S.A.C., el importe de S/. 67,814.29 por concepto de Valorización N° 01, del mismo modo este procedimiento de pago tendrá que supeditarse al procedimiento legal y ordinario establecido para el pago de toda valorización, donde el Supervisor y el Inspector de DIDUR deben pronunciarse conforme a sus facultades; cuestionando el pago de las valorizaciones y su procedimiento. Asimismo, mediante escrito de folios 132, adjunta documentales mediante la cual la Municipalidad Provincial de Lambayeque va a proceder a la Recepción de Obra. Noveno.- Análisis del caso en concreto.- El Artículo 688° inciso 2) del Código Procesal Civil establece que los laudos arbitrales constituyen títulos ejecutivos, procediendo su ejecución en la vía del proceso único de ejecución; siendo de aplicación supletoria lo dispuesto por el Art. 68° inciso 3) LGA señala "Ejecución judicial. 3. La parte ejecutada sólo podrá oponerse si acredita con documentos el cumplimiento de la obligación requerida o la suspensión de la ejecución...". Ahora bien, teniendo en cuenta la normatividad aplicable al caso concreto, tenemos que tanto demandante como demandado se sometieron al Fuero Arbitral, resolviéndose mediante el Laudo Arbitral de Derecho, Caso N° 08-2016-CCA/CCPL, el mismo que obra en autos de folios 168 a 201; luego de folios 134 a 141, la empresa demandante con fecha 23 de marzo del 2017, solita la Ejecución del laudo Arbitral de fecha 12 de enero del 2017, que ordeno que la demandada cumpla con: 1) Recepcionar la Obra Ejecutada, "Creación Campo Deportivo Caserío Carrizo, Distrito San José, Provincia de Lambayeque - Lambayeque", y se pague a la empresa la valorización 01 por la suma total de S/. 67,814.29 Soles" 2) Pagar Intereses Legales devengados de la Obra Ejecutada, desde el 01 de abril del 2016 hasta la fecha total de la Obligación" 3) Que la entidad pague el 75% de los

honorarios de los Árbitros de los gastos administrativos del arbitraje, así como honorarios del abogado, ascendente a la suma de S/ 14,644.14 Soles", mas el pago de intereses, costos y costas del proceso. Siendo que la demandada, luego de formular contradicción, pone en conocimiento haber dado cumplimiento al mandato judicial, adjuntando documentales de folios 229 a 231, con las que demostraría que va a proceder a la 1 El arbitraje no es más que la manifestación de dos convenios: por un lado el convenio en virtud del cual las partes se comprometen a recurrir a un tercero o árbitro en caso de suscitarse algún conflicto y en ese caso la resolución del laudo arbitral deviene en obligatoria para las partes al haber sido aceptada previamente por ellas (un contrato o un compromiso de ambas partes). Por otro lado está la obligación del tercero (laudo arbitral) de resolver el conflicto con arreglo a derecho o equidad. JUZGADO CIVIL PERMANENTE DE LAMBAYEQUE "Recepción de Obra"; por su parte el demandante, presenta el "Acta de Recepción de Obra" de fecha 09 de junio del año 2017. Acreditándose con ello que la entidad demandada reconoce la obligación que mantiene a favor de la empresa demandante, habiéndose demostrado tan solo un cumplimiento parcial de la obligación, asimismo se observa que al no haberse impugnado el laudo arbitral de derecho, queda claro que nos encontramos ante un Laudo Arbitral Firme<sup>2</sup> ; constituyendo de por sí un Título ejecutivo Extrajudicial; es por estos motivos que se debe ordenar a la ejecutada Municipalidad Provincial de Lambayeque cumpla con: 1) Pagar Intereses Legales devengados de la Obra Ejecutada, desde el 01 de abril del 2016 hasta la fecha total de la Obligación" y 2) Que la entidad pague el 75% de los honorarios de los Árbitros de los gastos administrativos del arbitraje, así como honorarios del abogado, ascendente a la suma de S/ 14,644.14 Soles", mas el pago de intereses, costos y costas del proceso. Finalmente, si bien la ejecutada Municipalidad Provincial de Lambayeque formula contradicción, se aprecia claramente que los hechos expuestos por ésta no constituyen causal prevista en el Art. 690°-D del CPC o en el Art. 86° inc. 3) de la LGA, puesto que lo alegado por el ejecutado no afecta en lo absoluto el presente proceso, no habiendo interpuesto medios impugnatorios valederos que acrediten el pago del monto adeudado, por encontrarse firme el laudo arbitral de derecho por el cual ahora se solicita su ejecución; por ende, la contradicción formulada deberá ser desestimada. Por estas consideraciones, Se resuelve: Declarar IMPROCEDENTE la CONTRADICCIÓN formulada por el ejecutado Municipalidad Provincial de Lambayeque. FUNDADO EN PARTE la EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL, interpuesto por la Empresa CCH Contratistas Generales S.A.C., contra la Municipalidad Provincial de Lambayeque, LLÉVESE a cabo la ejecución forzada sobre los bienes que sean de su propiedad que tengan que afectarse con medida cautelar hasta que la parte ejecutante satisfaga su acreencia hasta por la suma ascendente a OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 43/100 SOLES (S/. 82,458.43), mas intereses legales, costos y costas del proceso. Consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución: ARCHÍVESE en el modo y forma de ley. Notificar con las formalidades de ley.-

**8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL**

**EXPEDIENTE : 00255-2017-0-1706-JR-CO-08**

**MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES**

**JUEZ : SANDRO OMAR AGUILAR GAITAN**

**ESPECIALISTA : FABRIZIO CARBAJAL BRAVO**

**DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO**

**DEMANDANTE : PASSALACQUA VICTORIA, LUZ MARINA**

**RESOLUCIÓN NÚMERO: ONCE**

**Chiclayo dieciséis de enero del dos mil diecinueve**

Dado cuenta con el escrito de fecha diez de octubre del dos mil dieciocho; presentado por la demandante de autos conforme a lo solicitado; PREVIAMENTE cumpla la solicitante con adecuar su pedido en armonía con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional ( Exp. 2147-2009-PA/TC) respecto a la embargabilidad de los bienes del Estado; dentro del plazo de CINCO DÍAS ; bajo apercibimiento de tener por no interpuesto su escrito que se da cuenta; AVOQUESE al conocimiento del presente proceso el Señor Juez Titular que suscribe; Interviene el Especialista Legal que da cuenta por disposición superior; Notifíquese con las formalidades de Ley.-

**EXP. N° : 780-2017-0-1706-JR-CO-08**

**DEMANDANTE : A.W. FABER CASTELL PERUANA S.A.**

**DEMANDADO : ROGELIO MONTALVO GUEVARA.**

**MATERIA : EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL.**

**JUEZ : SANDRO OMAR AGUILAR GAITÁN.**

**ESPECIALISTA LEGAL: BETTY DEL SOCORRO VARÍAS CÉSPEDES.**

RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES Chiclayo, primero de junio de dos mil diecisiete.- AUTOS Y VISTOS: DADO CUENTA con el expediente del rubro y escrito que antecede, y; CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante resolución número DOS de fecha tres de mayo del dos mil diecisiete, se requirió a la parte demandante para que subsane los defectos advertidos en su escrito de demanda, concediéndole un plazo de TRES DÍAS, bajo apercibimiento de rechazarse la demanda y archivarse el proceso; SEGUNDO: Que, los apercibimientos son instrumentos procesales que permiten viabilizar el curso del proceso, evitando dilaciones innecesarias, a efectos que los mandatos judiciales se cumplan oportunamente; asimismo, éstos son aplicados racionalmente por el Juez, en ejercicio de su deber como Director del proceso, contenido en el artículo 50, inciso 1 del Código Procesal Civil, que establece: “Son deberes del Juez: 1) Dirigir el Proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal, 2)...”; TERCERO: Que, la demandante, pretende mediante escrito de fecha diecinueve de mayo del año en curso, subsanar las omisiones que se indicaron en la resolución número DOS, la cual le ha sido notificada el día once de mayo del dos mil diecisiete conforme al

cargo que antecede, por lo que siendo así, la subsanación deviene en extemporánea, pues se efectúa en forma posterior a los TRES DIAS que se le concedió para tal fin, razón por la cual en virtud a las articulaciones legales invocadas en el considerando precedente debe efectivizarse el apercibimiento decretado; Por las consideraciones expuestas, se RESUELVE: 1] TÉNGASE por presentadas las subsanaciones en forma EXTEMPORÁNEA; 2] HÁGASE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO decretado en la resolución número DOS consecuentemente RECHÁCESE LA DEMANDA interpuesta por A.W. FABER CASTELL PERUANA S.A. contra ROGELIO MONTALVO GUEVARA y otra sobre Ejecución de Laudo Arbitral; 3] ENTRÉGUESE los anexos al demandante, bajo la respectiva constancia en autos; y una vez cumplido, REMÍTASE al Archivo Central par su depósito respectivo. NOTIFIQUESE.-

**EXPEDIENTE : 00368-2017-0-1706-JR-CO-08**

**DEMANDANTE : PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES - PEOT**

**DEMANDADO : JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHANCAY LAMBAYEQUE**

**MATERIA : EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL**

**JUEZ : SANDRO OMAR AGUILAR GAITÁN**

**ESPECIALISTA : CAROLINA PORTOCARRERO ESTELA**

AUTO DE IMPROCEDENCIA Chiclayo, tres de mayo del dos mil diecisiete. Resolución número: Uno. Autos y Vistos, el escrito de demanda de fecha seis de abril del dos mil diecisiete; anexos y arancel por ofrecimiento de pruebas; y con vista del expediente N° 00310-2017-0- 1706-JR-CI-06; y Considerando; Primero: La entidad ejecutante presentó demanda de ejecución de laudo arbitral con fecha siete de febrero del dos mil diecisiete, signada con el número N° 00310-2017-0-1706-JR-CI-06, la misma que fue asignada al Sexto Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, y remitida a este órgano jurisdiccional para su respectiva calificación al haberse inhibido mediante resolución número uno de fecha ocho de marzo del dos mil diecisiete. Segundo: Conforme puede verificarse del expediente en mención y del Sistema Integrado de Justicia, dicha demanda fue declarada improcedente al no reunir los requisitos previstos en el artículo 689° del Código Procesal Civil. Tercero: La presente demanda tiene petitorio exactamente idéntico al del expediente N° 00310-2017, consistente en: [1] elaborar las rendiciones técnicas y económicas mensuales del Convenio que correspondan a los períodos de enero del año dos mil diez a diciembre del dos mil catorce; [2] elaborar las liquidaciones técnicas y económicas anuales del Convenio, correspondientes a las liquidaciones de los períodos 2012, 2013 y 2014 respectivamente; y [3] formalizar y culminar la transferencia oficial de cada uno de los bienes del Convenio, los cuales comprenden los entregados a la suscripción del mismo y los adquiridos en su plena vigencia, entendiéndose además por transferencia formal al cambio o variación de los título de propiedad de los bienes, como son las tarjetas de propiedad de vehículos,

maquinarias y equipos, donde aparece de la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque como titular, por ser dichos bienes adquiridos con recursos destinados al Sistema Hidráulico Mayor Tinajones (anteriormente denominado FOPEMA), debiendo realizar dicho trámite hasta la inscripción definitiva ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a favor del demandante PEOT, como nuevo operador hidráulico. Cuarto: Por lo que, al ser una demanda duplicada [al tener el mismo petitorio] y al haberse declarado improcedente la demanda en el Expediente N° 00310-2017, es que corresponde declarar la improcedente de esta demanda al contener un petitorio jurídicamente imposible. Por las consideraciones anotadas y de conformidad con el inciso 5 del artículo 427° del Código Procesal Civil; SE RESUELVE: [1] Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por PROYECTO ESPECIAL OMOS TINAJES contra JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHANCAY LAMBAYEQUE sobre ejecución de laudo arbitral. [2] Consentida o ejecutoriada que sea la presente devuélvanse los anexos y archívese el proceso. Notifíquese.-

**JUZGADO CIVIL - LAMBAYEQUE EXPEDIENTE : 00092-2017-55-1708-JM-CI-01**

**MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES**

**JUEZ : SAAVEDRA GUZMAN RONAL ORLANDO**

**ESPECIALISTA : MAGALY HUAMAN CARO**

**DEMANDANTE : CCH CONTRATISTAS GENERALES SAC ,**

**RESOLUCION NUMERO SIETE (7)**

Lambayeque cuatro de junio del dos mil dieciocho.-

Dado cuenta con el oficio remitido por la Segunda Sala Civil: Por recibido la presente medida cautelar ;y, en cumplimiento a lo ejecutoriado **ARCHIVESE LA PRESENTE MEDIDA CAUTELAR**, en el modo y forma de Ley. Notifíquese conforme corresponde.-

**8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL**

**EXPEDIENTE : 00928-2017-0-1706-JR-CI-07**

**MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES**

**JUEZ : SANDRO OMAR AGUILAR GAITAN**

**ESPECIALISTA : YESSSENIA GORDILLO CARBONEL**

**DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROVIDENCIA ,**

**DEMANDANTE : CONSORCIO PROVIDENCIA SIMON CORREA VASQUEZ**

Chiclayo, 16 de enero del 2019

Resolución Número: OCHO.-

Con los escritos presentados por la demandada; estando a lo peticionado: **CONCÉDASE** el plazo de UN DIA, a la entidad demandada en la persona de su



representante legal a fin de que cumpla con suscribir el escrito de apelación de fecha 16.11.2018; bajo apercibimiento de rechazarse el escrito de apelación. Al escrito presentado por la demandante: AL principal: ESTÉSE a lo dispuesto en la presente resolución. Al otrosí: Por delegada las facultades de representación a favor del abogado que autoriza su escrito. Al oficio N° 058-2018- AMP.JPLL-CSJAM/PJ-JJZ remitido por el Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Luya, y constancia de notificación que se adjunta: Por cumplido el mandato, Agréguese a los autos. Reasume funciones el señor Juez titular que suscribe por disposición superior. Notifíquese.-

#### **8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL**

**EXPEDIENTE : 01187-2017-0-1706-JR-CI-07**

**MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES**

**JUEZ : AGUINAGA HOLGUIN JUAN FRANCISCO**

**ESPECIALISTA : FABRIZIO CARBAJAL BRAVO**

**DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO**

**DEMANDANTE : CASUSOL IBERICO, GERMAN FERNANDO**

#### **RESOLUCIÓN NÚMERO: OCHO**

Chiclayo veintisiete de noviembre Del dos mil dieciocho

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con el Escrito que antecede presentado por don Nel Edinson Aguilar Chaquila en calidad de Abogado patrocinador del ejecutante de autos Germán Fernando Casusol Ibérico y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, las partes no han interpuesto recurso impugnativo de apelación contra el Auto Final contenida en la Resolución Número siete de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho y que a pesar de encontrarse válidamente notificado conforme se aprecia del cargo de cédula de notificación que corre a folios ochenta y siete, por lo que proveyendo el escrito que se da cuenta y de conformidad con el artículo 123 del Código Procesal Civil, SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDO el Auto Final contenido en la Resolución Número seis de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, consecuentemente REQUIÉRASE a la ejecutada de autos Municipalidad Provincial de Chiclayo a fin de que en el plazo de cinco días cumplan con pagar la suma ordenada en el auto final consistente en la suma de DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 12/100 SOLES ( S/. 203, 137.12) más intereses del proceso, costas y costos procesales, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada, en mérito a la disposiciones establecidas en la Resolución Administrativa N° 1021-2018-PCSJLA/PJ, la misma que indica que el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE); NOTIFIQUESELE A LAS PARTES PROCESALES a fin de que en plazo de CINCO DÍAS CUMPLAN con señalar sus CASILLAS JUDICIALES POSTALES; AVOQUESE al conocimiento del presente proceso el Señor Juez que suscribe; Interviene el Especialista Legal que da cuenta por disposición superior; Notifíquese con las formalidades de Ley.-

**2° SALA CIVIL**

**EXPEDIENTE : 00644-2017-0-1706-JR-CO-08**

**MATERIA : EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES**

**RELATOR : GRACIELA CUIQUITA CONTRERAS**

**DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO**

**DEMANDANTE : COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES AMERICA EIRL**

Resolución Nro. Doce

Chiclayo, treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho

Dado cuenta con el escrito de casación presentado por el Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Chiclayo que antecede, estando a lo dispuesto en los artículos 387.2 y 391 del Código Procesal Civil: REMÍTANSE los autos a la Sala de la Corte Suprema de Justicia de la República que corresponda en el modo y forma de ley y con la debida nota de atención. Notifíquese.

Sres.

Rodríguez Tanta

Salazar Fernández

**Octavo Juzgado Civil Sub Especialidad Comercial de Chiclayo**

**Exp. : 01394-2017-0-1706-JR-CI-05**

**Demandante : Consorcio Bioconstrucciones**

**Demandado : Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca**

**Materia : Ejecución de laudo arbitral**

**Juez : Sandro Omar Aguilar Gaitán**

**Especialista : Manuel Romero Balcázar**

**AUTO DE INHIBICIÓN**

**Chiclayo, quince de setiembre del dos mil diecisiete.**

**Resolución número: Tres.**

Autos y Vistos, el escrito de fecha doce de setiembre del dos mil diecisiete, anexos y arancel por ofrecimiento de pruebas, arancel por reintegro y arancel por exhorto; y Considerando; Primero: Conforme a lo establecido en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso. Segundo: 1] En el presente proceso la parte ejecutante Consorcio Bioconstrucciones interpone demanda de ejecución de laudo arbitral contra Municipalidad Provincia de Hualgayoc - Bambamarca, solicitando: [a] la entidad ejecutada cumpla con quinientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y dos y 19/100 soles [S/598,952.19] derivada del consentimiento de la liquidación final de obra elaborada por Consorcio Bioconstrucciones, de la siguiente forma: [a.1] por la suma de doscientos ochenta y un mil cuatrocientos veinte y 70/100 soles [S/281,420.70], y [a.2] efectúe el pago por la suma de trescientos diecisiete mil

quinientos treinta y uno y 49/100 soles [S/317,531.49], puesto que la factura ya fue presentada según carta de fecha doce de diciembre el dos mil dieciséis; y [b] el pago del cincuenta por ciento de los gastos arbitrales ascendientes a la suma de trece mil setecientos seis y 50/100 soles [S/13,706.50]. Tercero: 1] Los presupuestos procesales son requisitos necesarios exigidos por ley para que pueda ser válido un proceso; y entre ellos, se encuentra la competencia. 2] De esta manera, se tiene que la competencia sólo puede ser establecida por la ley; y que la competencia civil no puede renunciarse ni modificarse, salvo en aquellos casos expresamente previstos en la ley o en los convenios internacionales respectivos [artículo 6° del Código Procesal Civil]. 3] En ese sentido, el artículo 68° inciso 1) del Decreto Legislativo N° 1071 [Ley que norma el arbitraje], establece que la parte interesada podrá solicitar la ejecución de laudo ante la autoridad judicial competente, que no puede ser otro que el juez subespecializado en lo comercial o, en su defecto, el juez civil del lugar del arbitraje o el del lugar donde el laudo debe producir su eficacia, conforme a lo establecido en el inciso 3) del artículo 8° del citado decreto legislativo. Cuarto: 1] De lo actuado en el proceso se advierte: [i] el laudo fue dictado en la ciudad de Lima con fecha diecinueve de setiembre del dos mil dieciséis, en la sede arbitral ubicada en Av. Arequipa N° 1295, Oficina 601, Santa Beatriz - Lima, por el Tribunal Arbitral integrado por Doctor Mario Manuel Silva López, María Esther Dávila Chávez y Raúl Leonid Salazar Rivera; [ii] el laudo consiste en que la entidad ejecutada Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca, efectúe pagos a la entidad ejecutante por los conceptos ahí contenidos como consecuencia de la celebración del contrato de obra. 2] Es decir, se evidencia que el laudo no fue dictado en la ciudad de Chiclayo y la eficacia del laudo, se encuentra representado por el pago que deberá efectuar la Municipalidad de Hualgayoc - Bambamarca a la empresa ejecutante Consorcio Bioconstrucción, quien en el contrato de obra señaló como domicilio uno ubicado en el distrito de Bambamarca], es decir, el lugar de la eficacia del laudo es también la provincia de Hualgayoc - Bambamarca. Quinto: Por lo tanto, la ciudad de Chiclayo no constituye ni el lugar donde se expidió el laudo, así como tampoco, el lugar de eficacia del mismo; no resultado competente este órgano jurisdiccional para conocer la presente demanda, debiendo remitirse al Juzgado de igual clase de la provincia de Hualgayoc a efectos de que asuma competencia respecto de la presente pretensión; debiendo remitirse el expediente a Mesa de Partes de los Juzgados Especializados Civiles de la Provincia de Hualgayoc para su asignación aleatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 36° del Código Procesal Civil, modificado por Ley N° 30292. Estando a lo expuesto, y de conformidad con el dispositivo legal citado; SE RESUELVE: [1] Declarar la INCOMPETENCIA de este Juzgado por razón de territorio; respecto de la demanda interpuesta por CONSORCIO BIOCONSTRUCCIONES contra MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA sobre ejecución de laudo arbitral. [2] REMÍTASE el expediente a Mesa de Partes de los Juzgados Especializados Civiles de Hualgayoc, para su asignación aleatoria. Notifíquese.-

**2° JUZGADO CIVIL****EXPEDIENTE : 01646-2017-0-1706-JR-CI-02****MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES****JUEZ : SOTO BARDALES DE FUSTAMANTE MAGALI JACQUELINE****ESPECIALISTA : DIEZ CANSECO SOLANO CARLOS ALFONSO JESUS****REPRESENTANTE : AGUILAR RIOJAS, VICTOR SAUL****DEMANDADO : CAMPOS CALLE, SUHA****DEMANDANTE : RIOJAS DE AGUILAR, MARIA ADELINDA AGUILAR BURGA, JOSE VICTORIANO****RESOLUCIÓN NÚMERO: SIETE**

Chiclayo, ocho de junio del año dos mil dieciocho.-

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con el presente proceso; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante resolución número seis de fecha siete de marzo del dos mil dieciocho, se declaró la conclusión del proceso por sustracción de la materia del ámbito jurisdiccional respecto del proceso interpuesto por José victoriano Aguilar Burga y María Adelinda Riojas de Aguilar a través de su apoderado Víctor Saul Aguilar Riojas contra Suha Campos Calle, la misma que fue notificada a la parte demandante con fecha 21 de marzo del 2018. SEGUNDO: El inciso 02 del artículo 123 del Código Procesal Civil señala que una resolución adquiere la autoridad de Cosa Juzgada cuando “las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos”. Por su parte, conforme lo dispone el artículo primero de la Resolución Administrativa 372-2014-CE-PJ, corresponde declarar de oficio cuando corresponda los autos de consentimiento de las sentencias y autos que ponen fin al proceso, que no han sido impugnadas en el plazo legal correspondiente. TERCERO: De lo actuado en el presente proceso se advierte que, pese a encontrarse válidamente notificada la parte actora, no se ha interpuesto recurso impugnatorio contra la resolución número seis, pese al tiempo transcurrido, lo que significa que dicho justiciable no tiene nada que alegar y está dando su conformidad. Por tales consideraciones, se resuelve: Declarar CONSENTIDA la resolución número seis de fecha siete de marzo del dos mil dieciocho que declara la conclusión del proceso por sustracción de la materia del ámbito jurisdiccional respecto del proceso interpuesto por JOSÉ VICTORIANO AGUILAR BURGA Y MARÍA ADELINDA RIOJAS DE AGUILAR a través de su apoderado VÍCTOR SAUL AGUILAR RIOJAS contra SUHA CAMPOS CALLE sobre EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES; en consecuencia: ARCHÍVESE el expediente en el modo y forma de ley, devolviendo los anexos a la parte interesada. Notifíquese.

**8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL****EXPEDIENTE : 01536-2017-0-1706-JR-CI-04****MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES****JUEZ : WILLY ARNALDO LOPEZ FERNANDEZ****ESPECIALISTA : SANCHEZ MARCELO JESSICA IVONNE**

**DEMANDADO : COMITE DE COMPRAS LAMBAYEQUE 3 ,  
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA ,  
PROCURADOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIOIN ,  
DEMANDANTE : CUYA PEREZ, DAVID MARTIN**

**Resolución Nro.OCHO**

Chiclayo, once de julio

Del año dos mil dieciocho.-

**AUTOS Y VISTOS;** con el escrito que antecede, presentado por el ejecutante; y, considerando: Primero: Mediante resolución número siete, de fecha veinte de abril del año en curso, se confirió traslado al ejecutante la contradicción formulada y excepción y nulidad. Segundo: Mediante escrito, de fecha veintidós de junio del año en curso, el ejecutante absuelve el traslado en los términos que indica en su escrito, el mismo que lo realiza dentro del plazo de ley, conforme lo dispuesto por el artículo 690°-E, incorporado al Código Procesal Civil, mediante Decreto Legislativo N° 1069, con fecha veintiocho de junio del año en curso. Tercero: Además, conforme al artículo 690°-E del Código Procesal Civil, antes citado, con la absolución de la contradicción o sin ella, se deberá resolver mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento procesal, y pronunciándose sobre la contradicción propuesta, siendo el caso de autos , que si bien la parte ejecutante no ha absuelto la contradicción, si ha absuelto el traslado de la excepción y nulidad; precisándose que para el caso de autos, no es necesario señalar día y hora para la realización de audiencia, para la actuación de los medios probatorios ofrecidos por las partes. Por lo que estando a los considerandos expuestos y de conformidad con el dispositivo legal citado; **SE RESUELVE: TENER POR NO ABSUELTO EL TRASLADO DE LA CONTRADICCIÓN** por parte de la ejecutante **Y POR ABSUELTO DEL TRASLADO DE LA EXCEPCION. DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL, Y NULIDAD DE LA RESOLUCION NUMERO TRES.** Al otrosi digo: por designado al abogado que suscribe. Al otrosi digo: por variado domicilio procesal y casilla electrónica por las que se indica. y conforme al estado del proceso: **PÓNGASE LOS AUTOS A DESPACHO PARA EXPEDIR AUTO FINAL.** Avóquese al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que suscribe por disposición superior. Notifíquese

**8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL**

**EXPEDIENTE : 01537-2017-0-1706-JR-CI-07**

**MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES**

**JUEZ : AGUINAGA HOLGUIN JUAN FRANCISCO**

**ESPECIALISTA : FABRIZIO CARBAJAL BRAVO**

**DEMANDADO : COMITE DE COMPRAS LAMBAYEQUE 3 ,  
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA  
PROCURADOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION  
DEMANDANTE : CUYA PEREZ, DAVID MARTIN**

**RESOLUCIÓN NÚMERO: DOCE****Chiclayo dieciocho de diciembre Del dos mil dieciocho**

AUTOS Y VISTOS, con el escrito que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, los emplazados en un proceso civil tiene derecho a la contradicción, tal como lo prescribe la parte in fine del artículo 2° del Código Procesal Civil; asimismo, en el mismo plazo que tiene para pagar, también puede formular contradicción al mandato de ejecución, sustentándola en la causal establecida en el inciso 2 del artículo 690°- D, del citado cuerpo de Leyes. SEGUNDO: Mediante escrito de once de diciembre del dos mil dieciocho doña Ana Cecilia Chanamé Wong en calidad de Presidente del Comité de Compra Lambayeque 3, formula contradicción a la ejecución por las causales de inexigibilidad de la obligación y la Extinción de la obligación exigida; TERCERO: De la revisión de los autos se puede advertir que los ejecutados se encuentran dentro del plazo que establece la ley para formular contradicción; SE RESUELVE: [1] TENER POR APERSONADA AL PROCESO a doña Ana Cecilia Chaname Wong en calidad de Presidente del Comité de Compra Lambayeque 3 POR FORMULADA LA CONTRADICCION, sustentada en las causales de INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN por señalado su domicilio procesal, lugar en lo sucesivo se le harán llegar las notificaciones de las resoluciones que emita este Juzgado; CONFIERASE TRASLADO a la entidad ejecutante por el término de TRES DIAS a fin de que exponga lo que a su derecho convenga respecto a la contradicción; CONFIERASE TRASLADO de la Nulidad deducida por el termino de TRES DIAS a fin de que expongan lo que su derecho convenga; CONFIERASE TRASLADO la Excepción de incompetencia territorial y la Excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante por el termino de TRES DIAS a fin de que expongan lo que su derecho convenga; notifíquese con las formalidades de Ley.-

**Exp. N° : 2004-2017-0-1706-JR-CO-08****Demandante : JJ GONZAGA E.I.R.L.****Demandado : Municipalidad Provincial de Chiclayo.****Materia : Ejecución de Laudo Arbitral.****Juez : Sandro Omar Aguilar Gaitán.****Especialista Legal: Betty del Socorro Varias Céspedes.****RESOLUCIÓN NÚMERO: SIETE****Chiclayo, veinticuatro de enero del dos mil diecinueve.-**

AUTOS Y VISTOS: DADO CUENTA con el escrito presentado por JJ GONZAGA E.I.R.L.; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante escrito de fecha veintisiete de diciembre del dos mil dieciocho la ejecutante solicita se emita auto final, en razón de haber pasado más de mes y medio que se requirió a la Gerencia de Administración un informe sobre los conceptos que el ejecutante indica le son adeudados, argumentando que disponer se practiquen informes en este estadio es

innecesario pues ya existe un laudo consentido. SEGUNDO: De la revisión de autos se advierte que mediante resolución número SEIS de fecha diez de octubre del dos mil dieciocho [signada erróneamente con el número CINCO], se requirió a la demandada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO para que cumpla con informar a través de su Gerencia de Administración en el plazo de CINCO DIAS sobre los conceptos que el ejecutante indican le son adeudados, bajo apercibimiento de prescindirse de dicho medio probatorios y resolverse con lo obrante en autos. TERCERO: Dicha resolución fue válidamente notificada a la ejecutada; conforme es de verse del cargo de folios noventa y uno, asimismo mediante oficio remitido via courier con fecha treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho se hizo el requerimiento en forma directa, a la Gerencia de Administración; sin embargo pese al tiempo transcurrido, la ejecutada ha hecho caso omiso al mandato judicial. CUARTO: Conforme lo establece el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial “Toda persona y autoridad está obligada a acatar y a dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala”. Por lo que de conformidad con el artículo 50° inciso 1 del código procesal civil que prescribe que es deber de los jueces dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal, debe efectivizarse el apercibimiento decretado; Por las consideraciones expuestas y dispositivos legales citados SE RESUELVE: 1]HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO contenido en la resolución número SEIS de fecha diez de octubre del dos mil dieciocho [signada erróneamente con el número CINCO]; en consecuencia 2]PRESCÍNDASE del medio de prueba informe de la Gerencia de Administración sobre los conceptos que el ejecutante indica le son adeudados; y conforme al estado del proceso REMÍTANSE los autos al despacho del Juez para la emisión del auto final correspondiente. Reasumiendo funciones el Juez titular que suscribe la presente resolución por Disposición Superior. NOTIFÍQUESE.-

#### **8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL**

**EXPEDIENTE: 02290-2017-0-1706-JR-CI-01**

**MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES**

**JUEZ : SANDRO OMAR AGUILAR GAITAN**

**ESPECIALISTA : FABRIZIO CARBAJAL BRAVO**

**DEMANDADO : URTEAGA COSTA, YOLI MAGNA**

**DEMANDANTE : SANTA CRUZ GARCIA, LUZMILA ALTAMIRA**

#### **RESOLUCIÓN NÚMERO: OCHO**

**Chiclayo veintitrés de enero Del dos mil diecinueve**

AUTOS Y VISTOS; el escrito de fecha veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho; y, CONSIDERANDO; PRIMERO: Mediante resolución número siete,

de fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, se expidió auto final el mismo que declaró se lleve adelante la ejecución hasta que la parte ejecutada pague la suma de dieciocho mil novecientos con 00/100 soles, más intereses pactados. SEGUNDO: Dicha resolución se le notificó a la entidad ejecutada Yoli Magna Urteaga Costa en su domicilio real, con fecha diecisiete de diciembre del dos mil dieciocho, conforme consta del cargo de notificación obrante a folios sesenta y cuatro y sesenta y cinco; sin embargo, pese de estar debidamente notificada, la ejecutada en mención no ha impugnado la citada resolución, ni tampoco ha cumplido con honrar su deuda, habiendo vencido el plazo para tal fin. TERCERO: Una resolución queda consentida y adquiere la calidad de cosa juzgada cuando las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos, según lo establece el artículo 123° inciso 2 del Código Procesal Civil. Por lo que estando a los considerandos expuestos, el dispositivo legal citado y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 723° del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 731° del citado dispositivo legal; SE RESUELVE: [1] Declarar CONSENTIDO el AUTO FINAL contenido en la resolución número SIETE, de fecha veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho; en consecuencia: REQUIÉRASE a la ejecutada YOLI MAGNA URTEAGA COSTA cumpla en el plazo de cinco días con cancelar a la ejecutante la suma de dieciocho mil novecientos con 00/100 soles más intereses pactados, mas costos y costas arbitrales conformado por los honorarios del árbitro por la suma de trescientos dólares americanos ( \$ 300.00), gastos administrativos por trescientos dólares americanos ( \$ 300.00) y honorarios profesionales del abogado defensor por la suma de dos mil con 00/100 soles (S/2, 000.00);bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada; Al Otrosí: conforme a lo expuesto PREVIAMENTE cumpla con acreditar la existencia de dicha Medida Cautelar ya que corroborando lo expuesto los numero indicado son diferentes; AVOQUESE al conocimiento del presente proceso el Señor Juez Titular que suscribe; Notifíquese con las formalidades de Ley.-

#### **8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL**

**EXPEDIENTE : 00928-2017-0-1706-JR-CI-07**

**MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES**

**JUEZ : SANDRO OMAR AGUILAR GAITAN**

**ESPECIALISTA : YESSANIA GORDILLO CARBONEL**

**DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROVIDENCIA ,**

**DEMANDANTE : CONSORCIO PROVIDENCIA SIMON CORREA VASQUEZ**

**Chiclayo, 16 de enero del 2019**

**Resolución Número: OCHO.-**

Con los escritos presentados por la demandada; estando a lo petitionado: CONCÉDASE el plazo de UN DIA, a la entidad demandada en la persona de su



representante legal a fin de que cumpla con suscribir el escrito de apelación de fecha 16.11.2018; bajo apercibimiento de rechazarse el escrito de apelación. Al escrito presentado por la demandante: AL principal: ESTÉSE a lo dispuesto en la presente resolución. Al otrosí: Por delegada las facultades de representación a favor del abogado que autoriza su escrito. Al oficio N° 058-2018- AMP.JPLL-CSJAM/PJ-JJZ remitido por el Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Luya, y constancia de notificación que se adjunta: Por cumplido el mandato, Agréguese a los autos. Reasume funciones el señor Juez titular que suscribe por disposición superior. Notifíquese.-

**2° JUZGADO DE PAZ LETRADO CIVIL**

**EXPEDIENTE : 01187-2018-0-1706-JR-CI-03**

**MATERIA : INDEMNIZACION**

**JUEZ : INGRID FIORELLA MENDOZA CIEZA**

**ESPECIALISTA : CESAR MURILLO RAMOS**

**DEMANDADO : SOPLAPUCO VINCHALES, LUIS CARLOS PICHIHUA VILLECAS, EVARISTO EMTRAFAN EXPRESS ,**

**DEMANDANTE : FERNANDEZ HERNANDEZ, KATERINE SUGGEY**

Resolución Nro. TRES

Chiclayo, veintidós de Agosto Del año dos mil Dieciocho.-

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta en la fecha con el presente proceso, proveyendo escrito de contestación de demanda presentado por la Empresa de Transportes y servicios Fermín Ávila Morón Express SAC "EMTRAFAN EXPRESS SAC" y; CONSIDERANDO: PRIMERO.- Mediante resolución número DOS, de fecha veinte de Junio del año en curso, se resolvió admitir a trámite vía proceso sumarísimo la demanda interpuesta por KATERINE SUGGEY FERNANDEZ HERNANDEZ; SEGUNDO.- La parte demandada, Empresa de Transportes y servicios Fermín Ávila Morón Express SAC "EMTRAFAN EXPRESS SAC", debidamente representada por su gerente general Luis Gustavo Chaname Piscoya, mediante escrito con el que se da cuenta de fecha treinta de Julio del año en curso, al amparo del artículo VI del Título Preliminar del Código Sustantivo, concordado con el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, acude a este Órgano Jurisdiccional con la finalidad de ejercitar su derecho de contestación contra la acción interpuesta por la parte demandante; TERCERO.- Conforme se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos, la demandada Empresa de Transportes y servicios Fermín Ávila Morón Express SAC "EMTRAFAN EXPRESS SAC", debidamente representada por su gerente general Luis Gustavo Chaname Piscoya ha cumplido con contestar la demanda dentro del plazo de ley, así mismo ha interpuesto excepción y oposición. Por éstas consideraciones y teniendo en cuenta los artículos 552°, 553° y 554° del Código Procesal Civil. SE RESUELVE: [1] TENER POR CONTESTADA la demanda por parte de la demandada Empresa de Transportes y servicios Fermín Ávila Morón Express SAC "EMTRAFAN EXPRESS SAC", debidamente representada por su gerente general Luis Gustavo Chaname Piscoya, en los términos que precisa y por ofrecidos los medios probatorios que ofrece téngase por señalado su domicilio real y procesal ,

así mismo casilla electrónica N° 11613. [2] TENER POR INTERPUESTA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR en los términos que precisa y por ofrecidos los medios probatorios que presenta [3] TENER POR INTERPUESTA LA OPOSICION CONTRA EL MEDIO PROBATORIO CONSISTENTE EN UNA NUEVA EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA DEMANDANTE y por ofrecidos los medios probatorios que ofrece y advirtiéndose que a la fecha no ha retornado la cedula de notificación dirigida al demandado EVARISTO PICHUVA VILLEGAS no ha sido recabada, RESERVESE la fecha de la AUDIENCIA ÚNICA. Avóquese del conocimiento de la presente causa la señorita Juez que suscribe por disposición Superior. Notifíquese conforme a ley.

**Exp. : 01117-2018-0-1706-JR-CO-08**

**Demandante : Rossani Aranceli Mundaca Sandoval**

**Demandado : Augusto Chimoy Inoñan**

**Materia : Ejecución de garantías reales**

**Juez : Sandro Omar Aguilar Gaitán**

**Especialista : Yessenia Gordillo Carbonel**

#### AUTO DE PAGO

Resolución número: DOS

Chiclayo, nueve de enero del dos mil diecinueve.

**AUTOS Y VISTOS:** Con el escrito de demanda; anexos, arancel por ofrecimiento de pruebas; al escrito de subsanación: téngase presente, así mismo por señalada casilla postal N° 447 y por consignada casilla judicial electrónica a N°11613; y, **ATENDIENDO:** Primero: Conforme lo establece el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, toda persona tiene derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso. Segundo: Según lo establece el primer párrafo del artículo 690° del Código Procesal Civil, está legitimado para promover proceso de ejecución, quien en el título ejecutivo [comprende a los títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, encontrándose el título del presente proceso comprendido en el inciso 10 del artículo 688° del Código Procesal Civil] tiene reconocido un derecho en su favor, contra aquel que en el mismo tiene la calidad de obligado. Tercero: a) Por escritura pública de cesión de derecho mediante dación en pago de fecha trece de abril del año dos mil dieciocho, Orlando Correa Yzquierdo [deudor cedente] cede a favor de Rossani Aranceli Mundaca Sandoval [acreedora cessionaria] el integro del derecho de acreencia a cargo de su deudor Augusto Chimoy Inoñan, obligación que se encuentra garantizada con la hipoteca inscrita en la partida N°P10042362. b) La constitución de la garantía hipotecaria se encuentra contenida en la escritura pública de garantía hipotecaria, de fecha trece de diciembre del año dos mil trece, celebrada por Ysac Orlando Correa Yzquierdo [acreedor-hipotecario] con Augusto Chimoy Inoñan [hipotecante]; a fin de garantizar obligaciones tales como el préstamo personal por la suma de diez mil y 00/100 soles

[S/10,000.00]. Cuarto: 1] La garantía hipotecaria recae sobre el inmueble Urbano, Lote N°12 de la Manzana “39” del Pueblo Tradicional Mochumi, distrito de Mochumi, provincia y departamento de Lambayeque, hasta por la suma de treinta mil y 00/100 soles [S/30,000.00]; monto que se tendrá en cuenta en la etapa de ejecución propiamente dicha. 2] Encontrándose la garantía debidamente inscrita en el asiento 00003 de la Partida N° P10041333 del Registro de la Propiedad Inmueble - Registro de Predios de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo. Quinto: La obligación puesta a cobro es el préstamo personal por la suma de diez mil y 00/100 soles [S/10,000.00] contenido en la escritura pública de fecha trece de diciembre del año dos mil trece y liquidado según estado de cuenta de saldo deudor. Sexto: Asimismo, cumple también con los requisitos establecidos en el artículo 720° del Código Procesal Civil, pues se ha anexado: [i] el documento que contiene la constitución de la garantía hipotecaria; [ii] el documento que contiene la obligación garantizada; [iii] el estado de cuenta de saldo deudor -conforme a las reglas fijadas en el Sexto Pleno Casatorio-; [iv] tasación comercial actualizada; y [v] el certificado de gravamen correspondiente; pudiendo el acreedor exigir el cumplimiento de la obligación dineraria en proceso de ejecución. Por lo que, estando a las consideraciones precedentes, corresponde emitir el presente MANDATO DE EJECUCIÓN, en consecuencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 721° del Código Procesal Civil; SE RESUELVE: [1] ADMITIR A TRÁMITE, vía PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN, la demanda interpuesta por ROSSANI ARANCELI MUNDACA SANDOVAL contra AGUSTO CHIMOY INOÑAN sobre ejecución de garantías. [2] Dictándose MANDATO EJECUTIVO, notifíquese al ejecutado a efectos de que en el plazo de TRES DÍAS cumpla con pagar a la ejecutante la suma de ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 61/100 SOLES [S/11,243.61] derivado del préstamo personal; más intereses; bajo apercibimiento de sacarse a remate el bien dado en garantía. [3] Al primer otrosí: TÉNGASE presente; al segundo otrosí: OTÓRGUESE la representación al letrado que autoriza la presente demanda. [4] Se requiere a la PARTE EJECUTADA para que en el posterior escrito que presenten, CUMPLAN con SEÑALAR su domicilio procesal electrónico [casilla electrónica asignada por el Poder Judicial], casilla postal judicial, bajo apercibimiento de imponérsele multa de DOS URP, en caso de incumplimiento; conforme a lo establecido en la R.A. N° 440-2015-P-CSJLA/PJ. Reasumiendo funciones el Juez Titular. - Notifíquese.-

**RESOLUCIÓN NÚMERO : OCHO.-**

**EXPEDIENTE N° : 00371-2018-0-1706-JR-CO-08**

**DEMANDANTE : CONSORCIO LENIN**

**DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO**

**MATERIA : EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL**

**JUEZ SUPERIOR PONENTE : SEÑOR ROJAS DÍAZ**

Chiclayo, veinticuatro de enero del dos mil diecinueve.

AUTOS Y VISTOS; con el voto escrito dejado por el señor Rojas Díaz, con el voto escrito dejado por el señor Rojas Díaz, Rojas Díaz, quien a quien a la fecha se encuentra de vacaciones la fecha se encuentra de vacaciones se encuentra de vacaciones e interviene por haber i e interviene por haber integrado el Colegiado el dí ntegrado el Colegiado el día de la vista de la causa, de la vista de la causa, de la vista de la causa, cuya copia certificada se anexa y forma parte de la cuya copia certificada se anexa y forma parte de la presente r presente resolución acorde a lo estipulado por el esolución acorde a lo estipulado por el artículo artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder; 149 de la Ley Orgánica del Poder; y CONSIDERANDO:- i.-ASUNTO: Es objeto del grado el recurso de apelación en contra de la Resolución Cuatro, del dieciocho de octubre del dos mil dieciocho, la que obra de folios ciento veintiuno a ciento veintidós, en virtud de la cual se rechaza la demanda en los seguidos por Consorcio Lenin en contra de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. ii.- ANTECEDENTES: ii.1.- Por escrito de folios setenta y siete a ochenta y tres, Consorcio Lenin interpone demanda de ejecución de laudo, petición que es declarada inadmisibile por Resolución Uno, del ocho de mayo del dos mil dieciocho, la que obra a folios ochenta y cuatro. ii.2.- Por Resolución Dos, del veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, de folios noventa y uno, se concede al demandante dos días para que anexe el documento en el que se acredite que en el proceso arbitral se le corrió traslado a la demandada y se determinó los conceptos de intereses y costos. ii.3.- Por Resolución Tres, del veinte de agosto del dos mil dieciocho, que obra de folios ciento diez a ciento once, se concede a la demandada un día para que precise cual es el documento que contiene la liquidación de intereses costos y costas. iii.- RAZONES QUE SUSTENTAN LA DECISION: iii.1.-La demandante no ha cumplido con subsanar las omisiones advertidas y que la demanda no cumple con los requisitos previstos en el artículo 689° Código Procesal Civil. iii.2.-Que, la liquidación de intereses cotas y costos recién ha sido solicitado por la parte demandante a los miembros del Tribunal Arbitral, por escrito del seis de setiembre del dos mil dieciocho, y que el pronunciamiento del Juzgado está supeditado a lo que se resuelva ebn dicha entidad. iv.-FUNDAMENTOS DE LA APELACION: iv.1.- Que, lo que se está cuestionando es lo resuelto en el laudo arbitral, trasgrediendo lo previsto en el artículo 4.3 del Decreto Legislativo 1071. iv.2.- El laudo arbitral en ejecución contiene una obligación cierta, expresa y exigible. Los costoshonorarios profesionales-se han determinado en el acta de instalación, en el sentido de que si una de las partes asumiera el pago de los anticipos de los honorarios ante la renuncia no demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir exigiendo vía ejecución del laudo y el reembolso de los intereses legales respectivos. v.- FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR: v.1.- Que, el recurso de Apelación, según el artículo 364° del Código Procesal Civil, tiene por objeto "...que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente". El substrato constitucional del dispositivo de referencia se encuentra en el artículo 139.6 de la Constitución, esto es, el Principio de la Instancia Plural. v.2.- Que, la jurisdicción arbitral, está reconocida en la Constitución Política. Al respecto el artículo 139.1 establece: "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 1. La unidad y

exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.” v.3.- Que, los efectos del Laudo, según el Artículo 59° del Decreto Legislativo 1071, es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento a las partes desde su notificación, además; produce los efectos de cosa juzgada y es ejecutable por ante la autoridad judicial dentro de los quince días de notificada con el laudo, rectificaciones, interpretaciones, integraciones, exclusiones del laudo, cuando corresponda. v.4.- Que, los laudos arbitrales, conforme al Artículo 688.2 del Código Procesal Civil, tienen mérito ejecutivo. Por su parte el artículo 689 de la norma en referencia establece que procede ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa, exigible y líquida o liquidable. v.5.- Conforme aparece de lo actuado, el A-quo, mediante a las resoluciones 1, 2 y 3, ha requerido, en su orden, Resolución Uno, de folios ochenta y cuatro, a que la ejecutante precise en su petitorio, en relación a los puntos ii y iii toda vez que en el laudo materia de ejecución no se determina el monto a pagar; en la Resolución Dos, de folios noventa y uno, se requiere a la ejecutante adjunte el documento mediante el cual en el proceso arbitral se le corrió traslado a la entidad demandada y si determinó monto de estos conceptos ello a efecto de determinar si la obligación materia de cobro es líquida o liquidable; Por Resolución Tres, del dieciocho de octubre del dos mil dieciocho, folios ciento veintiuno a ciento veintidós, se rechaza la demanda, bajo el argumento que recién se está requiriendo al tribunal, escrito del seis de setiembre del dos mil dieciocho, se liquiden intereses y costos y que dicha liquidación debió anexarse a la demanda. v.6.- En tal orden legal de cosas la controversia, para admitir la demanda, versa en determinar si las obligaciones puestas a cobro –intereses legales y la liquidación de costos-deben ser “liquidadas” o “liquidables” como requisito para admitir la demanda. Al respecto, conforme el artículo 746 del Código Procesal Civil, dichos conceptos, por su propia naturaleza y de ser el caso, se determinan su monto o se “liquidan” al término del proceso, se ha incurrido en nulidad en los términos del artículo 50.6, 122.3 y 171 del Código Procesal Civil. DECISION Por tales consideraciones, los señores Jueces de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque:, declararon NULA la resolución cuatro, del dieciocho de octubre del dos mil dieciocho, la que obra de folios ciento veintiuno a ciento veintidós, que rechaza la demanda en los seguidos por Consorcio Lenin contra Municipalidad Provincial de Chiclayo, e insubsistente la resoluciones uno, dos y tres, que declara inadmisibile la demandada y ORDENARON se expida nueva resolución conforme los considerandos precedentes, teniendo en cuenta el mérito de lo actuado y la normatividad que regula los procesos de ejecución y los DEVOLVIERON. Intervienen los señores Carrillo Mendoza, Rojas Díaz Intervienen los señores Carrillo Mendoza, Rojas Díaz y Terán Arrunátegui Carrillo Mendoza, Rojas Díaz y Terán Arrunátegui por z y Terán Arrunátegui por reconfirmación de Sala para el r reconfirmación de Sala para el presente año judicial. presente año judicial. Notifíquese conforme a ley.-

Sres.

Carrillo Mendoza.

Terán Arrunátegui.

EXPEDIENTE : 02423-2018-0-1706-JP-CI-02  
MATERIA : EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL.  
DEMANDANTE : MULTIBIZ SERVICE EIRL.  
DEMANDADO : BERBICATO VALERIO.  
JUEZ : GARCIA MAYORGA JUAN FRANCISCO.  
ESPECIALISTA : OLIDEN ALVITRES CLAUDIA NATHALY.

#### AUTO DE ADMISIBILIDAD

##### RESOLUCION NUMERO DOS:

Chiclayo, cinco de noviembre de dos mil dieciocho

**AUTOS Y VISTOS:** Con el expediente remitido por la Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado Civil de Chiclayo; y **CONSIDERANDO:** PRIMERO: Según escrito presentado en fecha cinco de septiembre del dos mil dieciocho, la empresa Multi Service EIRL, representada por su Gerente General Melly Beatriz Cannata Rázuri interpone demanda de Ejecución de Laudo Arbitral, con la finalidad de que se cumpla con lo establecido en el Laudo Arbitral de fecha diez de agosto del dos mil dieciocho emitido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque que resolvió declarar fundada la pretensión de desalojo del bien inmueble ubicado en la calle Leoncio Prado número setecientos cuarenta, quinto piso, del distrito y provincia de Chiclayo en el plazo de seis días, así como dispone el pago de dos mil cien soles por pago de arriendos devengados, de tal manera que el demandado cumpla con desalojar el inmueble sub materia y realizar el pago de arriendos. SEGUNDO: Que, toda persona tiene derecho a acudir al órgano jurisdiccional a efectos de recibir tutela efectiva para la resolución de sus conflictos; sin embargo, para que el Juez pueda calificar positivamente una demanda, la misma deberá cumplir con los requisitos a que se contraen los artículos cuatrocientos veinticuatro y cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Civil y no deberá encontrarse inmersa en causales contenidas en los artículos cuatrocientos veintiséis y cuatrocientos veintisiete del mismo cuerpo de leyes, referidos a la inadmisibilidad e improcedencia de la misma. TERCERO: Que, el artículo seiscientos ochenta y ocho del Código Procesal Civil, señala que “solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes: (...) 2) Los laudos arbitrales firmes...”, y el artículo seiscientos ochenta y nueve, sobre los requisitos comunes prescribe “procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser, además, líquida o liquidable mediante operación aritmética”; CUARTO: En el caso de autos, el demandante solicita la ejecución del Laudo Arbitral N° 09-2017-CCA/CCPL de fecha diez de agosto del dieciocho, que resuelve el desalojo del bien inmueble ubicado en la calle Leoncio Prado número setecientos cuarenta, quinto piso, del distrito y provincia de Chiclayo en el plazo de seis días, así como dispone el pago de dos mil cien soles por arriendos devengados; advirtiéndose que dicho documento reúne los requisitos establecidos en el considerando anterior, es decir es cierta, expresa y exigible. QUINTO: Además de los requisitos señalados en el quinto considerando, la demanda cumple con los requisitos de admisibilidad y procedibilidad, establecidos en los artículos ciento treinta y uno, cuatrocientos veinticuatro, cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Civil; por estas consideraciones SE RESUELVE: ADMITIR a trámite en la VÍA DEL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN la demanda interpuesta por MULTIBIZ SERVICE EIRL, debidamente representada por Nelly Beatriz Cannata Rázuri, contra VALERIO BERVICATO, sobre EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL. Por ofrecido los medios probatorios. En CONSECUENCIA, DICTAR MANDATO EJECUTIVO contra VALERIO BERVICATO debiendo notificársele al demandado en su domicilio real señalado en autos para que DENTRO DEL TÉRMINO DE SEIS DÍAS CUMPLA con DESOCUPAR el bien inmueble ubicado en la calle Leoncio Prado número setecientos cuarenta, quinto piso, distrito y provincia de Chiclayo y CUMPLA con el pago de dos mil cien soles por concepto de arriendos devengados, más el pago de costas y costos del presente proceso; BAJO APERCIBIMIENTO de iniciarse la ejecución forzada en caso de incumplimiento. TÉNGASE por señalada la Casilla Electrónica N° 6279. NOTIFÍQUESE conforme a ley.

**EXPEDIENTE : 02118-2018-0-1706-JR-CI-03**  
**MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES**  
**JUEZ : SANDRO OMAR AGUILAR GAITAN**  
**ESPECIALISTA : FABRIZIO CARBAJAL BRAVO**  
**DEMANDADO : EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI SAA ,**  
**DEMANDANTE : AUTO TRUJILLO E.I.R.L. ,**

**RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES**

Chiclayo, diez de enero del año dos mil diecinueve.-

AUTOS Y VISTOS: con el escrito de subsanación de fecha tres de diciembre del dos mil dieciocho; y ATENDIENDO: PRIMERO: Mediante resolución número Dos de fecha veintisiete de noviembre del dos mil dieciocho, se declaró inadmisibile la demanda; con la finalidad que la entidad ejecutante cumpla reintegrar arancel judicial, precise y acredite que el laudo quedo firme y señale casilla judicial postal. SEGUNDO: 1] Por escrito de subsanación de fecha tres de diciembre del dos mil dieciocho, la entidad ejecutante, cumple parcialmente con lo requerido; habiendo omitido precisar su casilla judicial postal. 2] Además se advierte que no ha adjuntado el ANEXO 4 del Acuerdo Transaccional privado entre las partes de fecha treinta de abril del dos mil dieciocho que contiene el cronograma y forma de pago acordado por la partes. 3] Por lo tanto la parte demandante deberá adjuntar dicho anexo. TERCERO 1] Por lo que, la entidad ejecutante deberá ADJUNTAR lo requerido y señalar su casilla judicial postal; por lo que SE RESUELVE: [1] CONCEDER plazo adicional de UN DÍA a la parte ejecutante, a efectos de que cumpla con lo antes indicado, bajo el mismo apercibimiento decretado en la resolución precedente. Avóquese al conocimiento de la presente causa al señor Juez Titular que autoriza al haber reasumido funciones. Notifíquese.-

**EXPEDIENTE : 02316-2018-0-1706-JR-CI-05**  
**MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES**  
**JUEZ : AGUINAGA HOLGUIN JUAN FRANCISCO**  
**ESPECIALISTA : YESSSENIA GORDILLO CARBONEL**  
**DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO ,**  
**DEMANDANTE : NILSON GUEVARA BECERRA CONSORCIO LOS LAURELES ,**

**AUTO ADMISORIO / MANDATO DE PAGO**

**RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS**

Chiclayo, diez de diciembre del año dos mil dieciocho.-

AUTOS Y VISTOS; el Oficio y Expediente remitido al haber declarado su Incompetencia el Quinto Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, remitido con fecha diecinueve de octubre del dos mil dieciocho; anexos, arancel por ofrecimiento de pruebas; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Conforme a lo establecido en el

artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso. SEGUNDO: Acorde a lo señalado en el artículo 690° del Código Procesal Civil, modificado por el Decreto Legislativo 1069, está legitimado para promover ejecución quien en el título ejecutivo – cualquiera de los contenidos en el artículo 688° del mismo código- tiene reconocido un derecho en su favor, contra aquél que en el mismo tiene la calidad de obligado, en este caso, se pretende la ejecución de un laudo. TERCERO: Asimismo, según lo establecido en el artículo 689° del citado código, procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa, exigible, y cuando se trata de dar suma de dinero, además es líquida o liquidable. CUARTO: El artículo 68° del Decreto Legislativo Nro. 1071, establece que la autoridad judicial, por el sólo mérito de los documentos referidos en el numeral anterior [copia del laudo arbitral, de sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones, y en su caso, de las actuaciones de ejecución efectuada por el tribunal arbitral], dictará mandato de ejecución para que la parte ejecutada cumpla con su obligación dentro de un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ejecución forzada. QUINTO: El laudo arbitral [contenido en la resolución de fecha seis de noviembre del dos mil diecisiete], emitido por el Tribunal Arbitral conformado por Hugo Sologuren Calmen, Elvira Leonor Martinez Coco y Horacio Cánepa Torre, declaró: [i] Infundada la excepción de caducidad interpuesta por la entidad; [ii] Infundada la primera pretensión principal de la demanda; [iii] Fundada la primera pretensión subordinada a la primera pretensión principal de la demanda, analizada en el segundo punto controvertido, en consecuencia declara aprobada en parte la liquidación de obra elaborada por el Contratista pero con un saldo ascendente a la suma de Quinientos veinticinco mil ciento treinta y siete con 87/100 soles [S/525,137.87]; [iv] Funda la segunda pretensión principal de la demanda analizada en el Primer Punto Controvertido; [v] Fundada en parte la Tercera Pretensión Principal de la demanda; reconociendo al contratista el pago por la renovación por mayor tiempo al previsto en el Contrato de la cartas fianzas de fiel cumplimiento y Fiel Cumplimiento por el Adicional 1 y 2, ascendente a la suma de Sesenta y cuatro mil ochocientos veinticinco con 65/100 soles [S/64,825.65] incluido el IGV, adicionando la suma de S/47.08 (cuarenta y siete con 08/100 soles) más IGV por cada día que continúe desfasándose la devolución de las cartas fianzas a las financieras; [vi] Fundada en parte, la Cuarta Pretensión Principal de la demanda analizada en el Quinto Punto controvertido; [vii] Infundada la Quinta Pretensión Principal de la demanda analizada en el Sexto Punto Controvertido, por tanto no corresponde que la Entidad asuma el pago total de los costos del proceso arbitral, siendo que dichos costos deben ser asumidos por ambas partes; [viii] Ordena a la entidad la de los montos cancelados por el Contratista por el concepto de pago de honorarios arbitrales en subrogación de la Entidad. SEXTO: 1] Del petitorio de la demanda, se advierte que la parte demandante solicita: [a] la cancelación de la deuda ascendente a seiscientos cuarenta mil novecientos setenta y cuatro con 00/100 soles. 2] El laudo arbitral quedó consentido conforme al sentido de la resolución número diecisiete de fecha dieciséis de febrero del dos mil dieciocho. SETIMO: Conforme a lo establecido en la Ley N° 30229 y Ley N° 30293, se



concluye que cuando se efectúa el señalamiento del domicilio procesal, este debe hacerse por los abogados de las partes procesales (sean estos o no de oficio), quienes deben consignar obligatoriamente el domicilio procesal, el cual está constituido por la casilla electrónica otorgada gratuitamente por el poder Judicial y la casilla judicial postal constituido por la casilla física de la Oficina de Casillas judiciales del distrito judicial, conforme lo dispuesto por el artículo 155 I de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, debe tenerse en cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 155-E de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el mismo que indica que sin perjuicio de la notificación a través de la casilla electrónica, se deberá de notificar solo mediante cédula las resoluciones judiciales que contengan el emplazamiento de la demanda, la declaración de rebeldía y la medida cautelar, así como la sentencia o auto que ponga fin al proceso en cualquier instancia, lo cual se realizará en la casilla postal o física asignada por esta Corte Superior de Justicia de Lambayeque que funciona en la Central de Notificaciones ubicada en el primer piso de la sede central en la Avenida José Leonardo Ortiz N°155, Chiclayo. Además en mérito a la disposiciones establecidas en la Resolución Administrativa N° 1021-2018-P-CSJLA/PJ, la misma que indica que el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) tiene por finalidad agilizar los trámites de los procesos judiciales, así como dotar de mayor seguridad en el diligenciamiento de notificaciones judiciales, racionalización de recursos humanos y logísticos, el cual se verá reflejado en ahorro de tiempo, por lo cual deben ser exigidas como requisito de admisibilidad, al calificar la demanda, contestación de demanda o el apersonamiento, el señalamiento de casilla electrónica y la casilla judicial postal como domicilio procesal de las partes; lográndose que se efectivice en tiempo real en beneficio del administración de justicia y de los justiciables en general, con la posibilidad de reducir la sobrecarga procesal, adoptando medidas de ecoeficiencia; razón por la cual es que deberá requerirse que la entidad ejecutante para que señale la misma, y para que en lo sucesivo indique en todas las demandas que presente, además de su domicilio electrónico, su casilla judicial postal. Siendo esto así, se advierte además que la demanda cumple con los requisitos generales establecidos en los artículos 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil; razones por las cuales, y de conformidad con el artículo 690° C del Código Adjetivo, SE RESUELVE: [1] ADMITIR A TRAMITE, en la vía del PROCESO UNICO DE EJECUCION, la demanda interpuesta por Nilson Guevara Becerra apoderado de CONSORCIO LOS LAURELES contra MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO sobre ejecución de laudo arbitral. [2] DICTÁNDOSE MANDATO DE EJECUCION; SE DISPONE notificar a la entidad ejecutada en el domicilio que se indica en el escrito de demanda, para que en el plazo no mayor de CINCO DIAS, cumpla con pagar, a la ejecutante la suma total de SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 08/100 SOLES [S/640,974.08]; bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. [3] Al primer otrosí: TÉNGASE por designado como abogado defensor al letrado que autoriza la presente demanda. [4] Requírase a la entidad ejecutante para que dentro del plazo de tres días cumpla con presentar casilla judicial postal, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento. [5] Se requiere a la PARTE EJECUTADA para que en el posterior escrito que presenten, CUMPLAN con SEÑALAR su domicilio procesal electrónico [casilla

electrónica asignada por el Poder Judicial], bajo apercibimiento de imponérsele multa de DOS URP, en caso de incumplimiento; conforme a lo establecido en la R.A. N° 440-2015-P-CSJLA/PJ, la misma que dispone que a partir del siete de setiembre del dos mil quince el empleo del SINOE en forma obligatoria; así como casilla judicial postal. Notifíquese.-

**8° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL**

**EXPEDIENTE : 00255-2017-19-1706-JR-CO-08**

**MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES**

**JUEZ : SANDRO OMAR AGUILAR GAITAN**

**ESPECIALISTA : FABRIZIO CARBAJAL BRAVO**

**DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO**

**DEMANDANTE : PASSALACQUA VICTORIA, LUZ MARINA**

**RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES**

Chiclayo diecisiete de enero Del dos mil diecinueve

Dado cuenta con el oficio y cuaderno de apelación remitido por la Segunda Sala Civil; CUMPLASE LO EJECUTORIADO pásese copias certificada de la Resolución superior al principal; ARCHIVESE el presente cuaderno por Secretaria; Interviene el Especialista que da cuenta por disposición superior; notifíquese con arreglo a Ley.-

**EXPEDIENTE : 02765-2018-0-1706-JR-CI-05**

**MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES**

**JUEZ : SANDRO OMAR AGUILAR GAITAN**

**ESPECIALISTA : FABRIZIO CARBAJAL BRAVO**

**DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO A CARGO DEL DEL  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ,**

**DEMANDANTE : CASTRO ROJAS, JORGE ANTONIO**

**AUTO DE INADMISIBILIDAD**

**RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS.**

Chiclayo, diez de enero del dos mil diecinueve.-

AUTOS Y VISTOS: con el oficio y expediente remitidos por el Quinto Juzgado Especializado Civil de Chiclayo con fecha diecisiete de diciembre del dos mil dieciocho; y, ATENDIENDO: PRIMERO: La calificación de la demanda, implica la verificación por parte del juez que en esta concurren los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, de allí que toda demanda para ser admitida a trámite debe cumplir con los requisitos de fondo y forma establecidos en los artículos 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil. SEGUNDO: 1] La parte ejecutante, ha presentado arancel por la suma de quinientos sesenta con 25/100 soles [S/560.25], sin embargo, según la R.A. N° 036-2018-CE-PJ, se estableció que el arancel a

pagarse por solicitudes de ejecución de laudos, es el que corresponde a las solicitudes de medida cautelar. 2] Por lo que, teniendo en cuenta que la pretensión demandada supera las tres mil quinientas unidades de referencia procesal [3500 URP], es que corresponde pagar un arancel por la suma de seis mil ochocientos cuarenta y siete con 50/100 soles [S/6,847.50]; debiendo REINTEGRAR el arancel por ejecución de laudo arbitral, pues el adjuntado corresponde a otro concepto. TERCERO: 1] El ejecutante deberá PRECISAR a quién se emplazará con la demanda pues señala que como pretensión principal se disponga por mandato ejecutivo que PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones cumpla con la ejecución del Laudo; además solicita se sirva notificar por cédula con el mandato de ejecución al Procurador Público a cargo de los asuntos judicial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2] Razón por la cual deberá precisar a quién se emplazará en calidad de ejecutado con la presente demanda; debiendo señalar, de ser el caso, el domicilio en la ciudad de Lima tanto de PROVIAS NACIONAL como del Procurador Público a cargo de los asuntos judicial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; adjuntando arancel por exhorto fuera del distrito judicial, correspondiente. Estando a las consideraciones precedentes y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 426° del Código Procesal Civil; SE RESUELVE: [1] Declarar INADMISIBLE la demanda interpuesta por JORGE ANTONIO CASTRO ROJAS contra PROVIAS NACIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES sobre ejecución de laudo arbitral. [2] Conceder plazo de TRES DIAS al demandante a fin que subsane los defectos advertidos; bajo apercibimiento de rechazarse la demanda y archivar el proceso. Notifíquese.



PODER JUDICIAL  
Del Perú

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL**  
**Unidad de Servicios Judiciales**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Chiclayo, 11 de enero de 2019

**CARTA N° 002 -2019-USJ-GAD-CSJL/VPJ**

Señor:

**RAÚL EDUARDO LOPEZ DAMIÁN**

Prolongación Bolognesi n° 119, departamento 302

Reque.-

De mi consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, a su vez, dar respuesta a su solicitud presentada el 28 de diciembre de 2018 a través de la cual solicitó, al amparo del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley n° 27806, información sobre "(...) datos estadísticos de expedientes ingresados por ejecución de laudos arbitrales desde el 2015 a la actualidad".

A fin de atender su pedido, se solicitó información al área poseedora de la información (Coordinación de Estadística), oficina que remitió la información solicitada y que se adjunta a la presente en 2 folios.

Sin otro en particular y esperando haber atendido su solicitud, me despido cordialmente.

Atentamente,



**LIZETH ARTEAGA MUÑOZ**

Funcionaria Responsable de atender las solicitudes formuladas al amparo de la Ley  
n° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Corte Superior de Justicia de Lambayeque

<sup>1</sup> Mediante correo electrónico del 03 de enero de 2019.

December 1995 - November 1996

Período	Cantidad de Representantes
1913	23
2018	81
2017	47
2008	37
2006	168

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

## 2018

**Abstract**

01187-2013-40-1706-8-00-01  
00-433-2013-40-1706-8-00-01  
00-433-2013-40-1706-8-00-01  
00-433-2013-40-1706-8-00-01

## 1.

## 1

01785-2018-0-0706-09-0-01  
01785-2018-0-0706-09-0-01

